

El Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza.

Sus inicios: 1921-1926

María Pilar Rodrigo Catalán

Ángela Cenarro Lagunas, directora

Trabajo Fin de Máster, Convocatoria de septiembre

Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea

Curso 2013-2014.

Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras

ÍNDICE

INTRODUCCION	página 2
1.-ESTADO DE LA CUESTIÓN	página 10
2.-ANÁLISIS DE FUENTES	página 32
2.1.- <i>Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A. H. P. Z.)</i>	
A.- Expedientes del Tribunal Tutelar de Menores.	
B.- Aforos y Varios. Inspectores. Impuesto 5%: 1928-1946.	
2.2.- <i>Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España:</i>	
El periódico <i>El Sol</i> , edición Madrid, período 1918-1926.	
2.3.- <i>Archivo y Hemeroteca Municipal de Zaragoza (A.H.M.Z.)</i>	
Los periódicos regionales <i>Heraldo de Aragón</i> y <i>El Noticiero</i> , período 1921-1926.	
3.- LOS TRIBUNALES PARA NIÑOS EN ESPAÑA	página 42
4.- EL TRIBUNAL PARA NIÑOS DE ZARAGOZA	página 71
CONCLUSIONES	página 92
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	página 95

Introducción

“Las niñas y los niños somos como los insectos – pequeños, fuertes y tenaces.”
(Kids Aktiv, Alemania, 2001)

“Es necesario que cambiemos de idea: ya no hay que proteger a los niños sino sus derechos.”(Richard Farson, Birthrights, 1974).

El origen de los Tribunales Tutelares de Menores se produce en un contexto, nacional e internacional, entre finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en el que, las ideas regeneracionistas sobre la protección a la infancia se extienden y priman entre médicos, higienistas, pedagogos, criminalistas... Se trata de sacar al menor del sistema represivo aplicado a los adultos para que le sea aplicado un sistema regenerador, de manera tal que pueda ser reinsertado a la sociedad y no se convierta en delincuente permanente. Se hizo posible la existencia de una jurisdicción especial, que vino a significar la inaplicación de penas y castigos para los menores delincuentes, para quienes, los Tribunales para Niños adoptaban acuerdos de distinto signo que, en algunos casos y, no eran la mayoría, significaban el internamiento en una institución de corrección y reforma.

Los factores principales que propiciaron el nacimiento de esta nueva jurisdicción, fueron según la doctrina de nuestro país, “el nacimiento de un nuevo derecho tutelar y la ineficacia del sistema represivo aplicado a los menores” (Martín Ostos)¹. La jurisdicción tutelar de menores se estableció según Rafael De Pina², “como consecuencia del nacimiento de un Derecho que puso de manifiesto la ineficacia del sistema represivo aplicado al tratamiento de la delincuencia infantil. Es una jurisdicción especial que no ha encontrado contradicciones”. Esta jurisdicción especial obedece según Miguel Fenech³ “a la menor edad de los infractores, en cuyo caso se considera oportuno sustituir la represión, que utilizan los Tribunales ordinarios, por la educación y reforma de los infractores”.

¹ Es opinión mayoritaria, según José Martín Ostos: *Jurisdicción de menores, naturaleza y competencia*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1973, “que nos encontramos ante una jurisdicción especial, aunque son pocos los que justifican esta afirmación, limitándose a afirmar este carácter de acuerdo con el derecho positivo”

² *Manual de Derecho Procesal Penal*, Reus, Madrid, 1934, p. 333.

³ *Derecho Procesal Penal*, vol. I, Labor, S.A. Barcelona, 1952, p. 171.

La necesidad de una justicia para niños y, por tanto, la existencia de unos tribunales especiales, se empezó a plantear en el contexto político y social de principios del siglo XX, desde una doble perspectiva; por un lado la de higienistas y filántropos, protectores de la infancia, que clamaban por sacar al niño de las cárceles, donde, creían que realmente se corrompían hasta llegar a ser “delincuentes profesionales”; y, por otro, el de la “gente de orden”, que fijaba su mirada en una realidad marcada por el aumento de la delincuencia en las ciudades, ligada ésta al incremento de la población, la industria y los barrios marginales; y las consecuencias de todo ello: el miedo a ver a los menores vagando por las calles, con total libertad, cometiendo pequeñas raterías unos, otros mendigando. De esta manera se plantea la necesidad de su vigilancia y control desde diferentes vertientes.

Incluso, algunos de esos protectores de la infancia, como Julián Juderías⁴ o Antonio Gómez Mesa⁵, estaban convencidos de que la causa principal del aumento de la criminalidad infantil estaba en el modo de vida de las familias de las clases populares, a las que se culpabilizaba del abandono en que vivían sus hijos y de la delincuencia de los menores.⁶ La visión de la clase obrera era totalmente negativa, considerada viciosa y, por tanto, incapaz de proporcionar a sus hijos alimentación suficiente, educación y ni siquiera la atención necesaria; acusada de obligar a sus vástagos a mendigar e incluso robar y prostituirse.

La escasa o nula atención de los padres – por la necesidad que tenían de trabajar ambos fuera de casa—, la inasistencia a la escuela, al estar fuera del control paterno, las pésimas condiciones de las viviendas, lanzaban a los hijos de las clases trabajadoras a las calles, donde (decían los protectores de la infancia), se “corrompían”, terminando en delincuentes profesionales, si no se procedía a una intervención a tiempo. Surge así la figura del *golfo*, la que hace referencia a estos niños que pasan el día vagando por las calles, cometiendo pequeñas raterías. Algunos trabajan desde edad temprana, aunque los trabajos no duran mucho tiempo; es frecuente la práctica de la venta ambulante o venta de periódicos, con la que ganarse unas pesetas, para lo que los reformistas llaman “vicios”, como ir al cine o comprar golosinas, los más *golfillos*, para fumar, algunos

⁴ *El problema de la infancia en España*, 1917

⁵ *Un problema social: protección y corrección de la adolescencia*, 1932

⁶ “En el contexto del proceso de industrialización, la familia sufre una honda transformación en sus estructuras que le obliga a cambiar su papel en el control de sus hijos, llegando, incluso, a situaciones extremas de abandono”, RUIZ RODRIGO, Cándido: *Protección a la infancia en España. Reforma social y educación*, Universitat de València, Valencia, 2004.

incluso, beber. Unos menores que disfrutaban de una excesiva libertad y unos hábitos prematuros y que, en el callejear y vagabundear, frecuentan malas compañías, algunas ya conocidas de la cárcel y el Reformatorio.

Serán estos menores, detenidos por los Guardas de Vigilancia o Guardias de Seguridad mientras vagan por las calles, los que inauguren las actuaciones del Tribunal para Niños de Zaragoza.

Crecían las denuncias del movimiento proteccionista⁷ por la despreocupación y olvido de la “sociedad” de esta infancia abandonada y marginal. Por ello, de forma paulatina, se fue imponiendo la necesidad de crear órganos competentes que sirvieran de tutelaje del menor y *juzgasen sus delitos* de forma independiente de la justicia ordinaria, como los Tribunales para Niños, creados en otros países de nuestro entorno. La actuación del Derecho Penal sobre menores necesitaba soluciones más pedagógicas que penalizadoras, y por tanto llevar a la desaparición de las cárceles como lugares de reclusión y castigo de los más jóvenes, a los que habría que facilitarles una irrenunciable educación y reintegración social. Se trataba de hacer del Código Penal una obra humanitaria y benéfica, haciendo salir al menor de su ámbito competencial, e incompatibles los conceptos *Niño* y *Cárcel*, como pedía Ramón Albó.⁸

Todas estas ideas provenían de las *Nuevas teorías penalistas* que apuntaban más al hombre que al crimen y la sociedad, para defenderse del delincuente, debía servirse de medios correctivos y educativos, más que intimidatorios. El penalista Dorado Montero, abanderado de estas nuevas concepciones, introductor de la pedagogía correccionalista, insistiría en que se trataba de seguir un camino que “requería mayor atención a las circunstancias de cada acto, a los factores que intervenían en el delito, pero especialmente atender a la realidad del ‘supuesto’ delincuente, menor de edad y a

⁷ Los reformadores consideraban que los niños y niñas necesitaban protección, cuidados y orientación y que no habían alcanzado la madurez física y, por este motivo, estaban más horrorizados por las condiciones en que vivían que por el hecho de que los adultos también viviesen en esas mismas condiciones intolerables. Una combinación de factores (sentir lástima por los niños, asociar la actitud moral con la caridad y reconocer que la industrialización y la urbanización estaban desorganizando la vida de los pobres) propició que apareciera el movimiento de salvación de la infancia en Europa y EEUU. Dicho movimiento pretendía paliar el sufrimiento inmediato de los niños y niñas de origen pobre, así como abogar por una reforma social que previniese el sufrimiento futuro. Este fue el factor que distinguió a la filantropía de los antiguos modelos de beneficencia de los que éticamente derivaba. Los filántropos del período moderno querían adoptar un enfoque científico para paliar los impactos de la pobreza y tratar así sus causas intrínsecas. Centrarse en la infancia era parte de ese interés por la raíz del problema.

⁸ “El niño y la cárcel”, *Revista Pro Infantia*, 160, 1925.

sus condiciones personales”. Se confiaba así en la posibilidad de la reeducación, especialmente en los primeros momentos de la juventud. Son las teorías de la *Moderna ciencia penal* que tomó nuevos rumbos de la mano del citado Dorado Montero, Salillas, Olóriz, Aramburu y Cadalso, entre otros criminólogos, penólogos y penitenciaristas, y que serían las se aplicarían en el funcionamiento de los futuros Tribunales para Niños. “El niño no podía ser considerado agente de materia penal, por lo que había que sacarle del sistema represivo para aplicarle una pedagogía especializada”, decía Ramón Albó.

Existía, tanto una clara falta de voluntad política, como una falta de medios económicos y técnicos, lo que impidió que se prodigasen instituciones correctoras, mientras la cárcel seguía siendo el lugar común para el encierro preventivo de menores y el cumplimiento de penas de los adultos. Más iniciativa privada que pública—los reformatorios en España eran una excepción—.

En España, los Tribunales para Niños se ponen en funcionamiento en 1920 (Bilbao y Tarragona), tras la promulgación de la *Ley de organización y atribuciones de los Tribunales para Niños* en 1918. Su función debía ser atender tanto a los menores delincuentes, como a aquellos que sufrían abandono o malos tratos (es la que se llama función tutelar, protectora o tuitiva). La historia de la infancia delincuente y abandonada, la infancia que transita por el Tribunal para Niños, en este período, es compleja, muy compleja. Enlaza con la de sus familias, las clases populares de principios del siglo XX, algunas cercadas por el hambre y la miseria; también con la historia de la escuela, de la educación en este país, obligatoria para los infantes a partir de la Ley de 1902; con el trabajo infantil, y la consecuente explotación de los menores. Una historia de marginación que algunos quisieron realmente que dejara de existir, otros, simplemente, que desapareciera de los espacios públicos, de las calles.

Objetivos, hipótesis de partida

Mi objetivo es analizar, a partir, de las fuentes primarias del Tribunal Tutelar de Zaragoza, hasta qué punto se llevan a la práctica y de qué manera los ideales proteccionistas y correccionalistas que estaban presentes en el diseño de esta jurisdicción especial.

Mi hipótesis de partida es que, los Tribunales para Niños nacen con unos planteamientos, provenientes del reformismo y del regeneracionismo, en los que se considera al “niño delincuente” como desamparado, sujeto de derechos y de protección y, por tanto, sujeto también de una educación preventiva y correctora, de una pedagogía correccionalista.

Sin embargo, su evolución, primero teórica, basada en el positivismo penalista, y luego práctica, lleva a la aplicación de los planteamientos psicopedagógicos derivados de ese positivismo y se conforma toda una red institucional (compuesta de escuelas, asilos, reformatorios y Tribunales para Niños), que llevó, a los menores abandonados y delincuentes, a ser privados de libertades que antes tenían y compartían con los adultos y, desde el punto de vista jurídico, a que les fueran negadas las mínimas garantías legales de un proceso, que fueron principios básicos del sistema liberal, apartados por la aplicación de los principios del positivismo triunfador. En definitiva, a ser “sujetos pasivos”, o incluso “objetos”, pues los que vigilan son otros, de una vigilancia y control social, en la que los Tribunales para Niños serán una pieza fundamental.

El presente trabajo puede ubicarse, en perspectiva historiográfica, dentro de la llamada “*Historia social*” y, tal como la planteamos, de la Historia “desde abajo”, porque, creo, se demostrará con el análisis de los expedientes documentados, que en el período estudiado, los niños susceptibles de cárcel o de tribunal tutelar, son los hijos de las clases populares, los hijos de la miseria, derivada de las desigualdades sociales que se generan, tanto por el avance del desarrollo industrial en el primer tercio del siglo XX y un incipiente, pero feroz capitalismo, como por los cambios producidos en la urbanización de las ciudades, que llevan a la formación de barrios o guetos separados para las clases trabajadoras, no integradas en el tejido social. Este trabajo combina el estudio de autores y temas que no han sido objeto de estudio exclusivo de la Historia o, más bien, que apenas han sido objeto de estudio por parte de historiadores, sino de juristas, médicos, sociólogos..., lo que da a este trabajo un aliciente excepcional, aunque suponga un esfuerzo añadido, que nos capacita para realizar un estudio multidisciplinar, que resulta sumamente enriquecedor⁹

⁹ Sobre perspectivas historiográficas: CASANOVA, Julián: “La Historia desde abajo”: la versión radical de la historia social”, en *La historia social y los historiadores*, Biblioteca de Bolsillo, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 125-139 y PASAMAR, Gonzalo: “Los historiadores y la Epistemología”, en *La Historia Contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos*, Síntesis, Madrid, 2000, pp. 122-140.

Respecto a la relevancia social del trabajo, o más bien del proyecto, porque tiene una perspectiva a largo plazo, con la elaboración de la tesis doctoral, la mirada está dirigida a una parte de la población, casi siempre olvidada, la infancia, y más invisible aún, la infancia perteneciente a los márgenes de la sociedad, a la más pobre. El trabajo entendido como la recuperación de un relato histórico..., no sé si la recuperación o más bien, la incorporación de unos sujetos en la historia..., con la pretensión, si es posible, de eliminar el sello estigmatizador que siempre les ha acompañado; acordar la libertad para todos y archivar los expedientes, pero no provisional, esta vez y para siempre, también la libertad definitiva.

Este trabajo pretende indagar sobre los orígenes del Tribunal para Niños de Zaragoza, desde su constitución en octubre de 1921 hasta el final del año 1926, tanto desde la perspectiva jurídico institucional, como la de los discursos y debates públicos que, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en distintos ámbitos, comenzaron a articularse sobre la conveniencia de que la justicia diera un trato diferenciado al menor delincuente, así como la necesidad de arbitrar distintos mecanismos de protección pública y privada. Tales discursos estaban profundamente imbricados con las nuevas concepciones sobre la infancia, la familia y la maternidad. La fecha final del trabajo viene marcada por dos razones: la primera, por estudiar el posible impacto que la modificación de la *Ley de Tribunales Tutelares para Niños*, de agosto de 1925, pudo tener en la práctica del tribunal de Zaragoza; y, segunda, por el hecho de que llegar hasta la primera década de trabajo del tribunal, que era el planteamiento inicial, nos pareció inviable, por el excesivo número de expedientes incoados en ese período, 2.852.

La investigación se articula en torno a cuatro grandes hilos conductores:

1.- La Historia de la infancia, el menor visto como sujeto histórico y, por tanto, “objeto” de protección. Dentro de esta vía, interesa sobremanera la historia social —la marginación, el abandono, la delincuencia, el trabajo infantil—. A partir de la consulta selectiva de los expedientes, se pretende averiguar el perfil social de los menores acogidos por el Tribunal, y de sus familias, con el fin de elaborar una estadística sobre la tipología de las faltas/delito cometidas, Acuerdos dictados por el Tribunal; contexto social y familiar de los menores y criterios de aplicación diferenciada por razón de sexo.

2.- Los discursos elaborados en el ámbito jurídico, sobre el origen de los Tribunales Tutelares, la consideración del menor y los cambios en su conceptualización, los debates y discusiones legislativas. La influencia de los Simposios internacionales y los Congresos nacionales sobre criminología en la legislación protectora.

3.- La estrecha relación entre los tribunales y el ámbito de la educación y la pedagogía; también la relación entre la educación—sobre todo, cuando esta se hace obligatoria en ciertos niveles de edad— y el trabajo infantil, de manera que queden englobados los distintos aspectos que atañen al menor.

4.- La relación entre las distintas culturas políticas y la manera de abordar la especial problemática del menor. Los Tribunales Tutelares nacieron con vocación proteccionista y se sostuvieron, en principio, gracias a las aportaciones privadas de personas que creían en esa visión sobre la infancia. Se trata de analizar quienes sostenían estas instituciones y dónde estaban encuadradas política y socialmente esas personas, que provenían tanto del catolicismo social como del krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. En este sentido, será interesante conocer quiénes eran miembros de los Tribunales Tutelares, en su calidad de presidentes, secretario o vocales, porque su visión “global” sobre la protección, reforma, corrección y educación de la infancia se verá reflejada en los Acuerdos a tomar en los expedientes tramitados.

Nos enfrentamos a una investigación de carácter multidisciplinar, como se ha dicho, ambiciosa, por tanto, permitida en parte por la formación académica de la autora de este trabajo, quien a su título de Licenciada en Historia, aporta el de Licenciada en Derecho, hecho que, creemos, ha ayudado tanto al proceso de análisis de fuentes en los Archivos del Tribunal Tutelar, como al del estudio de los aspectos jurídicos de la investigación y la relación de los tribunales con otros ámbitos, objeto de este trabajo.

Agradecimientos

Para terminar, quiero apuntar unas líneas dedicadas a agradecimientos. Desde los inicios de la Licenciatura tuve la fortuna de encontrarme a profesores con la suficiente garra y empuje como para hacernos levantar del asiento con sus explicaciones y soflamas, cuando no pocos “azotes verbales”. Con algunos ha existido una especial empatía y he recibido de ellos, además de excelente formación, consejo y apoyo. Si mi dedicación a la Historia la tenía clara desde la adolescencia, ellos la reforzaron en momentos difíciles para los estudios de Humanidades. A todos ellos, gracias. También

palabras de agradecimiento para el profesorado del Máster de Historia Contemporánea, por su labor docente y profesional y por aumentar mi pasión por la Historia Contemporánea, Historia Actual o Historia del Presente, base inspiradora de toda tarea investigadora. Especial mención a los coordinadores del Máster, Alberto Sabio y Pilar Salomón y a la jefa de Negociado, Inmaculada Buj, siempre “al quite” para que la tramitación burocrática resulte más sencilla. Agradecimientos también al personal de Bibliotecas, la de Humanidades “María Moliner”, la de la Facultad de Ciencias Sociales y la de la Facultad de Derecho, por la ayuda en la localización y préstamos de la bibliografía necesaria. También mi más sincero agradecimiento a la directora del Archivo Histórico Provincial, Maite Iranzo y a todo el personal de sala del citado archivo. Asimismo mi agradecimiento a la encargada del Archivo-Hemeroteca municipal, Betania Canellas. Con todo mi cariño, y más, a mis compañeros de carrera, Máster, alegrías y tristezas, Daniel Aquillué, Sandra Blasco, Irene Cisneros y Pablo Aguirre.

A mi Directora del Trabajo Fin de Máster, Ángela Cenarro, que, para mi fortuna, será también mi Directora de la futura Tesis Doctoral. Ella forma parte de la nómina de profesores que reforzaron mi pasión por la Historia y me inspiraron para continuar la labor de investigación. Le debo mucho, la concepción del Trabajo Fin de Máster y de la futura Tesis Doctoral, entre otras. Creyó en mí, apostó. ¡Ganamos!. Y digo ganamos porque me han sido concedidas las ayudas al personal investigador y a la contratación predoctoral, tanto la del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la famosa FPU, como la del Gobierno de Aragón. Obviamente, sólo disfrutaré de una de ellas.

A mi familia, a José María, y a mi madre, con especial cariño y ternura. A ti mamá, te dedico este trabajo, por el que tanto interés tenías, cómo por todo lo que yo hacía, y del que no has podido ver sus frutos, como tampoco tener la alegría de saber que voy a continuar investigando. A todos, gracias.

2.- Estado de la cuestión

El estudio de los Tribunales Tutelares de Menores, por su implicación, que atañe a la infancia, pero también a la familia, la escuela y otras instituciones, en fin a la tutela del Estado, los enfoques son diversos, quiero decir, el interés viene desde distintas disciplinas y por tanto las perspectivas de análisis y posibilidades de aproximación son múltiples y variadas, a veces enfrentadas, ya desde antes del nacimiento de la propia institución, cuando se reclamaba su existencia. La atención a la infancia surge en toda su complejidad con la constitución de las sociedades industriales en Occidente, el desarrollo de la denominada “*familia moderna*” burguesa, y las características que la definen, la implantación del sistema escolar por el Estado liberal y el papel que este Estado jugará en las políticas de protección social. Protección de la infancia, una infancia casi recién descubierta como sujeto histórico activo y que pronto pasaría a ser sujeto pasivo de las derivaciones de ese *proteccionismo*, como estandarte del futuro “*estatuto de la infancia*”.

En este apartado resulta relevante distinguir por un lado las obras publicadas en la época estudiada, más o menos coetáneas a la implantación de los Tribunales para Niños, o cuando ya hubo una cierta experiencia en el funcionamiento de estos tribunales; por otro las formulaciones contemporáneas, la mayoría críticas con el sistema de tribunales tutelares, hasta el punto de hacerlos desaparecer¹⁰, como ha sucedido en España y en otros muchos países. Anotar, no obstante, que el espíritu crítico con la obra de estos tribunales existió desde el inicio de su funcionamiento.

Consecuencia del interés resaltado, fueron muchas las publicaciones coetáneas o inmediatamente anteriores a la instauración de los tribunales para niños, o inmediatamente posteriores que quisieron “fotografiar” los resultados que se iban obteniendo con las instituciones reeducadoras y reformadoras. La mayoría de ellas eran obras de juristas, médicos o pedagogos inmersos de lleno en el proceso reformista.

¹⁰ La existencia de una jurisdicción especial de menores, al margen de la jurisdicción ordinaria, sin ofrecer las garantías mínimas de un proceso y del derecho de defensa, habían llevado, con el Texto Refundido de 1948 a la arbitrariedad y a la ineficacia de las medidas tutelares, a la vez que se enfrentaba con los principios consagrados en la nueva Constitución aprobada en diciembre de 1978.

Para empezar, es importante destacar las obras de **Pedro Dorado Montero (Salamanca, 1861-1919)**, penalista y criminalista, “representante máximo del derecho protector de criminales”, introdujo en España las teorías de la Moderna ciencia penal (el positivismo jurídico), las teorías correccionalistas sobre el tratamiento del menor, la prevención y reforma frente a la represión (pedagogía correccional). Teorías consideradas fundamentales para la puesta en marcha de los tribunales para niños en España, aunque moriría sin llegar a ver esta obra en funcionamiento. Sus obras más reconocidas, *Bases para un nuevo derecho penal* (1902) y *El derecho protector de los criminales* (1913), dan base a la *Teoría Correccionalista*: “El Estado debe proteger al delincuente de la reacción de la sociedad y de su ignorancia para castigar. ¿Por qué? Porque el delincuente es un incapaz para una vida jurídica libre. El delito no se comete por voluntad libre sino por otras causas que el Estado debe combatir. La pena no debe ser retributiva sino correctiva de la voluntad criminal en base a un estudio psicológico y no en base al delito. Se debe corregir, también, en base a la personalidad del autor, incluso se debe permitir la aplicación de azotes. El tratamiento del interno debe ser individual, en base a la peligrosidad criminal. La pena debe impedir delitos futuros (por eso es derecho protector de criminales, lo que lleva a una creencia férrea en la reforma y educación de los menores). El juez, el fiscal y los abogados conforman un ‘equipo de cura criminal’, parecido al de la jurisdicción de menores, al que deben acudir el autor del delito y sus familiares. Si es necesario se debe dejar a un lado el Código Penal para corregir al delincuente”¹¹.

Las de **Julián Juderías y Loyot (Madrid, 1877-1918)**, historiador y sociólogo, que estuvo desde 1904 hasta su muerte vinculado al Instituto de Reformas Sociales, investigando y comparando el trato que se daba en distintos países a cuestiones como la delincuencia juvenil, los tribunales de menores, la mendicidad, la prostitución y la trata de blancas; el mismo año ingresó en la Real Academia de la Historia, y entre sus obras, figuran: *La infancia abandonada. Leyes e instituciones protectoras*, 1912, *La juventud delincuente: leyes e instituciones que tienden a su regeneración*, 1912, y *El problema de la infancia obrera en España*¹². **Eugenio Cuello Calón (Salamanca, 1879-1963)**, jurista, catedrático de Derecho Penal en las universidades de Barcelona y Madrid,

¹¹ Aquí el autor introduce la subjetividad del tratamiento, que veremos en la actuación de los tribunales tutelares. Se produce la unión de la teorías reformadoras y correccionalistas con las positivistas;

¹² En sus obras refleja sus profundas convicciones regeneracionistas; Julián Juderías tardó en aceptar las teorías prácticas del positivismo criminal, del *degeneracionismo*.

participa del espíritu protector y correccional del niño delincuente —que dejaba de ser considerado como culpable, para ser definido como desamparado— como sujeto de la educación preventiva y correctora, muy involucrado en la instauración de los tribunales tutelares y en el debate anterior y coetáneo sobre si era mejor la existencia de la figura del Juez único o la de los Tribunales colegiados, deja en su obra claramente expuesto: “Yo soy partidario del Tribunal colegiado”¹³. Destacar además su obra *Tribunales para niños*, 1917. **Ramón Albó y Martín (Barcelona, 1872-1955)**, sociólogo y abogado penalista, perteneciente junto a Giner de los Ríos y Dorado Montero, al grupo de juristas que se ocuparon de la recepción en España del correccionalismo en derecho penal, introduciendo los términos de una pedagogía correccionalista basada en planteamientos psicopedagógicos, miembro de la Asociación General para la Reforma Penitenciaria en España, presidió la *Visita de Niños Presos*¹⁴ que dio lugar al *Patronato de Menores Abandonados y Presos*¹⁵, miembro del *Consejo Superior de Protección a la Infancia* y Presidente del Tribunal para niños de Barcelona desde su fundación hasta la instauración de la República, por desacuerdos en las novedades introducidas. En 1940, cuando el régimen franquista reactive la actividad de los Tribunales Tutelares, Albó fue nombrado Juez de Menores de Barcelona. Publicó varios libros: *Corrección de la infancia delincuente*, 1906, *Los Tribunales para niños*, 1922, y *Seis años de vida del Tribunal Tutelar para niños*, 1927, entre otros. Las obras o *Memorias* escritas de los Presidentes de Tribunales para Niños, sobre el propio tribunal en el que actúan, hay que leerlas con prevención.

Antonio Gómez Mesa, jurista, fue Presidente del Tribunal para niños de Madrid, con una visión más abierta y pragmática, que se plasma en su extensa obra, a destacar: *Protección a la infancia y a la adolescencia*, 1930, *Un problema social: protección y corrección a la adolescencia (Tribunales tutelares de menores)*, 1932, quien en esta obra, página 35, opta por un Tribunal con Juez único especial en contra de los Tribunales colegiados que venían funcionando, *Sobre el menor delincuente (un ensayo sociológico)*, 1934 y *Los Tribunales Tutelares de Menores en España: historia, objeto, sujeto, implantación, crítica*, 1934. **Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839-1915)**, pedagogo, filósofo y ensayista, uno de los introductores en España de las teorías

¹³ *Criminalidad infantil y juvenil*, 1934, op. cit., p. 115.

¹⁴ Instituciones privadas de corrección y reforma existentes en Barcelona que, con el tiempo, recibirían subvenciones de Ayuntamientos y Diputaciones.

¹⁵ Instituciones privadas de corrección...

correccionalistas, creador y director de la *Institución Libre de Enseñanza*, e impulsor de las *Misiones Pedagógicas*, escribió, entre otros, *La pedagogía correccional o patológica*, 1916¹⁶. La pedagoga **Alicia Pestana (Santarém, 1860-1929)**, humanista portuguesa, impulsora y secretaria de *El protectorado del niño delincuente*, institución que, al amparo de la Institución Libre de Enseñanza, funcionó entre 1916 y 1926, acogiendo a niños “amenazados de muerte moral”, según ella misma y que reflejó su actividad en la obra del mismo título, *El protectorado del niño delincuente*, Madrid, 1925. Una obra anterior refleja su pensamiento reformador y correccionalista, *Tendencias actuales en la tutela correccional de los menores*, 1916. En los artículos publicados en el *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, da a conocer los tribunales y tutela correccional de menores en varios países¹⁷. Ensalza el trabajo norteamericano en el que encuentra un trabajo ya sistematizado; “valora en él, por una parte, el distanciamiento del clásico y viejo formulismo criminal, con la consiguiente atención al procedimiento puramente civil que entiende las circunstancias sociales y la corrección de condiciones ambientales, el cuidado y protección del niño; y recalca, por otra, su importante y decisiva función educativa”¹⁸.

Los trabajos de los que fueron primer Presidente del TTM de Zaragoza, el médico **Patricio Borobio Díaz (Santiago de Compostela, 1856-1929)**, catedrático de Enfermedades de la Infancia en la Universidad de Zaragoza, plasmó sus impresiones y las actividades del tribunal que presidía en, *Tribunal para niños de Zaragoza, Memoria 1921-1923* y *Tribunal Tutelar para niños de Zaragoza, Memoria 1925-1926*, obras en las que no sólo expone su experiencia al frente del tribunal, sino su propia visión sobre la reforma y corrección física, moral y religiosa de los menores. Una visión desde la perspectiva del catolicismo social, avanzada, seguidora de las teorías correccionalistas, que se transformarían en positivismo penal, siguiendo las teorías de la **herencia y el medio** como causas que predisponen al delito. Su visión sobre la función de los tribunales tutelares, en la práctica diaria que le tocó vivir, era bastante positiva, salvo en lo tocante a la falta de medios, tanto personales como materiales, que, sin pudor,

¹⁶ Tenía un laboratorio propio de criminología y se dejó imbuir de las teorías de la Ciencia penal positivista, de la mano de Dorado Montero.

¹⁷ PESTANA, Ana: “La tutela correccional de menores” en B.I.L.E., 685, 866, 867 (1917), 103-111, 129-139, 170-174; “Tribunales para niños” en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 699 (1918) 184-186, entre otros.

¹⁸ FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: “Perspectiva histórica de la protección a la infancia en España”, en Historia de la educación, 3, 1984, pp. 195 y 196.

denuncia en sus *Memorias*. Como se ha dicho antes, hay que leer estas obras con cierta prevención. Y el vocal del tribunal y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza **Inocencio Jiménez Vicente (Zaragoza, 1876-1941)**, una de las grandes figuras aragonesas del catolicismo social y uno de los pioneros nacionales de la previsión social, escribió *Los Tribunales Tutelares de Menores*, 1932, en la que, de forma detallada, explica cómo llegaron a formarse estos tribunales especiales, funcionamiento interno, procedimiento, sin ocultar su preferencia por el Juez único de carrera, frente al Tribunal colegiado, acompañado de especialistas.

Casi todas ellas tienen en común, lo que también unía a sus autores, defensores del correccionalismo y la reforma, la defensa de los derechos de la infancia, su protección y tutela y, una vez en funcionamiento los Tribunales para Niños, la falta de crítica hacia los mismos y los establecimientos de reforma. En realidad, en estas obras todo son parabienes y elogios para los hacedores de hombres de bien para el futuro, salvo para solicitar más medios para el buen funcionamiento de los mismos. En esto no les faltaba razón, pues en todos los Tribunales para Niños, se puede exceptuar Madrid y Barcelona, faltaban las instituciones y medios auxiliares previstos en la legislación. Parece lógico, teniendo en cuenta que algunos de ellos estuvieron directamente vinculados o fueron miembros de esos tribunales.

Durante décadas el interés por los temas de la infancia o desapareció o se mantuvo oculto en los despachos, porque apenas salió a la luz ningún trabajo, salvo los dirigidos desde el Ministerio de Educación para demostrar la “evidente” evolución positiva de la escuela en este país. Y si la infancia no era tema de interés, menos la perteneciente a las clases populares, que era, en definitiva, el objeto y sujeto tanto de los tribunales para niños como de las instituciones de reforma.

Será en los años ochenta en España, en los setenta en otros países, que la cuestión de la infancia desprotegida (se hablará, ya veremos, *de la infancia en peligro* y *de la infancia peligrosa*), deviene en uno de los fenómenos más relevantes, en el ámbito de la cuestión social, por el que se interesan especialistas en distintas disciplinas, principalmente desde las perspectivas jurídica, sociológica, pedagógica y psicológica. Más que de corrientes historiográficas, en este caso, se podría hablar de enfoques o perspectivas diversas con las que las diferentes disciplinas abordan el problema de la infancia y todo lo que le rodea: la familia, la escuela, el trabajo, el ambiente, sus

circunstancias, la asistencia social... Los historiadores no van a participar de este entusiasmo hasta finales de los años noventa, con algunas aportaciones en Revistas científicas, con la excepción, casi exclusiva, de los historiadores José M^a Borrás Llop y Cándido Ruiz Rodrigo, a los que se unirá Irene Palacio Lis.

Es ahora, creo yo, el gran momento de los historiadores, cuando han abierto camino, entrando por primera vez en los archivos de los Tribunales Tutelares de Menores, examinando los expedientes generados por ellos, como lo ha hecho Marta Puig Ávila en el Tribunal para niños de Barcelona, analizando 1.068 expedientes de los diez primeros años de vida del Tribunal (1921-19131) y Carme Agustí Roca en el Tribunal Tutelar de Menores de Lleida, analizando los 845 expedientes abiertos entre 1939 y 1945.

La tendencia hacia lo social¹⁹ que experimentó, hace décadas, la ciencia histórica, ha supuesto, en la mayoría de los países, una respuesta a los tradicionales silencios historiográficos que, en el caso de la infancia marginada y trabajadora, resultaban especialmente significativos. En España, hasta fechas muy recientes, no se han elaborado estudios de síntesis sobre la protección infantil, salvo casos puntuales. Destacan los trabajos sobre la infancia marginada y la problemática laboral infantil, que, como ámbito de investigación, no son novedosos en la actual historiografía general española, está escasamente atendida en la pedagógica, salvo excepciones, que se apuntarán. Sin embargo, no es poco el interés que parece tener en la perspectiva de la Historia de la Educación, al tratarse de un asunto que afectó, y afecta, a un colectivo amplio de menores²⁰.

La marginación infantil y su correlato, la explotación laboral, se contextualiza en un proceso de acción socioeducativa del que forma parte, como ponen de manifiesto las obras²¹, de Cándido Ruiz Rodrigo, Félix Santolaria Sierra, Jesús Palacios González,

¹⁹ Véase las Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social en Castillo, S (coord.), *La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas*. Siglo XXI, Madrid, 1991.

²⁰ Las obras de Philippe Ariès: *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*, Taurus, Madrid, 1987 (edición en español) y Lloyd DeMause: *Historia de la Infancia*, Alianza Editorial, Madrid, 1977 (traducción española), impulsaron, durante la década de los sesenta, nuevas líneas de investigación en torno a la Historia de la Infancia, área temática en la que incluir tanto el problema del trabajo infantil como el educativo.

²¹ RUIZ RODRIGO, Cándido: *Protección a la infancia en España: reforma social y educación*, Universitat de València, Valencia, 2004; SANTOLARIA SIERRA, Félix: *Marginación social y educación. Historia de la Educación Social en la España Moderna y Contemporánea*, Ariel, Barcelona, 1997; PALACIOS GONZÁLEZ, Jesús: *Menores marginados Perspectiva histórica de su educación e integración*, Ed. CCS, Madrid 1997; PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: *Redimir la*

Irene Palacio Lis y Ruiz Rodrigo, Pedro Trinidad Fernández, “La infancia delincuente y abandonada”, 1996. José M^a Borrás Llop, especializado en la temática del trabajo infantil, ha escrito numerosos artículos en revistas y libros colectivos.

Desde la ciencia jurídica

La historiografía procesal debatió ampliamente, en el pasado, sobre la naturaleza de los Tribunales Tutelares de Menores; era opinión mayoritaria su naturaleza de jurisdicción especial; otros establecían su naturaleza de jurisdicción especializada dentro de la jurisdicción ordinaria y una tercera consideración era la de su carácter de instancia administrativa. Este tema quedó resuelto hace tiempo a favor de la consideración de su naturaleza de jurisdicción especial y sobre la autonomía del denominado *derecho tutelar del menor*²². Advierten que *el proceso tutelar* es aquél que está dirigido única y exclusivamente a la corrección y reforma del menor ante su conducta irregular o antisocial o ante la posibilidad de esa conducta (acción preventiva). Sin embargo, los especialistas en derecho procesal no encontraron razón alguna que justificase la atribución a los tribunales tutelares de los casos del *indebido o defectuoso uso del derecho de guarda y educación del menor*, “porque los sujetos a los que se dirige en esos supuestos no son los menores, sosteniendo que esa materia debiera corresponder a los tribunales ordinarios, y concebida o en cuadrada como una actividad perteneciente a la jurisdicción voluntaria y no contenciosa”²³.

Entendido lo anterior como una crítica del sistema de los tribunales tutelares, no es la única, añadiendo la inexistencia de derecho de defensa real, porque la defensa era personal, sin la intervención de Procurador ni Abogado. Y se aprecia, además, un exceso de poder en manos del juzgador, “un juzgador que hasta hace poco tiempo era designado por el ejecutivo entre personas que no eran necesariamente de la carrera judicial”. Otros, no son partidarios de la intervención del abogado, señalando mejor la existencia de la figura del Promotor de Menores, “de intervención obligada en todo procedimiento ante el

inocencia. Historia, marginación infantil y educación protectora, Universitat de Valencia, Valencia, 2002; TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro: “La infancia delincuente y abandonada”, EN BORRAS LLOP José M^a (edit) *Historia de la Infancia en la España Contemporánea. 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp. 461-513; BORRAS LLOP, José M^a: *El trabajo infantil en España, 1700-1950*, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona-Icaria Editorial, Barcelona, 2014.

²² D’ANTONIO, Hugo: “La autonomía procesal del derecho de menores”, *Revista de Estudios Procesales*, n° 7, 1971, p.45

²³ MARTÍN OSTOS: José: *Jurisdicción de menores, naturaleza y competencia*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1993.

Tribunal Tutelar”²⁴, lo que supondría una garantía más tanto para los menores como para el propio órgano jurisdiccional. En cualquier caso, no existió figura alguna, garante de los derechos de los menores.

No se puede hablar de historiografía actual de derecho penal o criminal en lo que se refiere a los Tribunales Tutelares. Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, no existe discusión alguna sobre los mismos porque la citada norma los hizo desaparecer como jurisdicción especial y con ello desaparecieron, poco a poco, los Tribunales de Menores, el de Zaragoza en 1992, para pasar a la jurisdicción ordinaria como Juzgados de Menores, dentro de la jurisdicción penal.

La historiografía jurídica que proviene del Derecho del Trabajo y la Historia del Derecho, es la que cuenta con un mayor número de trabajos y nómina de autores. Además, hay que tener en cuenta que la legislación existente sobre el trabajo infantil²⁵, es tan abundante que casi constituye una parcela propia dentro del Derecho laboral. Félix Suárez, y José Martínez fueron los pioneros, a los que han seguido Antonio Soto, Manuel Carlos Palomeque López, Alfredo Montoya, Fernando Lozano y M. I. Ramos Quintana.

Hay que destacar una obra pionera desde las ciencias jurídicas, la de **Esther Giménez-Salinas i Colomer (Barcelona, 1949)**, catedrática de Derecho penal y Criminología de la Facultad de Derecho de ESADE, fue rectora de la Universitat

²⁴ MENDIZÁBAL OSÉS: Luis: *Introducción al Derecho Procesal de Menores*, Instituto de la Juventud, Madrid, 1974.

²⁵ SUÁREZ GONZÁLEX, Fernando *Mujeres y menores ante el Contrato de trabajo* Instituto de Estudios Sociales, Madrid, 1967; MARTÍNEZ VIVOT, Julio José: *Trabajo de menores y de mujeres*, Ediciones Depalma, Madrid, 1964; SOTO CARMONA, Álvaro: *El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936)*, Anthropos Editorial, Barcelona, 1989; PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos: *Derecho del trabajo e ideología*, Tecnos, Madrid, 1995; MONTOYA MELGAR, Alfredo: *Ideología y lenguaje en las leyes laborales españolas (1873-1978)*, Civitas, Madrid, 1992; LOZANO LARES, Francisco : *La regulación del trabajo de los menores y jóvenes*, Mergablum, Sevilla, 2000; RAMOS QUINTANA, María Isabel: “El trabajo de los menores. En torno al artículo 6”. En VV.AA., “El Estatuto de los Trabajadores veinte años después”, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 100, pp. 291 y ss., 2000.

Ramón Llull y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es miembro del Comité Científico de Política Criminal del Consejo de Europa, en su obra, *Delincuencia juvenil y control social*, 1981, compara, en el estudio de los acuerdos de los Tribunales Tutelares, las variables *delito-medida*, en las que se aprecia el grado de subjetividad o arbitrariedad del tribunal, al tener en cuenta los antecedentes del menor (no delictivos necesariamente) y su familia y no la infracción cometida, que puso ya de relieve la crisis del sistema tutelar y asistencial.

Desde la sociología

Los estudios más recientes han invertido los términos del discurso tradicional, sólo centrado, a partir de la visión progresista, en las bondades de las instituciones tutelares. **Anthony Platt**, sociólogo, ha sido profesor en la *the University of Chicago*, la *University of California (Berkeley)* y actualmente profesor emérito en la *California State University* (Sacramento), miembro de la Editorial Board of Social Justice, en su trabajo *Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia*, de 1982, analiza el movimiento de los pioneros de la justicia de Menores en los EEUU, el movimiento redentor y filantrópico, con que nació en Chicago la red institucional de tratamiento de menores y tuvo sus consecuencias más directas en los niños pobres urbanos. Dice Platt, “El hecho de que adolescentes ‘problema’ fueran presentados como ‘enfermos’ o ‘casos patológicos’, de que los aprisionaran ‘por su propio bien’ y les endilgaran el vocabulario paternalista, los exceptuaron de los procesos penales, no modificó las experiencias subjetivas de dominio, restricción y castigo” y añade, “es una ironía que la solicitud obsesiva de la familia, la Iglesia, los moralistas y los administradores del bienestar infantil sirviera para privar a los niños de las libertades que anteriormente habían compartido con los adultos, y para negarles la capacidad de iniciativa, responsabilidad y autonomía. La ‘invención’ de la delincuencia consolidó el estatus social inferior y la dependencia de los jóvenes de la clase baja”.

Con los mismos planteamientos negativos sobre el funcionamiento, los resultados y las consecuencias que sobre los menores tenían los tribunales tutelares, se pronunció **Gaetano De Leo (Pola, 1940-2006)**, psicólogo y profesor de psicología jurídica y social en la *Università degli Studi di Bergamo*, en su obra de referencia, *La justicia de menores*, de 1985, con el Epílogo de Carlos González Zorrilla, “La justicia

de menores en España”, plantea las líneas básicas de la nueva concepción sobre la reacción social frente a la desviación infantil y juvenil:

1. Coincidencia entre la edad penal y la edad civil (18 años), inimputabilidad de los menores de cierta edad (12-13 años), de manera que no se les implique en la dinámica jurídica, no porque no deba reconocérselas capacidad de entender y querer, sino porque parece que no es conveniente que los menores de dicha edad entren en contacto con las instancias de control social formal.

2. Partir del criterio general de que los menores son responsables de sus actos. Para Gaetano de Leo «la responsabilidad de los menores no resulta en modo alguno castigarlos más. La identidad de los menores y estimular en ellos los procesos de socialización mediante el aumento de su responsabilización».

3. La intervención global, por tanto, conlleva que se reconozca la responsabilidad del menor, la reacción deberá consistir en una sanción y no en una medida.

Las ventajas de esta actitud son poner claridad en la cuestión, al llamar a las cosas por su nombre y permitir aplicar a los menores todas las garantías constitucionales que regulan la imposición de sanciones. Ahora, matizado, no se puede tratar al menor como a un adulto. Se tendrán que tener en cuenta las fases evolutivas de su desarrollo, dotando a la sanción penal del contenido educativo necesario para estimular la socialización del adolescente.

4. Adecuar la composición de los Tribunales a las características específicas de la labor que han de llevar a cabo. Sería plausible que además de la figura del juez tuvieran participación profesionales de las ciencias de la conducta que, como expertos asesores del juez, pudieran orientar a éste en la adopción de la sanción más adecuada a un caso concreto.

Profundizando en este segundo punto, un somero análisis de los datos relativos a la condición social de los menores “tutelados”, nos indica que son los más débiles desde el punto de vista social, quienes más sufren los procesos de estigmatización del sistema. Y que, paradójicamente, resultan más castigados aquéllos que presentan una mayor carencia y conflictividad, es decir, aquéllos que requieren una mayor protección.

Jacques Donzelot (1943), historiador de lo social y sociólogo de lo “urbano”, es profesor de Sciences Juridiques Administratives et Politiques en la Université de Paris X Nanterre. *La police des familles*, de 1979, una obra de referencia, editada en español, *La policía de las familias* en 1998, en la que el autor propone una génesis de lo social como si hubiera surgido un nuevo paisaje. Destacan las páginas que describen la instancia del *Tribunal de Menores*, lo social por excelencia, para el autor. En el libro se apunta cómo a finales del siglo XIX aparecen una serie de profesiones que se agrupan bajo una misma bandera: *el trabajo social*. Como no estaban vinculados a ninguna institución, se añaden a los aparatos preexistentes, judicial, asistencial, educativo, unificados por su *dominio de intervención* que abarca hasta los límites de las clases ‘menos favorecidas’. “En el interior de esas clases apuntan hacia un objetivo privilegiado, la patología de la infancia, bajo su doble aspecto: *la infancia en peligro* y *la infancia peligrosa* (la de la delincuencia)”. La novedad del trabajo social radicaría en una mayor atención a los problemas de la infancia, en una ‘crítica consecuente’ de las antiguas actitudes de represión o de caridad, en la promoción de un interés educativo sin límites, por la comprensión más que por la sanción judicial, reemplazando la caridad por la búsqueda de otras técnicas más eficaces.

En un primer estrato, la criminología estableció el retrato tipo del futuro delincuente, el niño en peligro de convertirse en peligroso, de manera que se crea una infraestructura de prevención y de acción educativa que puede retenerle antes de que cometa el delito. El niño será objeto de intervención, de observación: el clima familiar, el contexto social que hace que un niño se convierta en un ‘niño con riesgos’. Partiendo de la voluntad de reducir el recurso a lo judicial, a lo penal, el segundo círculo de prevención en el que se apoyaría el trabajo social, sería el psiquiátrico, sociológico, psicoanalítico para poder anticipar ‘el riesgo’, o más allá, ‘el drama’, como lo llama Donzelot, la acción policial, “sustituyendo el brazo de la ley por la del educador”, lo que conducirá a la supresión de cualquier sanción de carácter estigmatizador.

En este contexto, nos preguntamos si el trabajo social es un freno a la brutalidad de las sanciones judiciales o si el desarrollo incontrolado del aparato del Estado, con la disculpa de la prevención, extiende su control hasta la vida privada. Porque llega a los menores, que no han cometido falta ni delito alguno, pero no por ello es menos estigmatizador. Debemos comprender, según Donzelot, “el efecto *socialmente* decisivo

del trabajo social a partir de la disposición estratégica de las tres instancias que lo componen, la judicial, la educativa y la psiquiátrica”.

Para Donzelot, lo que sucede en una sala del Tribunal de Menores es “justicia familiar”, que no atañe sólo al menor. “La familia, rodeada de tutores sociales y técnicos, aparece como colonizada”. Resulta paradójico, dice el autor, que cuanto más proclamados son los derechos de la liberalización de la familia, del nacimiento de los derechos del niño, de los reajustes de la relación hombre-mujer, más se estrecha alrededor de la familia pobre el cerco de un poder tutelar. En este sentido, “el *Tribunal de Menores* sería una forma visible del Estado-familia, de la sociedad tutelar”. El Tribunal de Menores no decide sobre los delitos, examina individuos; más que el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, ha de servir como medio de acceso a la personalidad del menor y con él a su ámbito familiar. Se ponen en marcha medidas de observación, el menor es explorado por psicólogos o psiquiatras, por pedagogos; se emitirá un informe sobre la familia. Se procede a una evaluación del menor y de su entorno por especialistas de la *patología social*; esa evaluación determinará después el acuerdo que ha de tomar el Tribunal. Esto es, exactamente, lo que se ve en cada uno de los expedientes tramitados por un Tribunal Tutelar.

Así, el Tribunal de Menores se convierte en la clave de un gigantesco complejo tutelar, que engloba la pre-delincuencia, la ayuda social a la infancia y una buena parte de la psiquiatría infantil. A partir de una infracción ocasional –a veces no– de un niño, de la denuncia de terceras personas, de los propios padres (bien intencionados) o de especialistas convencidos del peligro que corre el menor en su familia por la insuficiente vigilancia de que es objeto, “se pone en marcha un proceso de control y de tutela que le obliga progresivamente a elegir entre un sometimiento a las normas o una orientación, difícilmente reversible, hacia la delincuencia”.

En una línea jurídica, pero añadiendo una perspectiva sociológica, la obra de **M^a Ángeles Cea D’Ancona**, profesora Titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, *La justicia de menores en España*, 1992, supone una reflexión muy rigurosa, en la que desentraña los entresijos del funcionamiento y actuación del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid, con conclusiones también negativas para esta institución, concluyendo que ninguno de los tratamientos cumple sus objetivos plenamente. A su juicio “la *reeducción* continuará siendo un ideal de difícil alcance

mientras no se resuelvan aspectos como: proporcionar a cada menor el tratamiento que precise; realizar una auténtica labor educativa; y mayores recursos materiales y humanos que posibiliten la integración social”. La evaluación que lleva a cabo a través de la metodología aplicada en su estudio, el *análisis logit*²⁶, refleja, según la autora, el fracaso del sistema de justicia de menores, que no consigue frenar la ‘carrera delictiva’ de ni siquiera la mitad de los sujetos sobre los que actúa. “Se observan diferencias apreciables según el *tratamiento* que se haya aplicado, así la medida de libertad vigilada obtiene mejores *resultados*, en general, que la medida de internamiento”.

Ante los *resultados* negativos de la *intervención* del Tribunal que nos plantea, la pregunta inmediata es si cabe atribuir el menor porcentaje de reincidencia de la medida de libertad vigilada a la mayor eficacia de ese tratamiento en el control y prevención de la educación de la delincuencia, y por tanto, en la reeducación y reinserción social del delincuente. Como veremos en los expedientes tramitados por el tribunal de Zaragoza, habrá que analizar los rasgos del menor al que se aplica cada uno de los tratamientos y cómo se desarrollaron esos tratamientos. En cuanto a la aplicación real de la medida de libertad vigilada, hay que señalar que está condicionada a la concurrencia de factores muy importantes: 1- la dedicación del Delegado del Protección a la Infancia, que es el responsable directo de la reeducación del menor; 2- la colaboración tanto del menor como de su familia en el proceso de reeducación; y 3- la existencia de recursos materiales y humanos que hagan efectiva la libertad vigilada.

Desde la educación

Cándido Ruiz Rodrigo, profesor de Historia de la Educación en la Universidad de Valencia, ha planteado en sus obras una visión multidisciplinar sobre la infancia, tratando los temas de la marginación, la reforma, la educación y las instancias tutelares, siendo la Historia de la Educación su especialidad²⁷. Desde esta perspectiva, nos habla de que la escuela funcionaría, en el contexto liberal, de prosperidad y bienestar colectivo, como una instancia tutelar, es decir, como un *espacio propio del niño*. La escuela sustraería al menor de otros espacios peligrosos o claramente perversos,

²⁶ Un modelo de *respuesta cualitativa* que mide la relación entre una serie de variables *independientes* (*discretas o continuas*) y la variable *dependiente* (*categorica*), mediante el análisis de las razones esperadas de una variable *dependiente* en función de las *independientes*; es decir, por la razón de **la probabilidad**.

²⁷ RUIZ RODRIGO, Cándido: *Protección a la infancia en España. Reforma social y educación*, Universitat de València, Valencia, 2004.

impropios o antinaturales, como las fábricas y los talleres en los que estaban expuestos a la corrupción y explotación por parte de los adultos. Pero también habla de “apaciguar y moralizar”; de la escuela como espacio de control social de los menores asilados: “la instrucción y moralización (adoctrinamiento y prácticas religiosas), junto con el adiestramiento laboral y profesional o aprendizaje de un oficio constituyeron las bases formativas de los menores asilados tanto en las instituciones benéficas como en las dependientes del *Consejo Superior de Protección a la Infancia*. Todo ello en régimen de aislamiento (internalización/control). El internado funcionaba como una ‘institución total’ de escuela y vida, llegando a estigmatizar a los niños y generar en ellos carencias afectivas e inadaptaciones”.

También sobre el tema educativo, la obra de **Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría**, *Arqueología de la escuela*, comienza con la idea de que “la peligrosidad social es el prisma a través del cual la burguesía percibirá, desde el siglo XIX, casi exclusivamente, a las clases populares”. “No se entenderían en su justo término las funciones desempeñadas por la naciente escuela nacional si no se la inserta en este contexto de integración de las clases trabajadoras, de conversión al orden social burgués”. Y, es que, se explicará en otro momento, la institucionalización de la escuela obligatoria será una forma de control social que estará estrechamente unida a la denominada *cuestión social*, al problema obrero y con ello a los tribunales tutelares para niños. Dicen los autores, “la instrucción de los hijos de los trabajadores aparece como uno de los dispositivos más eficaces para moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana”. La criminalidad juvenil, decía Gabriel Tarde (Escuela Sociológica de Lyon)²⁸, se halla en relación inversa a la asistencia a la escuela. A principios del siglo XX aparece, destinado a confundirse prácticamente con la infancia delincuente, la *infancia anormal*; “frente a la insumisión, la autoridad magisterial, junto con el poder médico se enarbolará el diagnóstico tranquilizador de *anormalidad*; fundándose en el insuficiente rendimiento escolar, su inadaptabilidad en la escuela, para considerar a un niño como sospechoso de *retardo intelectual heredado*”. Se pone de relieve la emergencia de un nuevo campo en el que las fronteras entre lo normal y lo patológico estaban a punto de borrarse. Nacerá una pedagogía correctora acompañada

²⁸Que aborda el fenómeno criminal al amparo de los datos que ofrecen las estadísticas criminales, estudiando el crimen como un fenómeno social y, oponiéndose por tanto a las ideas predominantes de la Escuela positiva italiana, principalmente a la concepción del criminal nato de Lombroso y al carácter biológico de la criminalidad.

de medidas, controles, pruebas, observaciones de cuerpos y almas”. Los niños turbulentos indóciles, inadaptados (...) van a verse aislados en un nuevo laboratorio de observación en el que se obtendrán técnicas psicopedagógicas generalizables en las escuelas”. No es casualidad que grandes pedagogos del siglo XX (Decroly, Montessori, Neill), figuren como ‘especialistas en niños difíciles y anormales’, apuntan. La infancia anormal ya no va a ser tratada en manicomios, como los niños delincuentes no irán a la cárcel, medio corruptor. Para estos *niños en peligro y peligrosos*, entrará de lleno la corriente correccionalista y positiva introducida por Dorado Montero, Cuello Calón, que cree descubrir en el *Psychopatic Institute* americano la mejor solución: el modelo de los *Tribunales Tutelares de Menores*.

Desde la Historia

No pertenece al mundo del Derecho Laboral, sino al de la Historia, **José M^a Borrás Llop**, es probablemente el autor más profuso en el análisis del trabajo infantil y la explotación de los menores, como muestra, su libro más reciente, *El trabajo infantil en España, 1700-1950*, 2014.

El trabajo de los menores y las mujeres fue uno de los temas más abordados por *higienistas, médicos*, en círculos sociales y políticos; era donde mayor consenso había para propugnar una intervención regularizadora de la administración pública. Ya veremos cómo, a partir de 1878, pero sobre todo entre 1900 y 1904, se dictaron leyes para proteger distintas variables del trabajo de los menores (la peligrosidad, la edad), pero sin que llegasen, ni de lejos, a una protección integral del niño trabajador y mucho menos a su desaparición. Pero esos *higienistas y médicos*, eran observadores distantes del mundo obrero, se proponían aleccionarlo, civilizarlo, corregir las conductas supuestamente perturbadas por la industrialización, apelando al modelo familiar de *clase media*. Estaban alejados del conocimiento de la realidad, no se interesaban por los problemas de las economías domésticas obreras y por las condiciones en las que se adoptaban las decisiones sobre el trabajo infantil. Estas estrategias solían ser enjuiciadas y descalificadas, sin detenerse a comprenderlas. Por eso, los padres fueron acusados de ser “los primeros explotadores animados por un repugnante egoísmo”²⁹

²⁹ PAGÉS Y OLIVERAS, Vicente: *La vida del obrero de la industria fabril en comarcas rurales*, Tip. D. Torres, Gerona, 1913.

La realidad manifestaba que las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares en la ciudad, hacían que el trabajo de los menores fuera una necesidad para la supervivencia del grupo familiar. El salario del varón adulto no era suficiente para mantener a su familia. Ni siquiera la evolución al alza de los salarios en el primer tercio del siglo XX, supuso esa liberación en muchas familias trabajadoras. El trabajo de los menores suponía un complemento necesario, sin el cual la familia no podía salir adelante. La situación era realmente grave y los pequeños huertos familiares fueron un paliativo, pues sin contar con recursos añadidos a los salarios, incluso trabajando los niños, no habría sido posible la supervivencia, según apunta Enriqueta Camps, en una investigación pionera realizada en dos fábricas laneras de Sabadell, basada en las nóminas de los trabajadores de las mismas³⁰.

En el campo, la situación era diferente para jornaleros o trabajadores y propietarios de pequeñas parcelas. La primera causa del trabajo infantil en la agricultura es la necesidad que tenían los padres de emplear a sus hijos para complementar la escasez del salario del padre de familia. El trabajo infantil aparece como una de las estrategias decididas por el grupo doméstico para su supervivencia, para asegurar su propia reproducción. En las familias de jornaleros era más evidente el *valor* de las contribuciones de los menores a la economía doméstica, ya que podía tratarse de *trabajo pagado*, “el hijo del jornalero ganaba ya su manutención”. En el caso de las explotaciones familiares, el trabajo infantil constituía un recurso indispensable en muchas circunstancias. De los hijos se esperaba la aportación de la mano de obra complementaria, el ahorro de salarios y la asistencia en la vejez, factores que posibilitaban la reproducción del grupo doméstico.

La relación entre la escuela y el trabajo infantil es evidente. Los niños trabajadores no acudían a la escuela. En el campo, en las explotaciones familiares, las tareas domésticas no se diferenciaban de las del campo, por lo que los menores hacían la misma jornada laboral que los adultos. La asistencia a la escuela era prácticamente nula. Muchos niños del ámbito rural no asistieron nunca a la escuela. En la ciudad, la situación cambia ligeramente, y los niños acuden dos o tres años a la escuela, hasta que empiezan a trabajar a los diez años. No obstante, también hay un porcentaje, de un 15% que no asiste nunca a

³⁰ CAMPS, Enriqueta: “La teoría del capital humano. Una contrastación empírica. La España Industrial en el siglo XIX”, Revista de Historia Económica, nº 2, 1990, pp. 305-334.

la escuela. Entre 1925-1926, el total de niños comprendidos entre los 6 y 12 años, sólo un 53% estaba escolarizado.³¹

La legislación protectora del trabajo infantil tropezó con las protestas de los padres, porque les privaba de un jornal necesario para cubrir las necesidades de la vida. Las organizaciones obreras no dejaron de criticar a los padres que, incluso falseaban la edad de los menores, y enviaban a sus hijos al trabajo. Estas organizaciones ejercieron una gran presión para que disminuyera el trabajo infantil.³²

Los inspectores de trabajo, a quienes correspondía vigilar el cumplimiento de la ley de 1900 sobre el trabajo de mujeres y niños, tenían una visión más próxima a la realidad. Los términos utilizados cuando su discurso aborda las actitudes de las familias y de los patronos ante el trabajo de los menores, hablan de “codicia”, “avaricia e “inhumanidad”, referidos a los móviles de los fabricantes, aunque son utilizados con escasa frecuencia. El verbo “explotar” se achaca exclusivamente a la *clase patronal*, mientras que “explotación” no se usa respecto al trabajo infantil, salvo en trabajos en espectáculos públicos, y se emplea con relación al trabajo de la mujer. El *ánimo de lucro* no sólo habría guiado a los patronos, sino también a los trabajadores. Y el *egoísmo* se atribuye a ambos.

Sin embargo, tratándose de los padres, lo que más se invoca al interrogarse sobre sus motivaciones, es la necesidad. Aunque también prestaron atención a otro de los móviles que podían conducir a los padres a decidir el inicio de la vida laboral de sus hijos: el aprendizaje de un oficio.

“La infancia delincuente y abandonada” de **Pedro Trinidad Fernández**, incluida en la colectiva, *Historia de la infancia en la España Contemporánea, 1834-1936*, 1996, en la línea de las investigaciones arriba apuntadas, apunta que, “...no preocupó la moralidad cuando el menor tuvo que trabajar con el adulto largas jornadas laborales. Los moralistas nunca cuestionaron el orden social y económico que generaba la miseria”. “...las limitaciones a las jornadas de trabajo de los niños, las leyes protectoras de la infancia, la escolarización obligatoria y la aparición de la juventud delincuente son fenómenos paralelos al aumento de las movilizaciones políticas y de las reivindicaciones de las clases trabajadoras (...) y fueron los sectores más conscientes de la burguesía y clases medias los agentes de tan filantrópicas acciones los encargados de

³¹ BORRAS LLOP, José María (ed) : *El trabajo infantil en España, 1700-1950*, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona-Icaria Editorial, Barcelona, 2014.

³² No obstante, no hay que olvidar que las motivaciones de las organizaciones obreras no fueron siempre altruistas respecto al trabajo de los menores y mujeres, porque suponían una competencia al trabajo del varón adulto.

inculcar a los grupos marginados los valores del trabajo asalariado y a aceptar su posición dentro de las jerarquías sociales”. “Los tribunales tutelares, con las instituciones de reforma complementarias reforzaron la vigilancia y control de amplios sectores de la juventud...”. El autor nos muestra cómo el cuerpo social introduce otra práctica normalizadora para un sector de la población no socializada debidamente, y añade, “El resultado es paradójico, ya que los salvadores de la infancia, a través de los tribunales para menores y los reformatorios contribuyeron a aumentar el abanico de conductas objeto de tratamiento...generaron un sistema que multiplicaba el número de menores ‘encasillados’ (...), con todos los efectos de exclusión que lleva emparejado”. Fue también la culminación de un proceso por el que la infancia y la juventud adquieren un estatus diferenciado del mundo de los adultos.

La idea final que transmite “La infancia delincuente y abandonada” es que, el gobierno de la infancia y la juventud es fundamental en todas las sociedades para mantener en términos estables la reproducción del orden social. No es un problema marginal el planteado por ese porcentaje de la población no socializado convencionalmente, porque lo que desencadena es el temor al desorden y es, quizás, el espejo que devuelve la peor imagen de la sociedad.

Desde la medicina social/mental

El despertar de la medicina social y su incidencia en la infancia en general y trabajadora en particular, ha ocupado el interés de los historiadores de la medicina cuyos análisis trascienden la esfera sanitaria para aterrizar en la más amplia higiénico-laboral e incluso educativa, como las obras de Esteban Rodríguez Ocaña, Martínez Pérez, R. Ballester y E. Perdiguero³³. Merece la pena destacar el trabajo **Rafael Huertas**, “Niños degenerados. Medicina mental y *regeneracionismo* en la España del cambio de siglo”³⁴

³³ RODRIGUEZ OCAÑA, Esteban, “La construcción de la salud infantil. Ciencia, medicina y educación en la transición sanitaria en España”, *Historia Contemporánea*, 18, 1998, pp. 19-52; MARTÍNEZ PÉREZ, José, “Moldeando la vida del trabajador: la educación para la higiene y la seguridad social en España 1922-1936”. En MONTIEL, Luis y PORRAS, Isabel (Coord): *De la responsabilidad individual a la responsabilidad de la víctima. El papel del paciente en la prevención de la enfermedad* Ed. Doce Calles, Aranjuez, 1997. BALLESTER AÑON, Rosa: “El niño en la medicina española: tradición y medicalización”, *Jano*, 662, pp. 787-796, 1985; BALLESTER AÑON, Rosa y PERDIGUERO GIL, Emilio: “La infancia como problema y como valor en las luchas sanitarias de principios de siglo”, *Dynamis* 15, 1995, pp. 177-192.

³⁴ HUERTAS, Rafael: “Niños degenerados. Medicina mental y regeneracionismo en la España de cambio de siglo”, *Revista Dynamis*, 18, 1998, pp. 157-179.

en la que explica que la infancia tutelada fue también medicalizada, de tal manera que “el discurso ideológico tendente a la construcción social de la infancia fue tributaria no solo de categorías sociológicas y pedagógicas, sino biológicas y médicas”. Vuelven a aparecer las distinciones entre “niños en peligro” y “niños peligrosos”, entre “infancia abandonada” e “infancia culpable”, de tal manera que se fueron configurando estrategias encaminadas, por un lado, a concienciar a la sociedad en su conjunto de la auténtica *lacra social* que suponía la infancia abandonada y, por otro, a aunar actividades educadoras y preventivas con otras de vigilancia y control, cuando no represivas, destinadas a aquellos menores que atentaran contra los valores éticos y estéticos hegemónicos.

La obra del psiquiatra Sanchis Banús³⁵, *Estudio médico-social del niño golfo* (1916) se encuadra en el marco de un amplio proceso que desembocó en una nueva construcción social de la infancia. Lo que interesa destacar es la parte más psiquiátrica de esta aportación y, en particular, las *anomalías degenerativas* adjudicadas a este tipo de niños. Tras estudiar una serie de cincuenta *niños golfos*, encuentra tres características definitorias: “una herencia muy recargada, presencia de estigmas somáticos de degeneración y existencia innegable de trastornos de orden afectivo”

Pero si las anormalidades mentales son descritas con cierto detalle, las anomalías de orden moral, esto es, el trastorno de las funciones afectivas, constituyen uno de los ejes fundamentales en la configuración médica del *niño golfo*. Las anormalidades de carácter moral que sufren los niños golfos pueden ser de dos tipos: la *anormalidad* y la *locura moral*.

Respecto a la *locura moral*, Sanchis Banús, establece su diferenciación con la amoralidad ya que “la característica de los locos morales es su perversión”. En definitiva, si la amoralidad es comparada con la idiocia, la *locura moral* debe ser considerada una verdadera alienación, caracterizada, en síntesis, por “la pérdida de la facultad de apreciar rectamente la significación moral de las realidades objetivas”. Para

³⁵ José Sanchis Banús llevó a cabo en los años 20 del siglo XX, un estudio médico-social, antropológico y psiquiátrico, de ese niño *callejero* no escolarizado, considerado como el primer eslabón de la delincuencia infantil. El *niño golfo* fue descrito por él como “un niño rebelde, no sujeto a la acción de sus naturales tutores, parásito de las grandes urbes en cuyas calles vive libre e ineducado, burlando la disciplina social, vistiendo sucios harapos, comiendo sobras o proporcionándose alimentos a costa del pordiose, del hurto o de pequeños servicios y trabajos que realiza siempre en la vía pública y que suele abandonar cuando le han rendido producto suficiente para satisfacer sus diarias necesidades”.

Sanchis Banús, “obsesiones e impulsiones dominan la sintomatología de los degenerados” (terminología muy frecuente en el Tribunales para Niños de Zaragoza)

La mayor importancia otorgada a los estigmas psíquicos o morales resultaban especialmente útiles para la identificación de niños degenerados. Al contrario que los estigmas físicos, fácilmente objetivables, los llamados estigmas psíquicos hacían referencia a retrasos intelectuales o afectivos y, de manera relevante, a la ‘inadaptabilidad social’, curioso *estigma*, a todas luces subjetivo, que tenía más que ver con criterios de *norma social* que con auténticos juicios clínicos (término muy frecuente en los expedientes del tribunal de Zaragoza).

El concepto de inadaptabilidad social’ ofrecía posibilidades inagotables que trascendían el campo de la psicopatología individual para llegar a ser utilizado con éxito desde el punto de vista médico-social. No en vano, la ‘inadaptabilidad social’ era considerada la causa más importante de la *golfería infantil*.

“Desde el ‘imbécil moral’ al ‘niño golfo’ se aprecia una evolución, según la opinión de Huertas, que va desde el más puro pensamiento positivista –organicista y determinista— hasta categorías sociológicas más laxas que, sin renunciar nunca a la patologización de los comportamientos, irán introduciendo elementos nuevos que pretenderán la regeneración de pueblos y naciones”. La educación y la eugenesia, además de la higiene y la despensa serán elementos imprescindibles en ese empeño. Pero también una renovada “defensa social”, en la que, junto a la cárcel y al manicomio, tengan su lugar en el correccional, el Tribunal de menores y la escuela, ese espacio socializador por excelencia, destinado a formar ciudadanos, “pero también a detectar comportamientos anómalos o desadaptados, que muy pronto se incluirán en la otra gran categoría de niños problemáticos enmarcados en la jurisdicción profesional de médicos y pedagogos: la llamada *infancia anormal*.”³⁶

El médico psicopedagogo, Gonzalo Rodríguez Lafora publicó, en 1917, la obra *Los niños mentalmente anormales*. En ella advierte que, “el problema de los niños mentalmente anormales se presenta con toda su pujanza en aquellos países progresivos en que la asistencia a la escuela es obligatoria”. La psicopedagogía comenzó a actualizar su discurso y ampliar sus competencias incorporando los avances de la psicología

³⁶ HUERTAS, Rafael: “Niños degenerados. Medicina mental y regeneracionismo en la España de cambio de siglo”

experimental, aprovechando el nuevo y privilegiado espacio de observación que facilitaba la Escuela Obligatoria.

Así, el retraso escolar se convierte, desde las primeras décadas del siglo XX, en preocupación de médicos y educadores, que intentarán encontrar causas ‘psicológicas’ o ‘bio-psicológicas’ a la inadaptación o a las dificultades de aprendizaje de una serie de niños insumisos, inquietos o, simplemente, aburridos ante la normativización escolar, para los que se esgrimirá el diagnóstico de *anormales*, formulación novedosa pero que, en el fondo, asimila y actualiza viejos conceptos *degeneracionistas* aplicados al niño. De hecho, en muchas obras sobre ‘infancia anormal’, este término viene a sustituir al de *infancia degenerada*, sin que se produzcan demasiadas modificaciones en la valoración ‘moral’ de estos niños, sujetos no solo a la jurisdicción científica de médicos o pedagogos sino también de criminólogos y psiquiatras. Las palabras de Lafora no dejan lugar a dudas:

“Es de gran importancia para el educador el estudio del diagnóstico y de la pedagogía de los niños mentalmente anormales. No lo es menos para el criminalista, quien constantemente, al ocuparse de los niños delincuentes y vagabundos, en los que se presentan degeneraciones físicas o mentales, inadaptación al medio, influencias extrañas, etc., tiene que decidir si se trata de un niño enfermo o de un vicioso”

La alusión a la *herencia morbosa* y al *degeneracionismo* es evidente, pero Lafora llama la atención sobre la excesiva utilización de la *degeneración* como diagnóstico y distingue entre *herencia* propiamente dicha y *transmisión congénita*. Y describe como *causas que más actúan congénitamente*, el alcoholismo, la sífilis, la tuberculosis y los trastornos endocrinos. La relación entre las tres *plagas blancas* y la *degeneración* merece la pena ser destacada por la importancia otorgada a la influencia de dichas enfermedades sociales sobre los hijos.

En definitiva, se pretende explicar la fisiología y la psicología del delito desde presupuestos similares a los de la antropología criminal lombrosiana (de nuevo el positivismo y la herencia genética).

Los estudios que se han analizado, desde muy distintas perspectivas, tienen en común la idea de que, las instituciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida del sector de la población que sufre con mayor crudeza las

consecuencias de la implantación del capitalismo, corren el peligro de convertirse, o se han convertido ya, en una herramienta inconsciente de legitimación del sistema social en su conjunto. Que, bajo la bandera del humanismo y proteccionismo que despliega la ideología asistencial o penal, lo que existe fundamentalmente es otra forma de gobierno de las poblaciones, que permite ajustar, continuamente, los desequilibrios que se producen dentro de la sociedad.

2.- Análisis de las fuentes

Fuentes primarias

2.1.- *Archivo Histórico Provincial de Zaragoza* (A. H. P. Z.)

A.- Expedientes del Tribunal Tutelar de Menores

La bibliografía seleccionada ha resultado un apoyo imprescindible para conocer la historia y el funcionamiento de los tribunales infantiles, una parte de la misma se ha examinado detalladamente en el apartado sobre el estado de la cuestión, pero, en cualquier caso, no son estudios específicos y detallados acerca de estos tribunales especiales y ninguno referido a los tribunales españoles, desde hace décadas. Esta especificidad es la que pretendemos con nuestra aportación, presente y futura. Para lograr este objetivo, nuestra fuente principal han sido, y serán, los expedientes del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza –Tribunal para Niños en una parte del período analizado, 1921-1925—, que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, dependiente de la Diputación General de Aragón. Esta información ha sido complementada con el estudio de autores coetáneos o inmediatamente anteriores, como los reformadores de principios de siglo, y todos aquellos que se implicaron en el debate acerca de una justicia privativa para los menores. La mayoría de ellos, casi siempre juristas o pedagogos, estuvieron muchas veces directamente relacionados con los Tribunales para Niños en general, o con los de Zaragoza, Madrid y Barcelona en particular: Patricio Borobio Díaz, Inocencio Jiménez Vicente, Eugenio Cuello Calón, Ramón Albó y Martín, Antonio Gómez Mesa, Julián Juderías, Alicia Pestana, Gabriel María de Ybarra, entre muchos otros, cuya amplia bibliografía está detallada al final del trabajo.

Los fondos sobre la Obra de Protección de Menores están compuestos por los archivos del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, desde 1921 a 1992; de la Casa Tutelar-Reformatorio del Buen Pastor, más tarde San Jorge, desde 1921 a 1985 y de la Junta Provincial de Protección a la Infancia (a Menores), desde 1930 a 1971. Además existen 2 cajas separadas del resto, una, dedicada a Aforos y Varios y, donde, para mi sorpresa, he encontrado información sobre una de las formas de financiación de los tribunales; y otra, que contiene Circulares del Consejo Superior de Protección a la Infancia, que afectan a un período posterior al aquí estudiado. He de advertir, porque no

alivia el trabajo sino lo contrario, que los fondos están sin catalogar, y los expedientes están desordenados en el interior de las distintas cajas correspondientes a un año concreto. Esta circunstancia puede llevar a pensar que se ha procedido a hacer catas aleatorias dentro de una misma caja. No ha sido así. Sí se ha tenido que elegir una o varias cajas, de un año concreto, por el gran número de expedientes a examinar, lo que al final también determina una cata aleatoria.

Es cierto, así se indicó en el título provisional de este trabajo, que nuestro proyecto inicial pretendía abarcar el período 1921-1931, hasta que tuvimos en nuestras manos la información exacta de lo que eso suponía: 2.852 expedientes del Tribunal Tutelar para Niños, además de los expedientes de las instituciones auxiliares. Una cifra totalmente inabarcable para la labor de una sola persona en el tiempo de margen para realizar el Trabajo Fin de Máster. Tuvimos que replantear la tarea de investigación de archivo y reducirla, de manera que se analizasen expedientes afectados por la ley de creación de los tribunales, de 1918, y por la modificación realizada en 1925. Así se ha hecho, con el inicio el 12 de octubre de 1921, fecha del primer expediente y de la actuación del Tribunal para Niños de Zaragoza, y los últimos de 1926. Han sido un total de 9 cajas y **432 expedientes analizados**, y 2852 consultados.

Con los expedientes se ha elaborado una base de datos con el programa *Microsoft Office Access*, consistente en elaborar una ficha de cada expediente, las hay muy extensas, porque el expediente lo era, fundamentalmente los referidos a la función de la Facultad Protectora, y otras muy escuetas, porque, o lo era el expediente, o porque no era necesaria más información. Cada ficha está dividida en distintos bloques que nos dan la siguiente información:

1.- datos del expediente: signatura, número, año, procedencia del asunto, es decir a instancia de quién se ha incoado (iniciado) y por qué causa.

2.- datos sobre el menor: edad, sexo, información familiar y antecedentes, en su caso.

3.- desarrollo del caso: diligencias preliminares y complementarias (éstas últimas llevadas a cabo por los Agentes de Vigilancia de Tribunal); actuaciones del Tribunal: médico, pedagogo, Casa de Observación, Delegados, Acuerdo, seguimiento y reapertura de expedientes, en su caso.

4.- archivo, casi siempre provisional, o definitivo, más habitual, a partir de la Ley de 1925.

Con las fichas elaboradas se han realizado una serie de estadísticas que nos aportan unos datos útiles para tener una visión general del Tribunal para Niños de Zaragoza; el número de menores que pasaron por el mismo durante ese período, porcentaje de niños y niñas, la edad media de los mismos, los tipos de delitos o faltas más frecuentes, así como cuáles eran los Acuerdos del Tribunal que con mayor frecuencia se adoptaban.

De los apartados 2 y 3, es de donde procede la información más relevante de los hechos, del menor y de su familia. Es el menor y no los hechos lo que en verdad interesa al Tribunal, y por ello se han realizado no sólo anotaciones o resúmenes, sino transcripciones completas tanto de los comentarios del Tribunal en los exámenes practicados a los menores, como de los informes redactados por los Agentes de Vigilancia a servicio del Tribunal, de los Delegados de Protección a la Infancia y del Director del Reformatorio del Buen Pastor.

¿Cómo llega un menor ante el Tribunal para niños? Por distintos cauces: por denuncia de un particular (en Comisaría de Vigilancia, en el Juzgado o directamente en el Tribunal para Niños), bien por ser el afectado por hechos cometidos por un menor o bien por ser conocedor de la situación de desamparo y abandono del menor; denuncia de los propios padres del menor (aquí siempre ante el Tribunal para Niños) que alegan su incapacidad para educar a su hijo y la necesidad de que se le aplique una medida de corrección y reforma; remisión de las diligencias procedentes de un Juzgado de Instrucción o Juzgado municipal que se inhiben al conocer que el infractor o uno de los infractores es un menor; remisión por Comisaría de Vigilancia donde ha sido presentado un detenido por Guardias de Seguridad o de Vigilancia. En los expedientes correspondientes al primer año de actuación del Tribunal, la mayoría se inician por remisión de un juzgado. A partir de 1922, aparecen las denuncias en Comisaría de Vigilancia (dependiente de la Delegación del Gobierno) o en el propio Tribunal, pero el porcentaje mayor sigue proviniendo de la actuación previa de un juzgado.

Una vez recibida la denuncia o las Diligencias incoadas por un juzgado, el Presidente del Tribunal acuerda abrir expediente e iniciar las Diligencias previas en las que se deben llevar a cabo las actuaciones necesarias para la averiguación de los hechos:

comparecencia del menor, afectado, padres del menor, testigos; si se han incoado diligencias completas en un juzgado, no son necesarias las diligencias previas, simplemente la ratificación del denunciante o afectado y del menor, en su caso.

A la vista de lo actuado, el Presidente puede acordar que el menor ingrese “provisionalmente” en la Casa de Observación. Esta es uno de los órganos auxiliares previstos en la norma, dependiente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia, que no existió en Zaragoza y ocupaba una habitación del Reformatorio del Buen Pastor, con lo que, de hecho, el menor entra en el Reformatorio mientras se tramita el expediente. También puede acordar la Ampliación de las circunstancias del hecho, si algo ha quedado sin determinar. A partir de ese momento todo gira en torno a la personalidad y ambiente que rodea al menor, porque es el menor lo que le interesa al Tribunal, no la mayor o menor gravedad de la infracción que haya cometido.

En la Casa de Observación, al menor se le realiza una evaluación médica que se refleja en una Ficha Médica, que contiene el estado físico, psíquico y moral, acentuando éste último en las anotaciones finales del médico. En el Tribunal para Niños de Zaragoza, el Presidente del Tribunal, Patricio Borobio, era médico y el encargado de realizar esta evaluación médica y su reflejo en la citada ficha; un pedagogo es el encargado de la evaluación pedagógica y la realización de la Ficha Pedagógica (era más psicológica-psiquiátrica), que contiene el nivel de “cultura” (leer, escribir y las cuatro reglas), aptitudes, tendencias, afectividad, impulsos, perversidad... (José Talayero, vocal del Tribunal, maestro pedagogo, era el encargado de esta función); más importante para el Tribunal es el examen del menor, una especie de conversación, según expresan los propios miembros del tribunal, pero en la realidad un interrogatorio en el que estaban presentes el Presidente, el secretario y un vocal, frente al menor, solo. Las consideraciones de los miembros del tribunal en este acto, reflejadas por escrito, son una de las piezas del expediente más interesantes para el estudio del funcionamiento de aquél, y a veces contradictorias con el acuerdo que se tomará respecto del menor. Señalar que, a pesar de la importancia dada a los informes médico y pedagógico, en un porcentaje muy elevado, de los expedientes analizados (sobre todo a partir de 1925), aparece tan solo el examen del menor.

Las Diligencias³⁷ previas hablan de las circunstancias en que han sucedido los hechos, de los hechos mismos. Para conocer las circunstancias vitales del menor, el Presidente del tribunal acuerda se practiquen Diligencias complementarias, obligatorias tanto en expedientes de “enjuiciamiento” de menores, como en los de Facultad Protectora o tuitiva³⁸ (de gran transcendencia, pero que no aparecen en todos los expedientes, como se explicará más adelante, como de la ausencia de las ficha médica y pedagógica). Para llevarlas a efecto se encomienda la investigación a los Agentes de Vigilancia, dependientes del tribunal. Su investigación recoge los antecedentes del menor sobre conducta, que abarca, religión, moralidad, incluidos vicios (cine, fumar, golosinas), amistades, costumbres e infracciones anteriores, si las hubiere; sobre la asistencia o inasistencia del menor a la escuela, su comportamiento y rendimiento en ella; sobre el trabajo del menor (si el menor había trabajado se hacían constar los lugares e informes de los patronos); y, sobre los antecedentes de su familia, trabajo de los padres, estado de la vivienda, religión, moralidad, concepción en el barrio, si atienden o se preocupan de la educación de sus hijos, hacinamiento en las habitaciones y el posible ejemplo corruptor que esto conllevaba. Por último, se reflejan las taras orgánicas, es decir, los antecedentes de enfermedades familiares que pudiesen ser contagiosas. En ese momento, la gran preocupación era la tuberculosis.

Los Agentes de Vigilancia debían evitar comprometer la reputación del menor ante los maestros y sus patronos o sus compañeros. Por eso, si la familia estaba bien conceptuada, era de buena reputación, podía no visitar esos centros. No obstante, en los expedientes analizados, la discreción de estos agentes brilla por su ausencia, salvo en el caso de niñas y temas relacionados con el sexo, con el que también es muy pudoroso el tribunal. Por ley, en cada Tribunal para Niños debía prestar servicio un funcionario de vigilancia y dos guardias de seguridad, excepto en Madrid y Barcelona que se duplicaba. La labor de los Agentes de Vigilancia se consideraba esencial para la buena marcha del Tribunal; “por el material que recolectan para los Tribunales se han convertido en un auxiliar técnico” (Jiménez Vicente, 1932: 63).

³⁷ Las *Diligencias*, tanto las previas, como las complementarias, son las actuaciones que lleva a cabo el tribunal, sirviéndose de distintos medios, para la averiguación tanto las circunstancias de cómo han sucedido los hechos—daños, hurto, lesiones, etc.—como todo lo que rodea al menor—conducta, familia, escuela—, sus antecedentes personales y familiares.

³⁸ Los expedientes de *Facultad Protectora o tuitiva* son aquellos en los la finalidad de los mismos es la protección del menor, no su “enjuiciamiento”, bien por circunstancias de abandono o de circunstancias en las que se pueden producir o se producen efectos corruptores sobre el menor.

El expediente termina con el Acuerdo por unanimidad del Tribunal. El acuerdo al que llega puede ser: a) sobreseer y archivo del expediente, sin adoptar ninguna medida sobre el menor; b) que el menor sea reprendido a presencia de sus padres y estos amonestados a fin de que su hijo no vuelva a cometer un hecho similar. No siempre los padres eran amonestados; c) que el menor sea acogido por una familia de probada honradez...; d) que el menor sea entregado a sus padres bajo la vigilancia de un Delegado de Protección a la Infancia, que se nombra en ese acuerdo; e) que el menor ingrese en el Reformatorio Buen Pastor, en el caso de los niños, o en el asilo de las H.H. Oblatas en el caso de las niñas, bajo la vigilancia de un Delegado de Protección a la Infancia, que se nombra en ese acuerdo.

En el Tribunal de Zaragoza, el acuerdo de acogimiento en familia fue excepcional. Fue un fracaso, admitido por el propio Presidente. La duda que se crea en si realmente se intentó aplicar esa medida, si se buscaban familias de acogimiento. O bien, si existían familias dispuestas a ello.

Los expedientes de Facultad Protectora o tuitiva, en los casos de abandono o de influencias corruptoras por parte de padres o tutores, tienen un distinto desarrollo del procedimiento y de los acuerdos dictados por el tribunal en los que, o bien se acuerda sobreseer y archivar el expediente, o dictar las medidas tutelares más beneficiosas para el menor: 1) suspender el derecho del padre/madre a la guarda y educación de sus hijos con el alcance y efectos establecidos en el artículo 27 Reglamento de 6 abril de 1919; 2) confiar la custodia al asilo La Caridad, dependiente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia, donde no podrán ser visitados por otras personas de su familia que su padre/madre y estos tan sólo 1 vez al mes, salvo caso extraordinario, autorizado por el Presidente del Tribunal; 3) que el padre abone 50 céntimos/día en concepto de estancia de los niños en el asilo; 4) que él mismo viene obligado a dar cuenta al Tribunal del cambio de su modo de vivir para proceder a adoptar el acuerdo conveniente a las formas de protección que mediante este expediente se persiguen.

Hemos visto que, tanto en los supuestos de libertad vigilada, como en los de internamiento en el Reformatorio, se nombra un Delegado de Protección a la Infancia. Pieza importante en el engranaje de los Tribunales para niños, los Delegados ejercían las funciones de tutela y vigilancia del menor a su cargo y debían elaborar informes mensuales sobre la conducta y evolución del menor y remitirlos al Tribunal. Actuaban,

pues, de intermediarios del tribunal y como mentores del niño, al que debían tutelar y aconsejar. Estaban, asimismo, obligados a mantener un estrecho contacto con la familia, en los casos de libertad vigilada, a fin de controlar que cumplieran con sus responsabilidades de padres. El resultado de la actuación de los Delegados también es considerado como un cierto fracaso, por el escaso número y por su carácter voluntario, no dedicaban apenas tiempo a los menores. En los expedientes apenas aparecen informes de los Delegados.

B.- Aforos y Varios. Inspectores. Impuesto 5%: 1928-1946.

A pesar de la cronología que consta en la caja, 1928-1946, revisando los documentos que contenía, me encontré con originales que correspondían a los años entre 1920 y 1926 y al concepto **“impuesto 5%”**, lo que me abrió una vía de acceso a información totalmente desconocida, referida a la financiación del conglomerado de la justicia de menores, desde el Consejo Superior de Protección a la Infancia, pasando por la Juntas Provinciales y Locales, hasta los Tribunales para niños. Me parece necesaria, en este apartado, argumentar una explicación de lo que significa esa documentación y ese concepto **“impuesto 5%”**.

Conforme a lo previsto en la norma y, a todo lo que había leído sobre la organización y atribución de los Tribunales Tutelares y sobre composición y funcionamiento de los órganos superiores (Consejo Superior de Protección a la Infancia, Juntas Provinciales y Locales), dependientes del Ministerio de Gobernación, en el período de estudio, quedaba claro que estos órganos tenían una financiación mixta: una y principal, con las aportaciones de benefactores particulares, que, interesados por la obra con la infancia, colaboraban en todos los sentidos, y otra, menor, con pequeñas subvenciones estatales.

Sin embargo, la documentación que presento en los anexos, deja claramente probado que una de las más importantes formas de financiación de estos órganos era la cantidad recaudada por el Consejo Superior de Protección a la Infancia en el gravamen o impuesto del 5%, de la recaudación obtenida por las entradas de todos los establecimientos dedicados a *espectáculos públicos*. Este concepto de *espectáculos públicos* era aplicado de forma amplia. Así lo eran a estos efectos: cines, teatros, salas de baile, circos, frontones, plazas de toros y campos de fútbol.

Eran los ayuntamientos de las localidades en las que se celebraban los espectáculos públicos, del carácter que fuese, los encargados de la recaudación que después remitirán, a través de giro postal, a los destinatarios pertinentes. Constan asimismo reclamaciones del Consejo Superior a distintos ayuntamientos que no han aportado cantidad alguna, siendo la causa la mayoría de las ocasiones la inexistencia en ese momento o en ese año de ningún espectáculo público en el pueblo, aunque lo hubiera habido en años anteriores. La relación entre el Consejo Superior de Protección a la Infancia y los ayuntamientos es fluida en estos asuntos de recaudación.

Como una pequeña muestra, paso a comentar tres documentos:

- 1) La Gaceta de 4 de septiembre de 1920 recoge una publicación del Consejo Superior de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad, Ministerio de la Gobernación, una Real Orden declarando que “el impuesto del 5% con destino a las Juntas de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad grava también el producto de aquellos espectáculos a los que se asiste aun sin billete, o en los que en el precio señalado a éstos sea inferior a la cantidad realmente satisfecha por los espectadores.
- 2) Con fecha de septiembre de 1926 una nota que dice: “el impuesto del 5% sobre espectáculos públicos creado por la Disposición novena de las especiales de la Ley de 1910, no ha sido modificada ni afectada por el Real Decreto Ley último sobre reforma de las tributaciones... siendo el único impuesto que pesa sobre el espectador, recaudándose en las mismas formas y con las mismas garantías que se ha venido por las Juntas que autonómicamente lo venían recaudando”. Es una nota que emite el Consejo Superior de Protección a la Infancia dirigido a la Juntas Locales para que sigan procediendo de igual manera a como lo venían haciendo en la recaudación del 5% de las entradas de espectáculos públicos.
- 3) El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, nº 878, correspondiente a octubre de 1926, que recoge una publicación de la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza; se trata de una Circular de 13 de octubre de 1926 sobre Tributación de Espectáculos Públicos, que regula el impuesto del 5% en el sentido antes comentado. Lo mismo el Boletín 1388 que recoge la Real Orden de 4 de diciembre

de 1926 (Gaceta del 5) sobre el régimen tributario de los espectáculos públicos, gravando con el impuesto del 5% y la finalidad del mismo.

2.2.- Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España: Prensa del periodo 1918-1926

El periódico diario *El Sol*, edición Madrid.

Se ha elegido el periódico *El Sol* por ser el periódico por excelencia de los años 20 del siglo XX en la capital del reino. Del período estudiado, he realizado catas en los momentos que he considerado más “importantes”, como la publicación de las leyes y reglamentos referidos a los tribunales tutelares, agosto y diciembre de 1918, julio de 1919, agosto y noviembre de 1925. Y otras catas al azar durante todo el período para conocer la repercusión que el tema de la infancia y la existencia de los Tribunales para Niños, tenía en esos momentos, buscando todo lo relacionado con el Consejo Superior de Protección a la Infancia, los Tribunales para Niños y otras instituciones relacionadas con ellos (en Madrid inició su trabajo más tarde que en otras provincias).

El resultado no es exactamente el esperado, pero esto, me temo, sucederá con cierta frecuencia. Ni siquiera en lo referente a las leyes que se publicaban en la *Gaceta*. Para mi sorpresa, el periódico, sí recogió la primera ley de Tribunales para Niños de 1918, pero ya no se ocupó ni del Reglamento de 1919 ni de la modificación que se produjo en 1925, la ley en julio y el Reglamento en septiembre.

Respecto a noticias sobre las instituciones de mayor rango que se ocupaban de los distintos aspectos de la infancia, me he encontrado, en todas las catas, con las mismas referencias, notas sobre las reuniones habidas del Consejo Superior de Protección a la Infancia. *Notas* que ocupan unas pocas líneas en páginas centrales del diario, dedicadas a noticias varias. Aunque puedan parecer insignificantes, aportan datos interesantes para el historiador porque en ellas aparecen algunos de los nombres de los asistentes a las reuniones y, en ocasiones, el tema tratado. Esto nos lleva a conocer no sólo quienes son, sino a qué clase social pertenecen, de qué ámbito cultural y político proceden esas personas.

Los números de *El Sol* están digitalizados y pueden consultarse y descargarse de la web de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (<http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/>)

2.3- Archivo y Hemeroteca Municipal de Zaragoza (A.H.M.Z.)

Los periódicos regionales *Heraldo de Aragón* y *El Noticiero*.

De estos periódicos realicé catas aleatorias del período trabajado, buscando noticias sobre la Junta Provincial de Protección a la Infancia y las Juntas locales, así como todo lo relacionado con el Tribunal para Niños que iniciaba su andadura. He podido comprobar que no existía una especial atención por los temas de la infancia y sólo ocasionalmente aparece alguna noticia relacionada con el Tribunal.

Cómo en el periódico *El Sol*, aparecen *Notas* sobre reuniones de la Junta Provincial de Protección a la Infancia. Aparecen algunos de los nombres (lo más conocidos) que acuden a esas reuniones o son Delegados del Tribunal (o ambas cosas). Son personas muy conocidas en los ámbitos profesionales, sociales y de beneficencia de la ciudad. Esta información es importante para conocer quienes componían los órganos de gobierno de estas instancias tutelares, de qué mundo procedía. Como he dicho antes, clase social, ámbito cultural y político. En el caso de Zaragoza, parte de esa información se obtiene también en los expedientes del Tribunal de Menores.

Los números de estos periódicos no están digitalizados, su consulta la he realizado en la Hemeroteca Municipal, en el Palacio Montemuzo de Zaragoza.

3.- Los Tribunales para Niños en España

“Ha sido el siglo XX el que ha forjado esta Obra en España”, decía Inocencio Jiménez Vicente³⁹, y se hizo, entre otras actividades, con la celebración, desde 1909 en Bilbao, y en 1914 en Valencia y Barcelona de *Congresos nacionales de Criminología* y con la creación de la *Revista Penitenciaria*, en los que participaron juristas, penalistas y criminólogos de todo el país, para formalizar y reforzar un doble movimiento a favor de los Tribunales Tutelares, de ideas y de acción, aceptando, en principio, la manera norteamericana de los Tribunales para menores, con la acción tutelar de un juzgador único, con la colaboración de un delegado y de las Juntas de Patronato. No obstante, será la ley belga de 1912 la que después servirá de inspiración a la legislación española.

Antecedentes, un poco de historia

La primera institución que se conoce en España, en la línea de desarrollo de los Tribunales para niños, es la figura del *Fuge et Pare d'Orfens*, creado en Valencia, en el año 1337, por el rey Pedro IV El Ceremonioso. La figura del *Pare d'Orfens* funcionó en Aragón, Valencia y Navarra hasta 1793, año en que fue suprimida por Carlos IV. Estaba encargada de recoger a los menores vagabundos y ociosos, huérfanos o desvalidos que pululaban por las calles, e ingresarlos en la Casa Común, a fin de que recibieran la instrucción necesaria para aprender un oficio. También funcionaba como Tribunal con respecto a los menores acusados de la comisión de hechos delictivos. El carácter de la institución era marcadamente benéfico y educativo, sin que se requiriese, para el desempeño del cargo de *Curador* que la presidía, más que gran celo por la salvación de la juventud, de modo “casi análogo” a los que serían los futuros Presidentes de los Tribunales Tutelares de Menores. Con posterioridad, en 1407, el rey Martín El Humano dotó al *Curador* y *Padre de los Huérfanos* de plena potestad en materia delictiva de los menores, quedando establecido el Juzgado o *Tribunal de los Huérfanos*. En Castilla existió, en el siglo XVII, El *Padre General de Menores*, institución muy parecida al *Padre de los Huérfanos* aunque su cometido parece ser que estaba más orientado a velar por los menores y sus bienes, cuando quedaban sin padres, viniendo a constituir una especie de tutela civil.

³⁹ JIMÉNEZ VICENTE, Inocencio: *Los Tribunales Tutelares de menores*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1932.

Desde comienzos del siglo XVIII, se generalizó la creación de hospicios, casas de expósitos y casas de misericordia para la recogida de los niños abandonados, donde la aglomeración y el hacinamiento eran la tónica general. Los ideales de trato educativo y diferenciado que presidía su ideario estaban muy lejos de reflejarse en la práctica. Mención aparte merece el Hospicio creado en la ciudad de Sevilla, en 1723, debido al esfuerzo de un hombre modesto y filantrópico, un vendedor ambulante de libros, llamado Toribio de Velasco (1686-1730), que con los escasos medios con que contaba, creó una institución para reformar el carácter y las costumbres perversas de los niños delincuentes. Esta institución se conoció con el nombre de *Los Toribios*. Por primera vez, una institución de este tipo organizaba un sistema educativo con la participación de los menores, con horarios delimitados para cada actividad y con registro personal de los niños, donde se instalaron una serie de talleres para la formación profesional de los alumnos.

La labor de Toribio de Velasco supuso un cambio cualitativo en la atención de los menores indigentes en centros de internamiento. Para Roca Chust⁴⁰, *Los Toribios* se adelantaron un siglo y medio a la famosa institución norteamericana, *George Junior Republic*, de 1887, considerada históricamente como la iniciadora de las instituciones reeducadoras de menores disociales en nuestra época. Roldán Barbero⁴¹ considera que “la casa sevillana permaneció durante todo el siglo XVIII como una gloria del tratamiento particularizado del menor peligroso; cuando en esta época los usos dominantes descansaban en el hospicio de aglomeración donde, en el mejor de los casos, la pillería infantil y adolescente disponía de una estancia separada de la del resto de los asilados”. A la muerte de su fundador, en 1730, la institución de los *Toribios* fue decayendo paulatinamente y no tardó en desaparecer. Durante el reinado de Carlos III se produce un notable adelanto en materia de protección social de los menores, destacando las medidas dictadas en relación con los menores vagabundos, la creación de casas de misericordia y *El Fondo Pío Beneficial* para el sostenimiento de estos últimos establecimientos. En 1796, Carlos IV dictó un Reglamento para el establecimiento de las casas de expósitos, con la finalidad de evitar el infanticidio, muy frecuente en las madres con hijos ilegítimos, facilitándole a éstas, su entrega anónima a la institución.

⁴⁰ROCA CHUST, Tomás: *Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España*, Consejo Superior de Protección de menores, Madrid, 1968.

⁴¹ROLDÁN BARBERO, Horacio: *Historia de la prisión en España*, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988.

Sin embargo, como afirma Fernández Vargas “pese a las buenas intenciones del legislador, ni las condiciones de vida de estos niños, ni las expectativas de futuro de los supervivientes debieron ser muy halagüeñas”⁴². Lentamente fueron cayendo en desuso las disposiciones del monarca ilustrado y hasta la ordenanza de presidios de 1834 no se pensó en la juventud delincuente, y lo fue para separarla en las cárceles de los criminales adultos. Durante el siglo XIX y comienzos del XX no hubo una *intervención global* del Estado en torno a los problemas de la infancia abandonada y delincuente, continuando de forma generalizada el sistema de hospicios y casas de expósitos para unos y la cárcel común para los otros. Destacó, por ello, la labor reformadora desarrollada en la primera mitad del siglo XIX por el coronel Montesinos en el Presidio de Valencia. Montesinos trabajó para conseguir la separación de los niños presos de los mayores, creando una sección especial para los menores de dieciocho años, dotándola de talleres y escuela, además de procurar que los niños y jóvenes estuvieran asistidos por los mejores funcionarios a su cargo, con el fin de suavizar el rigor con el que hasta entonces venían siendo tratados.

En el ocaso del siglo XIX se va produciendo, entre determinados sectores de la sociedad, una especial preocupación por los temas de desviación social de los menores, similar al *Movimiento de salvación del niño* en Chicago, estudiado por Anthony Platt⁴³, que favoreció la aparición en esta ciudad del primer Tribunal para niños en 1899. Propiciado, muy probablemente, por este fenómeno social o, al menos en estrecha correlación con él, van a ir apareciendo una serie de leyes e instituciones, en un intento de afrontar la calamitosa situación social y humana de los niños marginados, vagabundos, abandonados y delincuentes o, simplemente los hijos de las familias abocadas a la miseria. En 1880 fue fundado, por iniciativa privada, *El Patronato de Nuestra Señora de la Merced* para la redención de niñas y niños presos de la ciudad de Barcelona. Años más tarde (1890) se reorganizó con el nombre *Patronato de Niños y Adolescentes Abandonados y Presos* que tuvo como presidente a Don Ramón Albó, quien presidiría más adelante el Tribunal Tutelar de Barcelona.

También se crearon varias escuelas de reforma que desempeñarían un papel importante como instituciones auxiliares de la futura Ley de Tribunales de menores.

⁴²FERNÁNDEZ VARGAS, VALENTINA y LORENZO NAVARRO, Luis: *El niño y el joven en España* (siglos XVIII-XX). *Aproximación teórica y cuantitativa*, Anthropos, Editorial, Barcelona, 1989.

⁴³ Platt, Anthony: *Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia*, Siglo XXI, México, 1982.

Destacar, en este sentido, la *Escuela de Santa Rita* (1875) en Madrid, la escuela denominada *Asilo Toribio Durán* (1890) en Barcelona y la escuela de reforma creada por los *Terciarios Capuchinos* en Dos Hermanas (Sevilla). En Valladolid existía en 1904 un Patronato que sostenía a un asilo que, por Real Decreto de 28 de marzo de 1912, se transformó en *Escuela de Reforma*. En 1906 se creó un *Patronato de Jóvenes Presos y Abandonados* en Madrid. Por iniciativa de Juan Viso, funcionario de prisiones se creó en 1910, en Córdoba, un *Centro de Reeducción de menores*, costado por el Ayuntamiento de la ciudad.

Lo realmente destacable a principios del siglo XX es el interés, desconocido hasta entonces, por el estudio del niño, en las diversas facetas que componen su conducta. Los aspectos biológicos, psicológicos, pedagógicos y sociales del niño son abordados en una profusión de trabajos sin precedentes en épocas anteriores. El precursor de este cambio de actitud es, sin lugar a dudas, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), al señalar que “el conocimiento de los alumnos es indispensable para los educadores”⁴⁴. En el prefacio del *Emile* (1762) Rousseau plantea:

“Comenzad por estudiar mejor a vuestros alumnos porque seguramente no los conocéis”. Los presupuestos de Rousseau, al destacar que a “la infancia corresponde una realidad psicológica definida, es decir, que tiene maneras de pensar, sentir y actuar propias”, son reactivados en los inicios del siglo XX. Este interés general se traslada al ámbito concreto de la infancia abandonada y delincuente en el marco del movimiento filantrópico y proteccionista que se desarrolla en los albores de siglo en Estados Unidos y se extiende de inmediato por Europa y España.⁴⁵

Hasta la puesta en marcha de los Tribunales para Niños, el tratamiento de los menores desviados en nuestro país siguió por la doble vía del hospicio para los huérfanos, vagos y vagabundos y de la cárcel para los infractores de la ley penal. Con respecto a éstos, los sucesivos Códigos Penales fueron restringiendo paulatinamente la aplicación de la ley penal común⁴⁶.

⁴⁴ PALACIOS GONZÁLEZ, Jesús.: *La cuestión escolar*, Laia, Barcelona, 1978.

⁴⁵ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Vicente. y GRANADOS GUIJARRO, Teresa: “Apuntes para una historia de las instituciones de menores en España” en *Revista de Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 2002, vol. XXII, nº 84, pp.121-138.

⁴⁶ GONZÁLEZ ZORRILLA, Carlos: “La justicia de menores en España”, en De Leo Gaetano, *La justicia de menores*, Teide, Barcelona, 1985.

La separación judicial de mayores y menores ante los tribunales se inició y desarrolló, por primera vez, en Estados Unidos. Esta reforma judicial se produjo en el Estado de Illinois donde se creó el primer Children Court en la ciudad de Chicago en 1899, extendiéndose progresivamente al resto de los Estados. Al tener cada Estado su legislación propia, su organización judicial diferente, todos los Tribunales para niños eran también muy diferentes unos de otros. Sin embargo todos ellos ofrecían rasgos característicos comunes: a) La especialización del Tribunal; estaba reservado exclusivamente a los niños. En la mayoría de los Estados la edad límite se situaba a los 16 años, rara vez a los 18. La especialización del Tribunal conlleva: 1) La especialización del Juez; 2) La especialización de la sala de audiencias; y, 3) La especialización de los métodos judiciales. El juez de menores para cumplir su labor estaba auxiliado por funcionarios especiales, los *probation officers*, una especie de *Delegados del Tribunal*. El Tribunal debía decidir, no ya una pena ante el delito, sino un remedio material o educativo ante la situación delictiva de un niño concreto; b) La supresión de la cárcel para los niños. Un menor de 16 años no iba jamás a la cárcel común. Las alternativas que se planteaban eran casas de reforma, casas de corrección, escuelas profesionales especiales, patronatos, colocación en familias...; c) La libertad vigilada. El juez podía decretar que el menor continuase en su domicilio familiar pero bajo la supervisión y control de los *Delegados del Tribunal*. Este modelo se extendió por toda Europa Occidental, primero en Suiza, hasta llegar a España, primero la ley, más tarde los tribunales.

La historia de la infancia: el menor sujeto de protección.

Lloyd DeMause abre su trabajo dedicado a “La evolución de la infancia” afirmando que la historia de ésta “es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”.⁴⁷ En el caso español estas palabras encuentran plena validez si consideramos que la atención al niño toca la conciencia del Estado a finales del siglo XIX, cuando en julio de 1878 se penaliza por ley a quienes someten a los niños a ejercicios peligrosos en espectáculos públicos. En 1831, el inglés Richard Ford llegó a decir de una institución sevillana dedicada al cuidado de los niños, el *Hospital de Expósitos La Cuna*, que en ella “la proporción de los que mueren es espantosa; se trata ciertamente de un sistema organizado de infanticidio. La muerte es una merced para el

⁴⁷ DeMAUSE, Lloyd, *Historia de la infancia*, Alianza, Madrid, 1982.

niño...”⁴⁸. En el último tercio del siglo XIX se genera un espíritu de *piedad* hacia la infancia que cristalizará en el siglo XX, siglo llamado “*del niño*” Esta corriente pro-infancia es impulsada, entre otros, por Concepción Arenal, “que muestra su desesperanza ante la utilidad de cualquier ley que pretenda aliviar la ‘desgraciada suerte de los niños abandonados y miserables’; y esto porque el problema de la infancia lo es antes de conciencia cívica y de educación en la mujer”⁴⁹ Esto, sin embargo, no le impidió proponer un *Proyecto de Ley sobre mendicidad infantil*, proyecto que se publicó en el *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza* en los años 1887 y 1888.

Esto no es más que una muestra de la iniciativa privada que, si bien no gozó de una plasmación concreta en la normativa, sí contribuyó a la creación de un clima propicio a la infancia que predispondría el ánimo del legislador en favor de la defensa del niño. Primero, atendiendo a su situación laboral y a la educativa dentro de aquélla; luego, protegiéndolo tanto de los particulares como del derecho vigente, a la vez que procuraba su corrección; más tarde defendiendo su propia niñez y respetando su conciencia y, por último, preservando su inocencia de cualquier manipulación Así, la Ley de 13 de marzo de 1900, intenta proteger su situación laboral prohibiendo toda clase de trabajo a los menores de 10 años, y el trabajo nocturno a los niños de ambos sexos, de edad inferior a los 14 años. No obstante, la ley fija en los diez años la edad en que los niños pueden ser legalmente empleados en un trabajo.

Poco después de la promulgación de aquélla, otra disposición insiste en la obligación de los patronos de conceder a los menores de dieciocho años una hora del tiempo de trabajo reglamentario para que adquieran instrucción elemental, por lo que habrán de crear escuelas en sus fábricas y talleres para los obreros menores. En relación con ello, dice Ribera Cañizares: “En todo el Reino son de aplicación general leyes también orientadas como la de 1878, sobre los trabajos peligrosos de los niños; la ley de 13 de marzo de 1900, sobre trabajo de mujeres y niños en talleres y fábricas; la de 23 de julio 1903, sobre la represión de la mendicidad de menores, y la de 1904 sobre

⁴⁸ FORD, Richard: *Manual para viajeros en Andalucía y lectores en casa*, Turner, Madrid, 1980, en FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: “Perspectiva histórica de la protección a la infancia en España”, *Historia de la Educación*, 3, 1984, pp. 191-213.

⁴⁹ ARENAL, Concepción: “Niños expósitos y mendigos”, *B.I.L.E.*, 261 (1887) 369, en FERNÁNDEZ SORIA, J. M. y MAYORDOMO PÉREZ, A.: “Perspectiva histórica de la protección a la infancia en España”, *Historia de la Educación*, 3, 1984, pp. 191-213.

protección a la infancia, así como la de 31 de diciembre de 1908, reguladora de la prisión preventiva de menores”⁵⁰.

Un límite laboral más viene regulado por una disposición de 1902 que establece la prohibición de que la jornada de trabajo para mujeres y niños pueda exceder de once horas diarias. Pero no todos los trabajos conllevan los mismos riesgos. Por ello se hizo necesario complementar la Ley de 1900, clasificando las industrias consideradas como peligrosas, insalubres o incómodas de cara a la protección de mujeres, niños y obreros jóvenes. Esta laguna legal quedó cubierta por el Real Decreto de 24 de enero de 1908, que prohibía el trabajo de menores de 16 de ambos sexos y a las mujeres menores de edad en las industrias que comporten riesgos de intoxicación, de explosión, incendio...

Estas primeras normas, afectaban no sólo a la esfera pública, sino también al de las familias, al prohibir a los padres la explotación laboral de sus hijos; proveer la creación de instituciones y establecimientos de corrección paternal y prohibir la mendicidad de los menores de 16 años, lo que conllevaba la imposición de multas a los padres y el ingreso de los menores en establecimientos de beneficencia. Julián Juderías nos dice que “esta ley no tuvo la menor eficacia porque la población no podía aceptar que una familia no pudiera pedir libremente en la calle”. También pudo haber una segunda causa de rechazo, cual era la intervención de los poderes públicos en esos escasos espacios de autonomía que tenían las clases populares.

De lo visto hasta ahora se desprende que los intentos de redención laboral de la infancia no borran el abandono y los abusos a que el niño estaba sometido, por lo que se hacía urgente una normativa específica de protección a la infancia. Se promulgó así la *Ley de protección a la infancia*, de 12 de agosto de 1904, *Gaceta de Madrid*, del 17, llamada *Ley Tolosa*, en la que se establece que “la protección comprende tanto la salud física como moral de los niños abandonados menores de diez años”. Su impulsor y autor, fue Manuel de Tolosa Latour, médico católico y gran filántropo, que, desde el *Consejo Superior de Protección a la Infancia*, trabajó incansablemente para paliar las enormes carencias de los niños marginados de su época. La acción protectora se regula de acuerdo a la jerarquización territorial, quedando la misma a cargo del *Consejo Superior de Protección a la Infancia* —presidido por el ministro de Gobernación—, de

⁵⁰ “Comentarios a la ley de 25 de noviembre de 1918 sobre organización y atribuciones de los tribunales para niños”, en BERGAMÍN, F. y otros, *Tribunales Tutelares para Niños*, Góngora, Madrid, 1929.

las Juntas Provinciales —bajo la presidencia del Gobernador— y las Juntas Locales, presididas por el Alcalde. Habría que esperar casi cuatro años más, a 1908, para que se publicase el *Reglamento que regula la Ley de Protección a la Infancia*, Real Decreto de 24 de enero de 1908, *Gaceta de Madrid*, del 26. Como recoge esta Ley, la protección atañe a la salud física y moral del niño menor de diez años, ya sean entregados a la “lactancia mercenaria”, estén en Casa-cuna, Escuela, Taller, Asilo, etc. Unas “medidas sobre la infancia que suponen acentuar el entramado social para evitar la socialización irregular de la infancia, a la vez que implica una evidente fiscalización de las clases populares”⁵¹.

Entre las funciones que conforman dicha protección figuran la inspección de cuantos centros recojan a estos niños, la investigación de los daños o explotación a que sean sometidos, la persecución de los delitos contra menores, ‘educación protectora’ para los niños ‘moralmente abandonados’, ‘corrección paternal’ para los rebeldes o delincuentes, educación e instrucción de los anormales... El ejercicio de estas funciones correspondía a las Juntas y Consejos ya citados. El *Consejo Superior de Protección a la Infancia* quedaba dividido en cinco secciones: Puericultura y Primera Infancia; Higiene y educación protectora; Mendicidad y vagancia; Patronatos y corrección paternal; y Jurídica y legislativa. Cada una es responsable de la protección infantil en las parcelas que su propio enunciado delimita.

Esta Ley se centró sobre todo en la regulación y control de la lactancia mercenaria, esto es, de las nodrizas que contrataba el Estado para la alimentación y crianza de los niños huérfanos y abandonados. Si desde el punto de vista legal supuso un significativo avance y reflejo de la sensibilidad que se estaba despertando en la sociedad con respecto a los niños marginados, no lo fue tanto para estimular la creación de centros específicos de educación especial o reforma para estos niños.

En el fin de siglo fue cuando los poderes públicos empezaron a pensar en los niños como sujetos con identidad propia y con unas necesidades especiales, tanto más, cuanto mayor era su vulnerabilidad por el desamparo y el abandono. Sin embargo los códigos penales del siglo XIX eran demasiado sutiles, demasiado consecuentes con el

⁵¹ TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro: “La Infancia delincuente y abandonada”, p. 481.

criterio objetivo y con el principio *retribucionista*⁵², sin señalar la distinción sustancial entre el delincuente menor y el adulto.

La legislación hasta aquí descrita deja traslucir el estado de indefensión en el que se encontraba la infancia, no toda, por supuesto, sino sobre todo los hijos de las clases trabajadoras; se trataba de una situación de desamparo ante la sociedad y de desamparo ante las leyes que emanaban de ella. No en vano el niño quedaba sujeto al derecho penal y, no pocas veces, sometido al régimen carcelario común contra cuya práctica se alzaron las voces de filántropos e higienistas de la época. Contra esta indefensión, se erigieron instituciones como *El Protectorado del Niño delincuente* (1916-1926) auspiciado por Alicia Pestana, que al amparo de la *Institución Libre de Enseñanza* (ILE), se ocupaba, según sus propias palabras “en salvar a tantos niños que veíamos amenazados de muerte moral. Y esos niños eran los más desdichados: los que arroja la justicia de España a las cárceles, contra todo sentimiento de humanidad y contra todo instinto de previsión patriótica”⁵³.

Esta situación de desvalimiento infantil se va a ir corrigiendo gracias al nuevo espíritu tutelar y protector de la justicia. Como dice Alicia Pestana, ya no se trata de defender a la sociedad de un daño que pueda ocasionarle un pequeño delincuente, sino del “derecho de todo niño a que le defiendan de los peligros de la ineducación, de todos los trágicos matices del abandono”. El primer intento importante de la *Institución* fue la creación de la *Escuela de Detención* en Madrid, con el fin de evitar “al menos a los niños de la capital la odiosa contaminación de la cárcel”. Sin embargo, esta Escuela no pasó de la etapa de proyecto debido a dificultades financieras, con lo que el *Protectorado* hubo de hacer frente al problema de los niños encarcelados ensayando, primero, procedimientos de libertad vigilada, como el sistema de la colocación en familias, en las que podrían encontrar un ambiente propicio para su reeducación; y después, a través de la fundación en 1920 de la *Casa-Escuela Concepción Arenal*. El carácter familiar de ésta propiciaba el conocimiento y educación de las aptitudes de los niños excarcelados, en aras a su posterior reinserción en la sociedad con un empleo fijo. *La Casa-Escuela* cerró sus puertas en 1924, y dos años más tarde, con la implantación en Madrid del Tribunal para Niños, lo hizo *El Protectorado*.

⁵² Proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta.

⁵³ PESTANA, Alicia: “El protectorado del niño delincuente”, *B.I.L.E.*, 721 (1920) p. 101.

Se va asumiendo, paulatinamente, y en una perspectiva secularizadora, la concepción de un Estado valedor y sustento de los necesitados, en el marco de un régimen liberal, en el que la acción caritativa se empezaba a entender como una cuestión de toda la sociedad, sustituyendo la palabra *caridad* por el concepto de *beneficencia*; la *acción social* va a estar regulada por el Gobierno y las Administraciones (beneficencia pública) mediante leyes especiales al efecto. Se produce una aceleración del proceso secularizador debido a las políticas desamortizadoras de los gobiernos progresistas. Así, sucesivas leyes irán reclamando para el poder civil el control asistencial, aunque siempre contando con la colaboración de la Iglesia.⁵⁴ Sin embargo, las autoridades públicas se van a mostrar incapaces, por falta de medios y de voluntad política de cubrir las necesidades de la población marginal. El Código Civil, avanzado, de buena factura técnica, fue tan solo papel mojado, por no llevarse a la práctica jurídica.

A principios del siglo XX, circunstancias varias, sobre todo de carácter socioeconómico, caldo de cultivo de la llamada “*cuestión social*”, harán aparecer el fenómeno genérico de la *infancia abandonada y delincuente*, sobre el que filántropos, arbitristas, higienistas y educadores propusieron medidas, en un intento para implicar y hacer intervenir al poder público del que se demandaron normas y actuaciones (legales, higiénicas, asistenciales) consecuentes, dirigidas a la “consecución de individuos adaptados a los modelos sociales aceptados y preestablecidos”. Así fijarán la atención en el colectivo infantil, víctima sobre el que más violentamente se manifiestan las consecuencias del pauperismo, fundamentalmente urbano, derivado de los procesos de industrialización y de las migraciones campo-ciudad.⁵⁵

La cuestión de la *infancia abandonada y delincuente*, se irá transformando, paulatinamente, en un problema de orden público en las ciudades más pobladas, en el caso de España, Madrid fue el caso más significativo. Su aparición coincidió con las que se han determinado como otras formas de “*patología social*”, como eran la “*degeneración*” producida por el consumo de alcohol entre las clases populares, y en un contexto social de movimientos sociales como el terrorismo anarquista o las reivindicaciones revolucionarias de las “*masas*” populares. “Las respuestas desde las

⁵⁴ RUIZ RODRIGO, Cándido: *Protección a la infancia en España. Reforma social y educación*, Universitat de Valencia, Valencia, 2004.

⁵⁵ RUIZ RODRIGO, *Protección a la infancia en España...*

instancias gubernativas pasaban por las medidas represivas, con el refuerzo de los mecanismos que permitían una mayor disciplina moral y social. El movimiento protector de la infancia hay que situarlo en ese contexto, igual que la patologización de los movimientos sociales”⁵⁶. Es una de las respuestas que se dan desde el aparato institucional del Estado, dentro de la creciente implicación en el gobierno de la población mediante la extensión de la tutela sobre aquellos que no tienen la capacidad para cubrir sus necesidades, o bien se apartan del modelo considerado “normal”.

La legislación protectora

La primera forma que adopta la creciente preocupación por la infancia es a través de la formación de comisiones de estudio. Todas ellas parten desde las cátedras de Derecho Penal; se creó la *Escuela de Criminología*, plasmando su trabajo en Congresos Nacionales desde 1909, en La Coruña y en Barcelona y Valencia en 1914 en los que se intentó la modificación de las leyes criminales y la elaboración de los oportunos proyectos de creación de tribunales tutelares⁵⁷, propuesta de reformas legislativas y promoción de la creación de nuevas instituciones o vigilar las existentes. Se intenta implicar a los padres en la educación y el gobierno de los hijos y, en el caso de que no lo hagan, que sea el Estado el que asuma esa responsabilidad.

Con la codificación penal del Estado liberal es cuando aparece en el horizonte social, pero sin tener todavía derivaciones claras en el aspecto penitenciario y en otras prácticas sociales, el grupo de población definido como infancia y juventud delincuente. Ya en el primer código penal del período liberal, de 1822, se especifica el lugar que va a ocupar el menor delincuente y su grado de responsabilidad, que se mantendrá en la regulación posterior hasta la formación de los tribunales para niños. Así, el artículo 23 del Código Penal de 1822, establece que: “no pueden ser considerados como delincuentes ni culpables los menores de siete años, pero si es mayor de esa edad y menor de 17 y cometiere alguna acción que tenga el carácter de delito o culpa, se examinará si ha obrado o no con discernimiento o malicia...”.

En el Código Penal de 1822 se declaraba inimputables, exentos de responsabilidad, a los menores de 7 años. Para los mayores de esa edad y menores de 17 procedía examinar si habían obrado con discernimiento y malicia, según el desarrollo de

⁵⁶ TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro: “La Infancia delincuente y abandonada”, p.479.

⁵⁷ JIMÉNEZ VCENTE, INOCENCIO: Los tribunales tutelares...

sus facultades intelectuales. Si no había discernimiento se declaraba al menor como peligroso y cabían dos posibilidades: se le entregaba a sus padres, si estos mereciesen confianza respecto a su educación, o en su defecto, se ingresaba en una casa de corrección por el tiempo que el juez considerase conveniente, con tal de que nunca superase la época en que cumpliera los 20 años de edad. Estas casas de corrección, sin embargo, eran prácticamente inexistentes en todo el país.

En consecuencia, los mayores de 7 años que a juicio del Tribunal hubiesen obrado con discernimiento, sufrían la pena de cárcel igual que los adultos. El Código Penal de 1848 declaraba exento de responsabilidad al menor de 9 años, y también al mayor de 9 y menor de 15 a no ser que hubiese obrado con discernimiento, en cuyo caso se le imponía una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito que hubiese cometido. En caso de ausencia de discernimiento, se declaraba la irresponsabilidad del menor, sin que estuviera previsto adoptar algunas de las medidas correccionales que establecía el Código de 1822. Los Códigos de 1850 y 1870 mantuvieron esta misma regulación, restableciendo este último la previsión con respecto a los inimputables de su entrega a los familiares para su vigilancia y educación o su internamiento, por tiempo determinado, en un establecimiento de beneficencia destinado a la educación de huérfanos y desamparados. Todos estos Códigos consagran la idea del discernimiento como condición primera de responsabilidad. “El concepto de discernimiento no quedaba, como señala Guallart⁵⁸, suficientemente clarificado, por lo que han nacido interpretaciones muy distintas; si unos limitan el *discernimiento* a la *distinción del bien y del mal*, a la noción de moralidad y de responsabilidad, otros lo entienden en el sentido de la inteligencia, de la legalidad del acto, mientras unos terceros se fundamentan en la distinción entre los ‘delitos naturales e inmorales’ y los puramente positivos y de simple conveniencia social”. El Código Penal de 1928 acabó por fin con el sistema de discernimiento y elevó a los 16 años el límite de la imputabilidad⁵⁹.

Bajo los conceptos de malicia, discernimiento y capacidad intelectual, la legislación penal introduce un factor de arbitrariedad que va a dejar al menor (y a su familia, a la que se extiende la carga del delito) en manos de las instancias judiciales.

⁵⁸ Guallart, José: *El derecho penal de los menores*, La Académica, Zaragoza, 1925.

⁵⁹ Pero los Tribunales para Niños, tanto en los informes médicos, apartado moral, como en el examen del menor, siempre insisten en si es capaz o no de *distinguir entre el bien y el mal*.

Esta ley penal, y las sucesivas, delimita los términos en los que se enmascara el problema del menor que comete una infracción penal. Se especifica cuál es la edad penal y en qué circunstancias el menor debe ser considerado responsable, a la vez que perfilan un tratamiento penal diferenciado del de los adultos, mediante la propuesta de creación de casas de corrección. Otro aspecto común en las diferentes leyes será el de determinar la responsabilidad de los padres y los tutores en la vigilancia de los menores y, en el caso de que éstos no cumplan, que sea el Estado, a través de instancias tutelares, el encargado de tutelar y “gobernar” a los menores”. Es el inicio de una tendencia en la intervención estatal en aspectos sobre los que antes delegaba en otras instancias sociales de titularidad privada.

Por primera vez, y de forma sistemática, el Código Civil de 1889, establecerá cuáles son los deberes y derechos de los padres respecto a los hijos, en su artículo 155: “Los padres tienen el deber de alimentarlos, instruirlos, la facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente y cuando no puedan hacerlo, podrán impetrar el auxilio de la autoridad gubernativa”, y aún para la retención de los mismos en establecimientos de instrucción. Las disposiciones del código civil tuvieron como correspondencia la fundación de instituciones en las que pudiera llevarse a cabo esa labor correctora que las familias no eran capaces de realizar sobre sus hijos. Educación, trabajo, higiene y gimnasia son los fundamentos de la terapia correccional, “el hijo díscolo en la familia, el rebelde en la escuela, el joven huérfano de padre cuya madre no ha sabido o no ha podido reducirle a la obediencia, el abandonado, el mendigo, el pervertido por las malas compañías, el joven en fin, a quien tendría que encarcelarse por vagabundo o por delincuente. Todos esos seres forman la población ordinaria del asilo”⁶⁰.

Las relaciones estadísticas mostraban la creciente participación de los menores de edad en la comisión de delitos o infracciones. Esto constituía un ejemplo más que justificaba la denominada “alarma social”. Se pide a los poderes públicos que se articulen sistemas tutelares para gobernar de forma conveniente y separada de los adultos a los menores delincuentes y a los que están en una situación potencialmente peligrosa o predelictiva. El menor delincuente pasa a ocupar un lugar destacado en los discursos y preocupaciones de los tratadistas en cuestiones criminales y penales. A la vez, grupos de las clases medias se entregarán en Europa y EEUU a la misión de

⁶⁰ JUDERÍAS, Julián: *La juventud delincuente*, p.161.

proteger a las jóvenes víctimas de las taras heredadas de familias desordenadas que no cuidaban a sus hijos, bien por irresponsabilidad, ruptura del medio familiar o por mala socialización. Escribe Julián Juderías:

“los delincuentes jóvenes proceden, generalmente, de las clases inferiores de la población, aquellas cuya existencia oscila entre el trabajo embrutecedor y la amenaza del hambre, entre el alcohol y la fábrica. Los niños de esas clases, expuestos a cometer delitos, porque nadie corrige sus malos instintos y porque el ambiente que respiran es el más a propósito para su degeneración moral, como lo es también su degeneración física”⁶¹.

Entre las causas que explican el constante aumento de la delincuencia de los menores están las transformaciones producidas por los desplazamientos de la población hacia las ciudades y el crecimiento de éstas. La ciudad, con sus ritmos de trabajo y nuevas formas de sociabilidad, había alterado los vínculos comunitarios provocando que no actuaran sobre ellos las tradiciones ni los vínculos familiares. Los sociólogos de la época encuentran en la ruptura familiar una de las causas del aumento de la criminalidad. La mayoría de los niños delincuentes procedía de familias que no se responsabilizaban de la conducta y educación de sus hijos.

A principios del siglo XX, las ciudades españolas más populosas están invadidas por pandillas de niños y jóvenes libres de la autoridad familiar, sin someterse a ninguna de las ocupaciones reservadas para ellos –escuela o taller—La vida desordenada de la familia popular es para el criminólogo de clase media, como Ramón Albó o Antonio Gómez Mesa o Giner de los Ríos (tenía laboratorio de criminología propio) la fuente de todos los males. Siempre asocian a las clases populares y la pobreza con la delincuencia de los menores. Viven en estrechas e insalubres viviendas, abandonan a sus hijos a las influencias perniciosas de la calle, donde se inician a la *golfería*... Las calles donde viven son las de los barrios más pobres en las que la “población presenta inferiores condiciones de moralidad” (descripción de Pascual Madoz en su Diccionario).

Hay consenso entre los tratadistas en señalar la pobreza como causa de la degeneración moral y física, pero rara vez esta constatación les lleva a realizar un análisis de carácter político para explicar las condiciones que llevan a parte de la población más frágil a la miseria. Para penalistas y sociólogos, los pobres lo son por

⁶¹ JUDERÍAS, Julián: *La juventud delincuente*, Madrid, 1912, recogido en “La Infancia delincuente y abandonada”, p.483.

inmorales, y sus hijos son delincuentes precoces por la mala herencia paterna o por la influencia perniciosa de la vida de la calle (del medio)⁶². En vez de buscar los remedios a la miseria de las clases más humildes, propondrán la creación de cuerpos de seguridad y de instituciones tutelares que vigilen y gobiernen estas poblaciones. La miseria y sus desórdenes serán utilizados como una vía de integración y absorción del conflicto que puede generar. Estos jóvenes vivían en una posición fronteriza, próximos a diversas instancias socializadoras, pero sin poder actuar sobre ellos, y es en ese lugar, entre la justicia, la escuela, la familia y las instituciones asistenciales, donde instalarán las instituciones tutelares.

Hasta ese momento, aunque no convivían directamente con los adultos, los menores estaban encerrados en el mismo espacio carcelario que éstos y no podían librarse del sello estigmatizador que imprimía el paso por las cárceles y establecimientos penales. La preocupación de la filantropía de finales del XIX y principios del XX, explica que todo proyecto de reforma penitenciaria, empezara señalando la urgencia de sacar a los menores del ámbito de influencia de los adultos. Cuando la delincuencia de los menores aumentó, y se hizo más visible la presencia de los jóvenes vagabundos en las ciudades, (800 niños cada día en Madrid, apunta Julián Juderías), fue “inevitable” que se planteara con mayor alarma la necesidad de crear instituciones específicas para los menores. Se trataba de crear instituciones y procedimientos que evitasen tanto la libertad de la calle como el encierro carcelario. Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 31 de diciembre de 1908, los menores de 15 años no debían sufrir prisión en las mismas condiciones que los demás procesados y podían quedar en libertad bajo garantía de sus padres o reclusos en un establecimiento benéfico, salvo concurrencia de especial perversidad, porque podían corromper a otros menores.

Para sacar a los menores de la cárcel y recibir un tratamiento específico, los “salvadores del niño delincuente”⁶³ pedirán la creación de tribunales tutelares de menores y los reformatorios como instituciones correctoras anejas. “Penalistas y

⁶² Son las teorías del Ciencia penal positivista que influyeron en la antropología criminal (influencia mutua) y sus investigaciones a su vez en la sociología. Se producirá una imbricación total entre las diferentes disciplinas que aborden el tema de la infancia delincuente.

⁶³ Expresión de Anthony Platt para referirse a los grupos de reformistas, higienistas y filántropos que, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mostraron su preocupación por la infancia y trabajaron por la mejora de sus condiciones de vida, aunque el autor llegue a la conclusión de que no fueran acertadas las medidas implantadas.

reformadores impregnados de ideas que suponían una combinación del darwinismo social con un *biologismo*⁶⁴, que nunca estuvo más seguro de la positividad científica de sus herramientas, términos como la degeneración y los aportados por la psiquiatría completarán el aparato conceptual que servirá de herramienta de análisis de los comportamientos considerados ‘anormales’⁶⁵. Se utilizará la ciencia para explicar el comportamiento humano desde las distintas especialidades; por un lado la criminología, que sintetiza las aportaciones de la psiquiatría y de la antropología física y social. Se incorporará, asimismo, la sociología criminal. Con todas estas aportaciones la infancia delincuente no pudo escapar al interés de los criminólogos, que buscarán las razones que llevan a un niño a cometer un acto delictivo; como los sociólogos, que indagarán en el medio social, que es el que moldea al individuo. Otros las buscarán en las leyes de la herencia y en las anomalías orgánicas y psicológicas la explicación de la precocidad criminal de muchos niños (será el apogeo de la antropología criminal).

Como prolongación de la *antropología criminal*, aparece la *Escuela penal positivista*⁶⁶ (aunque se podría decir que van hermanadas), que suponía la revisión de los

⁶⁴ Desde las teorías psicobiológicas, procedentes de la criminología, tratan de explicar el comportamiento criminal en función de anomalías o disfunciones orgánicas, en la creencia de que son factores endógenos o internos del individuo, los que al concurrir en algunas personas les llevan a una predisposición congénita para la comisión de actos antisociales o delictivos. Del estudio de los rasgos biológicos o del estudio psicológico de la personalidad criminal tratan de obtener aquellos factores que predisponen a algunas personas al delito.

⁶⁵ TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro: “La infancia delincuente y abandonada” op. cit. p. 489.

⁶⁶ Importada de Italia, la doctrina se muestra prácticamente unánime al considerar que la Criminología, tal y como la conocemos hoy en día, con el rango de una ciencia empírica independiente del Derecho penal y de otras ciencias afines, se debe a Cesare Lombroso, quien fundamentalmente en su obra *L’Uomo delinquente*, 1878, desarrolló su teoría sobre el “delincuente nato” o “criminal atávico”. Mantenía, con base en sus estudios biológicos y antropomórficos realizados sobre presidiarios, que el delincuente era una especie de ser atávico “que reproduce en su persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y los animales inferiores”, degenerado, marcado por una serie de anomalías corporales y cerebrales fácilmente reconocibles (mandíbulas enormes, pómulos altos, orejas grandes, frente prominente, insensibilidad al dolor, tatuajes, etc). El delincuente nato se caracterizaba por los rasgos psicológicos de: Insensibilidad moral; Precocidad antisocial; Vanidad; Imprevisión; Incorregibilidad.

La conclusión a la que llegaba no podía ser otra que la existencia de individuos que debían ser considerados delincuentes desde su nacimiento, ya que estaban fuertemente predestinados al delito.

Aunque matizando las ideas de Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo (los máximos exponentes junto al primero de la Escuela positivista italiana) otorgaron de igual modo un gran valor a los estudios basados en la predisposición biológica al delito, aunque también reconocieron que factores exógenos al delincuente, de tipo social, tenían influencia en la predisposición al mismo.

Indudablemente, la idea de que la **herencia genética** es la responsable de que la criminalidad, resulta sumamente atractiva. No sorprende, por tanto, que haya gozado de amplia popularidad a la hora de intentar explicar los comportamientos criminales. Si a esto unimos los últimos avances científicos realizados en el campo de la genética, las teorías biocriminológicas realizadas en la actualidad, deben ser consideradas con un mayor grado de rigor y seriedad.

Un intento de determinar si la herencia es una parte importante en la inducción al crimen, consistió en buscar similitudes en los comportamientos de individuos que estaban genéticamente relacionados unos con otros. Este fue el propósito del *general pedigree or family studies*, que se basaba en la presunción de

principios del derecho penal liberal, que define con precisión el ámbito de actuación de la justicia y de los jueces. La *Escuela penal positivista* introduce nuevos elementos ideológicos que justificarán el cuestionamiento de algunos de los fundamentos y garantías del derecho liberal clásico: en primer lugar, cuando un juez procesaba a un criminal por un delito, no enjuiciaba a un individuo que actuaba libremente sino a una persona que según evidenciaba la propia acción tenía alguna deficiencia en el uso de la razón que le impedía actuar con libertad (y de ahí la intervención de los planteamientos de procedentes de la psiquiatría y antropología); en segundo lugar, ya no castigan según la gravedad del delito y el daño social producido, sino el grado de peligrosidad. Por ello se considera conveniente transformar las cárceles modelo en psiquiátricos; por último, se rechaza todo principio de carácter especulativo o idea superior de justicia, por considerarlo insuficiente para legitimar la acción de gobernar y defender a la sociedad. Es la *utilidad* de una ley en el mantenimiento del “orden social” el criterio que debe guiar al legislador.

De aquí surgirá un movimiento general a favor de la revisión del funcionamiento de la justicia, una transformación que suponía prescindir de las garantías de la justicia penal liberal; se trata de reforzar los mecanismos de defensa social aunque sea a costa de sacrificar el garantismo que había caracterizado el derecho penal liberal. El positivismo no tuvo mucho éxito en los sistemas liberales que entran en el siglo XX con una clara tendencia a la democratización, pero sí influirá de forma clara en los sistemas políticos que llevan los mecanismos de defensa social hasta sus últimas consecuencias. Será también la ideología que fundamentará las leyes de carácter preventivo, como las de peligrosidad social, pero sobre todo, en lo que nos interesa, es la ideología penal que impulsará la creación de los Tribunales Tutelares, encargados de los menores delincuentes.

que existen familias con una herencia genética común, más determinadas hacia el crimen que otras. Un estudio de este tipo realizado en España, destinado a averiguar la ascendencia criminal de 250 chicos delincuentes, no llevó, en palabras de su autor, “a nada positivo a favor de la transmisión hereditaria de la criminalidad”. En SERRANO GÓMEZ, Alfonso: “Herencia y Criminalidad”, en *ADPCP*, tomo XXII, Fasc. III, septiembre – diciembre, 1969, págs. 532 y ss. cit., pág. 523. Según este autor, el procedimiento que siguen la mayoría de los autores que realizan este tipo de estudios e investigaciones, con ligeras modificaciones, se centra en los padres de los gemelos (siendo lo más habitual estudiar sólo la figura del padre). Si el padre fue delincuente, y por la transmisión de los caracteres hereditarios, uno de los gemelos monoigóticos delinque, al tener genes idénticos el otro gemelo, deberá delinquir también. Esto no ocurre igual en el caso de los gemelos dizigóticos o fraternos, en el que al no tener los genes iguales, que delinca uno de ellos, no implica la delincuencia del hermano.

Esta Escuela penal positivista se asentará, además en la explicación dada a las desigualdades sociales producidas por el capitalismo, pues no se cuestionaban los fallos del sistema, sino que “achacaban las desigualdades a que las personas no eran iguales por naturaleza y se consideraba que determinadas categorías de individuos –los delincuentes por ejemplo—lo eran por su enfermedad, estando determinados por factores biológicos, psicológicos o sociales que los hacían no libres”⁶⁷. La sociedad tenía el derecho a defenderse de tales sujetos “anormales” y una manera más ‘humana’ de hacerlo consistía en adoptar un carácter terapéutico, desplazando el punto de vista del delito al delincuente, donde la pena era sustituida por medidas curativas y no represivas que duraban hasta su ‘curación’⁶⁸. Todas estas ideas llevan a transformar el regeneracionismo, la reforma que abogaban por tratamientos preventivos y tutelares, por otros de tipo psicopedagógico, más cercanos a la psiquiatría, con la consideración de la herencia genética como causa principal de la delincuencia infantil.

En España, desde principios del siglo XX se pedía la creación de estos tribunales especiales, pero las circunstancias políticas del momento no ayudaron a que la preocupación de los gobiernos fijara su atención en un aspecto tan marginal, como lo es la infancia, para la gobernabilidad del país en esa coyuntura. La I Guerra Mundial y la Revolución Rusa en la escena internacional; en la interna, pistoleroismo patronal y anarquista, la guerra de Marruecos y la crisis final del sistema de la Restauración. En este contexto, el movimiento tutelar y la creación del Tribunal para Niños forma parte del movimiento de defensa general de la estabilidad social.

El proceso legislativo español para establecer los tribunales tutelares fue largo y tortuoso. Comenzó en 1909 y no terminó hasta 1918. Los tres primeros proyectos, el de 1909, elaborado por el jurista Enrique de Benito, el 1912 (realmente el primero oficial), firmado por Arias de Miranda, y el elaborado, casi inmediatamente, por el catedrático de derecho penal, Valdés, fueron intentos fallidos. Con ocasión de la Asamblea Nacional de protección a la Infancia y represión de la mendicidad, celebrada en Madrid en 1914, se dio lectura a la proposición de ley de Montero-Ríos y Villegas que se tradujo en Proyecto de ley en 1915 y en uno nuevo en 1917. No fue hasta el 4 de mayo de 1918 cuando Montero-Ríos pudo presentar al Senado su proposición de Ley de

⁶⁷ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat: “Los Tribunales para niños. Creación y desarrollo”, *Historia de la educación*, 18, 1999, pp. 111-125.

⁶⁸ GONZÁLEZ ZORRILLA, Carlos: “La justicia de menores en España” en DE LEO, Gaetano, *La justicia de menores*, Teide, Barcelona, 1985, pp. 113-146.

Bases, aprobada en Cortes y promulgada en la Gaceta de 15 de agosto de 1918. Utilizando la autorización de la Ley de Bases, se desarrolló el articulado de la primera Ley española sobre organización y atribuciones de los Tribunales para niños de 25 de noviembre de 1918, publicada el 27 en la Gaceta y el Reglamento, redactado por Montero-Ríos y Edelmiro Trillo, aprobado por Real Decreto de 10 de julio de 1919. Los Tribunales para niños, una vez creados, se incorporaban al Consejo Superior de Protección a la Infancia creado el 20 de junio de 1904, junto a las Juntas Provinciales y Locales de Protección a la Infancia. Ya estaba la ley, había de venir la práctica.

La legislación exige que el Tribunal sea organizado como requiera su especialidad: que se establezca un enlace entre el Tribunal con las instituciones protectoras que ya existen, y que se creen las demás que sean necesarias. La ley no es eficaz sin las instituciones auxiliares.

Nuestra ley, siguió el criterio, excepcional en España, “de desconfiar de la potencia creadora de la Gaceta”⁶⁹ y de no aplicar la legislación protectora de los menores donde no fuera viable, es decir, no autorizar la instalación de un Tribunal donde no hubiera “benefactores vocacionales” que soportaran las principales cargas, y donde no hubiese disponibles instituciones auxiliares que permitieran al Tribunal realizar, desde el principio, sus actuaciones de observación, protección y reforma (la misma idea se recogió en el Decreto-Ley de 3 de febrero de 1929 de reforma de la organización de los tribunales tutelares, vigente cuando el catedrático de derecho penal, Inocencio Jiménez, escribió su obra). Las características más relevantes de esta ley son las siguientes:

* Se prevé la creación de un Tribunal especial para niños, en todas las capitales de provincia y en las cabezas de partido en las que existan establecimientos especiales dedicados a la infancia abandonada y delincuente. El Tribunal estaría formado por un juez de primera instancia, quien lo presidiría, y dos vocales junto con sus suplentes. Sería, por tanto, un tribunal colegiado. Ninguno de estos cargos era remunerado.

* El Presidente del Tribunal puede ser persona ajena a la carrera judicial. Y de hecho lo fue en la mayoría de los casos.

* Son competentes en los delitos y faltas cometidos por los menores de quince años, bien correspondan al Código Penal o Civil, pero deja bien claro que en los

⁶⁹ Jiménez Vicente, Inocencio: *Los tribunales tutelares...* op. cit. p. 30

procedimientos de enjuiciamiento, el Tribunal no se someterá a las reglas procesales vigentes.

* Conoce también el Tribunal de la suspensión del derecho de los padres o tutores a la guarda y educación de los menores, pudiendo privar de la patria potestad a aquellos padres que abandonasen la educación de sus hijos y decretar también la libertad vigilada de los pequeños delincuentes.

* Sus resoluciones son ejecutivas y se nombrará dentro del seno del Consejo una Comisión de Apelación sin posterior recurso, compuesta de tres miembros y cuyo presidente será el funcionario de mayor categoría judicial del Consejo.

* Puede encargar el cuidado del menor a su familia, a otra persona o sociedad tutelar, o el ingreso por tiempo determinado en un Establecimiento benéfico particular o del Estado. “Únicamente podrá decretarse el ingreso del menor en un Establecimiento del Estado cuando aquél haya ejecutado el acto punible con discernimiento; pero para hacer esta declaración, será preciso que el Tribunal adquiriera convencimiento pleno de la evidente perversidad del menor”⁷⁰. Esta Ley, tal y como se plantea, promoverá la creación de Sociedades tutelares de menores.

La Ley de organización de Tribunales para Niños presentaba numerosas lagunas que habría de subsanar el Reglamento de 1919. Una ley tan esperada y de tal trascendencia no podía escapar a la crítica de los especialistas en derecho penal y otros juristas. Eugenio Cuello Calón, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, dice sobre la Ley de 1918, “al ubicar los Tribunales para niños en las capitales de provincia, ‘crea un injusto dualismo’, pues unos niños se beneficiarían de las medidas tutelares y educativas que la ley prevé, mientras que otros, los que delincan en localidades donde no existan estos establecimientos, continuarán sometidos al Código penal con todo su sistema represivo”⁷¹. En vez del Juez unipersonal, susceptible de encarnar un talante patriarcal, bondadoso y justo, la Ley establece el Tribunal colegiado con todo su aire de seriedad y academicismo, capaz de sobrecoger el ánimo del pequeño delincuente. El hecho de no prescindir del examen de discernimiento, que equivale al convencimiento del Tribunal de la ‘evidente perversidad del menor’, se considera regresivo, en cuanto que es requisito no contemplado en la moderna

⁷⁰ JIMÉNEZ VICENTE, Inocencio: *Los tribunales tutelares...*

⁷¹ CUELLO CALÓN, E.: “Los Tribunales para niños. Legislación española sobre esta materia”, *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 729 (1920) pp. 380-391.

legislación de los países europeos, sobre todo cuando se prohíbe la sujeción de los menores al derecho penal y con ello, la desaparición de las garantías inherentes a un proceso.

Para otros el solo nombre de *Tribunal* asusta; es el caso de Alicia Pestana que prefiere el acierto de Portugal al denominar a estos establecimientos, *Tutorías de la infancia*⁷². Pero, aun con ser tardíos en su creación, los Tribunales para niños lo fueron todavía más en su puesta en funcionamiento. En 1920 son una realidad en Bilbao y Tarragona; en 1921 en Barcelona y Zaragoza; después, en 1922, se instala el de San Sebastián; en 1923 los de Valencia, Murcia y Vitoria; y en 1925 aún se concebía como una ‘pronta realidad’ la creación de estos Tribunales en Madrid. Con objeto de paliar la carencia de organismos apropiados, ya se habían constituido a principios de siglo, una serie de centros con la pretensión atender a la infancia, como la *Escuela de Reforma y corrección* de Alcalá de Henares, establecida por R.D. de 17 de junio de 1901; El R.D. de 13 de febrero de 1903 se ocupa de las escuelas-asilo de Madrid; en 1907 comienza a construirse en Carabanchel Bajo, la *Escuela de Reforma y Asilo de corrección paternal de jóvenes*, cuyas obras, sin embargo, no finalizarían hasta 1925.

La Comisión directiva de Tribunales Tutelares se preocupó de que la ley fuera encontrando medios para poder ser aplicada en toda España. Pero se necesitaban también mejoras en los propios textos legales. La ley fue mejorada en la aplicación, nos dice Inocencio Jiménez, y reformada por el Real Decreto de 15 de julio de 1925. Esta norma obligó a modificar el Reglamento el 6 de septiembre del mismo año. La reforma de la ley elevó a 16 años el límite de la jurisdicción de los Tribunales de Menores (lo que obligó a una modificación del Código Penal por Decreto-ley de 14 de noviembre de 1925 que elevó la mayoría de edad penal a los 16 años), los acuerdos de internamiento ya no debían llevar límite de tiempo y se añadió una figura de internamiento breve, por unos días, y la *reprensión suave*, al lado de la *reprensión pura*, existente desde 1918. Lo cierto es que esta reforma concedió mayor libertad de acción a, los ahora llamados, *Tribunales de Menores*.

⁷² PESTANA, Alicia: “El Tribunal especial para niños”, *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 779 (1925), p.41.

La escuela: la enseñanza e instrucción pública

La importancia de atender a la infancia, tanto por sus valores instrumentales para la familia como para el Estado, pero también por su valor como una etapa de la vida fundamento de la personalidad del futuro, fue la esencia de las conquistas sobre la infancia, el menor con entidad propia (estatuto de la infancia), como un ser distinto del adulto. Una etapa débil que hay que proteger, que tiene necesidad de tutela, un campo de intervención y una inversión de futuro. Una etapa de la vida que requiere para su desarrollo su propio espacio, distinto del mundo adulto, que se traducirá, en el pensamiento de reformadores sociales, en el hogar y la escuela. Se tratará de la protección física y moral de los menores. La escuela y la erradicación del trabajo infantil serán a la vez, métodos y objetivos para la consecución de la protección de la infancia primero y su control después.

La convicción sociopolítica del valor de la educación como instrumento de prosperidad y bienestar colectivo, se concretaría en la progresiva puesta en marcha de distintos sistemas de educación hasta llegar a la escolarización universal obligatoria. La escuela funciona también, en este contexto, como *instancia tutelar*: un espacio propio del niño. La escuela sustraerá al menor de otros espacios peligrosos o claramente perversos, impropios o antinaturales (fábricas y talleres), de la corrupción y explotación por parte de los adultos. Estamos en una época en la que la atención a los menores se ve, por algunos, como un *signo de civilización* para la sociedad, en la que, corresponde moralmente al Estado esa atención, porque su misión tutelar le impone el deber de suplir la inferioridad del menor en la “lucha por la vida” y la impotencia del desvalido; y materialmente, por razones de defensa social, por las altas tasas de mortalidad infantil que se siguen dando en España. Lo que se calificaba como *adelanto de la moral social*, como *cultura humanitaria* o como *higiene moral*, venía propiciando un cambio sustancial en el tratamiento de la infancia.⁷³

Un intervencionismo estatal que redujera o acabara, siendo muy optimista, con la lacra social de la pobreza y el abandono, abiertamente demandado por los elementos más sensibilizados de la sociedad, pero que amparaba muchos matices: “desde el utilitarismo social y económico, se exigía productividad al ciudadano; al seguimiento de una educación/moralización que sujetara conductas excesivas y previniera la

⁷³ RUIZ RODRIGO, Cándido.: *Protección a la infancia en España...*

inestabilidad social; las exigencias médico-sanitarias, que velaban por la salubridad por la ‘raza’. Y todo ello con un carácter de imposición, desde arriba, a una sociedad menor de edad, necesitada de tutela”⁷⁴.

Pero, a la vez se entendía como necesaria la colaboración de todos (en especial las mujeres) en la *inexcusable y urgente acción del Estado*. Por tanto, la legislación, aun la mejor, debía ir acompañada de la indispensable acción individual y social, en especial en la supresión de la mendicidad—infantil fundamentalmente—. Es el momento del nacimiento de *Sociedades de la Infancia* que, según Julián Juderías “desarrollaron una actividad superior...habiendo redimido a miles de víctimas”.⁷⁵ Según Tolosa Latour, “el siglo XX tenía como deber proclamar y defender los derechos del niño”.

Junto a la normativa protectora de la infancia, se dictaron otras leyes que trataron de compeler a los padres a llevar a los niños a las escuelas. La educación de la niñez en la escuela obligatoria aparece estrechamente vinculada a la denominada *cuestión social*, al problema obrero. En un momento en el que las asociaciones obreras conocen un creciente desarrollo y se perfila una tendencia hacia los sindicatos y corporaciones de clase, las fuerzas del gobierno intentan, por diferentes medios, poner en marcha una estrategia de pacificación, de armonía social, de integración de la clase obrera y de mantenimiento del orden social. “La instrucción de los hijos de los trabajadores aparece así como uno de los dispositivos más eficaces para moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana”⁷⁶.

La imposición de la escuela obligatoria se verá posibilitada y reforzada por otras leyes sociales, estrechamente relacionadas con ella, leyes que regulan el trabajo de mujeres y niños, combaten la mendicidad infantil y protegen la infancia menor de 10 años. Así, el Ministro de Instrucción Pública, el Conde de Romanones presenta el proyecto de Ley de bases para la reorganización de la enseñanza, el 5 de noviembre de 1902. Para el ministro, “las sanciones a los padres, junto con la prohibición del trabajo a los menores (ley de 1900), constituyen las condiciones mismas que hacen posible la obligatoriedad” (*Notas de una vida (1901-1902)*, T. II, Madrid, p.78).

⁷⁴ RUIZ RODRIGO, Cándido.: *Protección a la infancia en España...*

⁷⁵ JUDERÍAS, Julián: *La infancia abandonada*

⁷⁶ VARELA, Julia y ÁLVAREZ-URÍA, Fernando: *Arqueología de la escuela*, La Piqueta, Madrid, 1991, p.178.

La burguesía reformista ve la necesidad de preservar a la infancia de su agotamiento físico y moral asegurando así la reproducción de la fuerza de trabajo. Cuando los médicos calculan una mortalidad entre los niños obreros de un 63%, se ponen en marcha programas de previsión, de profilaxis, de regeneración. Estos programas enlazan, en cierto modo, con las aspiraciones obreras que pretenden terminar con la depreciación de los salarios producida por el aumento de la oferta de la mano de obra ocasionada por la presencia de mujeres y niños en el mercado de trabajo. La mujer y el niño de las clases trabajadoras recibirán así un estatuto de tutela por parte del Estado que hasta entonces sólo se había ensayado con los locos y los colonizados. Es una protección que pasa por una fijación y una inmovilidad espacial: para la mujer, el hogar; para el niño, la escuela.

En 1900, se perfila un nuevo campo de control social íntimamente relacionado con la escuela del que se ocupará una nueva ley de 2 de agosto de 1903: el campo de la mendicidad infantil. Esta ley castiga con multas y arrestos a “los padres, tutores o guardadores cuyos hijos o pupilos menores de 16 años, que estén a su cargo, sean detenidos por hallarse mendigando, vagando o pernoctando en paraje público”. Como culminación y ratificación de este proceso, se da paso, como hemos visto, a un nuevo umbral de supervisión de la infancia con la Ley de Protección a la Infancia de 17 de agosto de 1904. Es el período comprendido entre 1900 y 1904 en el que se sitúa la constitución del campo de la tutela de la infancia de las clases populares y de la obligatoriedad escolar.⁷⁷

Las posiciones de los distintos grupos sociales frente a la obligatoriedad escolar estarán marcadas por cómo se sitúan respecto a la llamada *cuestión obrera* y, en último término, por la percepción que tienen de las clases trabajadoras. Así, *la Iglesia*, respecto a la cuestión social, su postura es predominantemente de carácter moral y religioso. Eso sí, reclama para sí, en exclusiva, la labor de adoctrinamiento de las *clases peligrosas*.

La mayoría de los *liberales* (frente a los conservadores) proclama el derecho del Estado a intervenir en la educación y en la instrucción pública. Los *institucionistas*, como Montero Ríos o Gumersindo de Azcárate, sostenían que el Estado, de acuerdo con la Constitución, tiene una función de tutor de la libertad de enseñanza y por tanto, le corresponde regularla porque se trata de una cuestión de derecho civil. “El gobierno

⁷⁷ VARELA, Julia y ÁLVAREZ-URÍA, Fernando: *Arqueología de la escuela*, p. 185.

tiene la obligación de cumplir con todo aquello que constituye un derecho para los ciudadanos, derecho de tutela, de protección y de auxilio, para que todos los ciudadanos reciban una educación acorde con el progreso de los tiempos”

Los republicanos entienden que la educación científica cae bajo la jurisdicción del Gobierno. Defienden de forma clara la independencia del poder civil frente a lo que consideran intrusión de la Iglesia, y afirman que la enseñanza moderna ha dejado de ser fundamentalmente teológica y metafísica para adquirir otros rumbos intelectuales más científicos y positivos. Los *socialistas* y *anarquistas*, sin representación parlamentaria en esos momentos, se ocupan también de la enseñanza, cuyas realizaciones prácticas en ese campo adquirirán cierto peso en un momento posterior. Cierta racionalismo y positivismo anticlerical era nota común a republicanos, radicales e institucionistas, notas que también encontramos en anarquistas y socialistas.⁷⁸

En la publicación anarquista *Boletín de la Escuela Moderna*, que influyó en medios libertarios, Ferrer Guardia decía:

“Ni la Iglesia ni el Estado pueden ser considerados para los trabajadores instrumentos de su emancipación intelectual. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, han de fundar sus propias escuelas. Los anarquistas son partidarios de una educación amplia, liberal, progresiva, integral y positiva”⁷⁹.

Los socialistas se confiesan también partidarios de una enseñanza laica y racional. Su posición respecto al Estado no es tan clara como la de los anarquistas, si bien en algunos textos critican la acción educativa de los gobiernos de la Restauración. En una época anterior (finales del siglo XIX), los socialistas sostenían posiciones más radicales y también para ellos la emancipación de la clase obrera ha de ser obra de los propios trabajadores (Pablo Iglesias en 1889). En 1904, ya Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está en una vía más reformista, los intelectuales y la ciencia adquieren mayor importancia en sus planteamientos y se produce un acercamiento a racionalistas e institucionistas; se deja de hablar de autoeducación y, más que en las luchas, la emancipación del trabajador parece radicar cada vez más, en su esfuerzo, su inteligencia, su virtud.

⁷⁸ VARELA, Julia y ÁLVAREZ-URÍA, Fernando: *Arqueología de la escuela*, p. 190.

⁷⁹ Recogido en VARELA, Julia y ÁLVAREZ-URÍA, Fernando: *Arqueología de la escuela*, p. 193.

¿Por qué esa convergencia de los grupos sociales en aceptar como natural—y por tanto incuestionable—la necesidad de un espacio específico para la civilización de la infancia?

La escuela, espacio de socialización por excelencia del “niño obrero”, se convierte en objeto de concurrencia en la medida en que los diferentes grupos pretenden perpetuarse moldeando el alma de las futuras generaciones en la que se decide la sociedad del porvenir. Parece claro que los distintos grupos políticos y sociales están convencidos de la convergencia existente entre control político y control de la educación.⁸⁰

Si la escuela primaria es potenciada en esta época se debe a que es entonces cuando existe un consenso social (desde arriba), un acuerdo prácticamente unánime en considerarla como la institución más idónea para proporcionar a los futuros trabajadores “la suma de conocimientos indispensables a toda persona civilizada.”⁸¹ Así habla Giner de los Ríos:

“Yo no sé si por ley de naturaleza o más verosímilmente por la del tiempo, entre las fuerzas civilizadoras de nuestra sociedad la influencia de la enseñanza es la mayor y la más íntima”⁸².

La evolución camina hacia la ciencia y la conciencia ligadas ambas a la verdadera civilización. Locos, salvajes, criminales y primitivos participan del tronco común de la involución degenerativa. El programa *regeneracionista* encuentra su lógica en el interior de estas coordenadas.

Políticos, pedagogos de masas, misioneros sociales, intentan instituir, en nombre de su verdad, una tutela social tan eficaz y prolongada como exija el proceso civilizador; de otro modo las pasiones de las muchedumbres darían al traste con el orden existente y afirman en nombre de la ciencia positiva:

“Las investigaciones recientes sobre etnografía, antropología y ciencia de la civilización, enseñan que cuanto más libre menos civilizado es el hombre”⁸³

⁸⁰ Cuestión ésta en la que se muestran de acuerdo tanto Ruiz Rodrigo (historiador), Trinidad Fernández (político) como Julia Varela y Álvarez Uría (sociólogos), en sus respectivas obras, ya referidas. Y no se trata de la *Teoría del Control* o del *Etiquetamiento*, muy queridas por algunos sociólogos de finales del siglo XX, que en ningún momento menciona ninguno de ellos en sus obras.

⁸¹ VARELA y ÁLVAREZ URÍA: *Arqueología de la escuela*, p. 199.

⁸² Citado por Y. Turín en *La educación y la escuela en España de 1874 a 1902*, Aguilar, Madrid, p.54.

⁸³ VARELA y ÁLVAREZ URÍA: *Arqueología de la escuela*, p.202.

Los mismos representantes de la Escuela Moderna⁸⁴—que tanto atemorizaron a los Gobiernos—afirmaban que el niño es como un pequeño salvaje, un buen salvaje, al que la ciencia pedagógica puede ayudar a salir de la incertidumbre y de la inconsciencia. Al mismo tiempo la civilización del “niño obrero” servirá como punta de lanza para la transformación del hogar proletario.

Freud define al niño como *perverso polimorfo* y Lombroso (Escuela positivista italiana) lo considera un *pequeño criminal*, y los agustinos insisten en el estado de naturaleza caída; la ciencia positiva viene a convencer que el niño es un pequeño salvaje al que hay que civilizar; y máxime si se trata de un “niño obrero”, salvaje entre salvajes por su modo de vida, su escasa alimentación y el deplorable medio en que vive. El trasfondo que hace que todos los grupos sociales acepten un espacio civilizador identificado, de forma prácticamente unánime con el modelo escolar, parece responder, además de a razones sociales y políticas, a *razones “científicas”*, avaladas por categorías provenientes del darwinismo y del positivismo (como ya veremos, sucedió también en el mundo jurídico de la mano de Dorado Montero). La fusión de ambos no sólo sirvió para naturalizar los procesos sociales, sino que elevó a categoría científica la inexorable *ley de los avances progresivos* tan unánimemente aceptada por los representantes de la socialdemocracia, del liberalismo y del anarquismo⁸⁵.

En el caso español la presencia constante de una serie de pensadores como Buylla, Posada; Giné y Partagás, Dorado Montero, Giner de los Ríos, Simarro... en publicaciones socialistas y anarquistas (*Revista Blanca*, *La Aurora Social*), en las que se encuentran alabanzas a Lombroso, Spencer, Haeckel... (a los positivistas) es uno de los indicios de que existe una amalgama teórica que sirve de puente y neutraliza las divergencias que los distintos grupos presentan. Se trata del culto a la ciencia positiva introducida por el krausismo y reforzada por la *Institución Libre de Enseñanza* (ILE). Supone el paso del reformismo y correccionalismo al positivismo. Las alianzas en el orden teórico se plasmarán en alternativas prácticas semejantes. Así Ferrer Guardia explicita las similitudes que su ensayo pedagógico presenta con el de la ILE, institución ésta vertida a fabricar elites progresistas que, en algunos casos llegarán a convertirse en dirigentes del joven PSOE, no obstante estas semejanzas, no deben ocultar las

⁸⁴ “Al pedagogo, para saber cómo actuar ‘le basta estudiar la vida primitiva de los salvajes’ para saber lo que el niño desea hacer y responder a sus pretendidas necesidades naturales”, FERRER GUARDIA, F.: *La escuela moderna*, Ediciones Júcar, Madrid, 1976, p. 172.

⁸⁵ VARELA y ÁLVAREZ ÚRIA: *Arqueología de la escuela*,

diferencias teóricas y prácticas que en materia de enseñanza presentan los diferentes grupos y que están en relación con la posición que esos grupos ocupan en la estructura social.

En principio, las medidas adoptadas sobre la enseñanza fueron avanzadas y, si se quiere, progresistas, pero si hacemos un análisis más detallado, próximo, surgen las dudas. La primera, si mediante la tutela escolar, se pretendía o no, la fijación disciplinaria de los hijos de las clases populares. La segunda, si era más importante la adaptación y la obediencia que la transmisión de saberes. Porque da la impresión de que, en el camino hay una transformación de objetivos. Junto a la misión civilizadora de la escuela, simultáneamente se produce un proceso de aculturación y pérdida de autonomía de los hijos de los trabajadores, sometidos a una cultura extraña a sus necesidades.

La realidad inicial

No se puede entender bien cómo los Tribunales Tutelares llegaron a ser una realidad, y cómo fue después el desarrollo de la casi totalidad de ellos en España, sin conocer lo que significó en la Obra de esos Tribunales, la figura de Gabriel María de Ybarra y de la Revilla. Licenciado en Derecho en Deusto, miembro de la Junta Provincial de Menores desde 1912 y creador de la *Sociedad Tutelar del Niño* y de la *Asociación Casa Reformatorio de Amurrio* (primero en entrar en funcionamiento junto al Tribunal para niños de Bilbao en 1920, que presidió), G. M^a de Ybarra estuvo en el centro de todas las actividades que, sobre la protección a la infancia, se realizaron tanto en el País Vasco, como en el resto del Estado. También en todos los esfuerzos que posibilitaron la puesta en funcionamiento de los Tribunales Tutelares de Menores.

Presidió el *Consejo Superior de Protección a la Infancia* y, ya en 1932, fundó la *Unión Nacional de Tribunales de Menores*, de la que también fue presidente, con la orientación (corrección del delincuente por medio del trabajo y los sanos principios de la moral cristiana) que él mismo les daría, impregnada por su profunda religiosidad y moralidad católica, propiciando que fuera la Congregación de los Terciarios Capuchinos la que, paulatinamente, se hicieran cargo de la mayoría de los centros auxiliares de los tribunales (Reformatorios o Casas de Asilo para la reforma y corrección de los menores) en toda España, llegando a establecer su régimen y métodos psicodiagnósticos que

pondrán a prueba en la Casa del Salvador de Amurrio ⁸⁶. Fue la aplicación, por una parte, de los métodos de correjimiento, siguiendo las teorías de la Ciencia Penal positivista, y, por otro, de los principios de la moralidad católica. En todos se instalará el catolicismo, social o no, según sea la conformación del tribunal, más riguroso o menos con los menores delincuentes, teniendo en cuenta sus antecedentes, propios y familiares (la herencia genética), las taras heredadas, no la gravedad o levedad de la infracción cometida.

⁸⁶ DAVILA BALSERA, Paulí y otros, “La protección infantil y los tribunales tutelares de menores en el País Vasco”, Revista Historia de la Educación, nº 10, 1991, pp. 227-252.

4.-El Tribunal para Niños de Zaragoza

El Tribunal de Niños de Zaragoza se constituyó el 11 de febrero de 1921, pero su funcionamiento tuvo que demorarse hasta que las instituciones auxiliares, en concreto, el Reformatorio del Buen Pastor, estuvieron en condiciones de recibir a menores delincuentes. Hay que resaltar, no obstante, que el tribunal de Zaragoza fue el tercero en constituirse, después de los de Bilbao y Tarragona. El primer caso iniciado por el Tribunal lleva fecha de 12 de octubre de 1921. Dado que la actividad desempeñada por este tribunal se entendía diferenciada tanto del resto de los juzgados ordinarios, como de las instituciones benéficas, se consideró conveniente que estuviera físicamente separado de los mismos, dándole al mismo tiempo la capacidad e independencia suficientes para asegurar su libre funcionamiento. Con ese fin, el Ayuntamiento de Zaragoza, cedió, en un grupo escolar que estaba construyendo, locales que pudieran albergar al tribunal. Temporalmente, mientras se realizan las obras, pareció oportuna su instalación en la sede de la Universidad, en concreto en la Facultad de Derecho. Así lo refiere el catedrático de Derecho Penal y futuro miembro del Tribunal de Menores, Inocencio Jiménez Vicente:

“La institución española en nada necesita de la legislación ordinaria; en cuanto afecta a los menores es rotundamente extrajudicial. Lo proclama la base cuarta de la Ley de 1918 y lo ha reafirmado la legislación posterior. El Tribunal debe funcionar en edificio y con instalación que no desmienta su naturaleza: educadora y, por tanto, acogedora, para el menor; en tono adecuado, para la corrección de los mayores”⁸⁷

La legislación, ciertamente, preveía la existencia de una serie de instituciones auxiliares mínimas que ayudaran en su labor al tribunal, si bien para el funcionamiento de éste, sólo era obligatoria la existencia de una institución de reforma y corrección, en Zaragoza, el Reformatorio del Buen Pastor. Esas instituciones auxiliares eran, en esencia, la Casa de Observación, dependiente del tribunal, lugar en el que se realizasen todo tipo de pruebas (médicas, pedagógicas, psicológicas y psiquiátricas) y exámenes que requirieran los menores “enjuiciados” por el tribunal; y la Casa de Familia, lugar previsto para acoger a menores en situación de libertad vigilada, en un ambiente similar al de la familia, cuando no era aconsejable que estuviera con su propia familia. La

⁸⁷ JIMÉNEZ VICENTE, Inocencio: Los Tribunales Tutelares de Menores, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1932, p.25.

ausencia de esta institución condicionó, y mucho, los acuerdos de libertad vigilada adoptados por el tribunal de Zaragoza, y fue también una de las causas del relativo fracaso, reconocido por el presidente del Tribunal, de la medida de libertad vigilada.

La Casa de Observación, dependiente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia, comprendía una sala dentro del Reformatorio, y a la misma eran llevados algunos menores, por acuerdo del Presidente del Tribunal, en el mismo momento de iniciarse el expediente y toda la tramitación correspondiente. En estos casos, los menores, en la práctica, eran ingresados en el Reformatorio antes de que se instruyese el caso y el Tribunal tomase el acuerdo al efecto, que podía ser el de archivo del expediente. El menor había estado en el Reformatorio de forma gratuita. Estos, no eran casos aislados y eran debidos a la absoluta falta de medios tanto del Tribunal de Zaragoza como de la Junta Provincial de Protección a la Infancia.

La comparación con el Tribunal de Barcelona, en la misma época, nos la ofrece Ramón Albó, Presidente del mismo desde su constitución en 1922, en su libro *Seis años de vida del Tribunal Tutelar para niños de Barcelona*.

“El Tribunal Tutelar de Barcelona tiene una serie de instituciones auxiliares muy valiosas (...), la *Escuela Agraria ‘Las Torres’*, para tutelados de origen rural, tutelados afectos de inestabilidades (...). Para el régimen de semilibertad, las *‘Casas de Familia’*, para la educación de las niñas con la que se persigue un tratamiento familiar. *‘La Casa de Trabajo’*, fundada por el Tribunal y sostenida a sus expensas, para muchachas que no encajan en las disciplinas del asilo-reformatorio ni del pensionado cerrado. *‘La Escuela del Hogar’*, fundada y sostenida por la Junta Provincial de protección a la Infancia, donde las menores estudian y practican las tareas del hogar. *‘La Granja’*, en régimen de semilibertad para tuteladas de origen rural, algunas inestables mentales. Allí hacían labores propias de una granja, con ganado lanar y vacuno, de corral y de las industrias derivadas de la Agricultura y Ganadería”⁸⁸

También estaba previsto que el tribunal lo presidiera un juez de primera instancia, salvo excepción realizada por el Ministro de Gobernación. La excepción se convirtió en regla y los Tribunales para Niños no fueron presididos por jueces. El de

⁸⁸ ALBÓ Y MARTÍN, Ramón: *Seis años de vida del Tribunal Tutelar para niños de Barcelona*, 1927, p. 33.

Zaragoza, por un médico, Patricio Borobio Díaz, que lo fue durante todo el período estudiado. La naturaleza del Tribunal era colegiada y al Presidente lo acompañaban, en las reuniones en pleno, el Secretario, Rudesindo Nasarre y dos Vocales, Manuel de Lasala y José Talayero, maestro-pedagogo. Todos ellos se mantuvieron también en sus respectivos puestos durante todo el período estudiado. Todos, excepto el Presidente, hacían las funciones de Delegados de protección a la Infancia cuando eran nombrados por el Tribunal en pleno, en casos de internamiento y de libertad vigilada. El Tribunal era auxiliado en sus funciones por dos Agentes de Vigilancia (frente a cuatro en Barcelona y Madrid), que eran los encargados de realizar la llamada *Investigación Complementaria* sobre los hechos, los antecedentes del menor, su entorno, familia, escuela, trabajo..., así como las investigaciones necesarias en los casos de la Función Protectora y de Enjuiciamiento de mayores, “a modo de detectives”, siempre sin atentar, en lo posible, contra la intimidad del menor.

Los Delegados de Protección a la Infancia eran, después del Presidente del Tribunal, los “agentes” más importantes de la obra, pues según palabras de Patricio Borobio Díaz: “colaborador del Tribunal, su misión puede aun superar a la de éste en razón del contacto que se establecerá entre él y el niño” ⁸⁹. Los Delegados eran voluntarios y sin retribución alguna y su función debía ser clave en las situaciones de libertad vigilada y de internamiento en establecimiento de reforma, en los que se acordaba por el tribunal la vigilancia del menor bajo la persona del Delegado de Protección a la Infancia, quien debía elaborar un informe mensual sobre la evolución de la conducta, aptitudes, voluntad de mejorar del menor. En la práctica, por su escaso número, también por su carácter voluntario y por el tiempo que podían dedicar a esta labor, la elaboración de informes por los Delegados es más bien escasa; en la mayoría de los expedientes examinados, inexistentes, por lo que el seguimiento del menor era, en muchos casos, nulo. Y eso que, como bien dice el Dr. Borobio “las singularísimas condiciones que ha de reunir el Delegado hacen que sea la esencia, y dependa de él el éxito de la libertad vigilada: no es buena la libertad vigilada si no hay buenos Delegados”⁹⁰.

⁸⁹ BOROBIO DÍAZ, Patricio: *Memoria del Tribunal Tutelar para Niños de Zaragoza, 1925-1926*, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1927.

⁹⁰ BOROBIO DÍAZ, Patricio: *Memoria del Tribunal Tutelar para Niños de Zaragoza...*

Es después del acuerdo del Tribunal, cuando comienza la función del Delegado, con la vigilancia del niño, “dándole su protección y dirección”, sirviendo de lazo de unión entre el Tribunal y el niño, informando sobre la conducta de éste, sus cambios de vida, enfermedad o salud, fugas, necesidades materiales y morales, etc”. Se apena de la situación el Dr. Borobio, con estas palabras:

“No es de extrañar que, dado el planteamiento reciente de la ley de Tribunales para Niños, la asistencia social, indispensable, si la institución ha de vivir y prosperar, sea deficiente. Y en este punto de los Delegados es en el que se aprecia más la deficiencia. No hay duda que abundan las personas buenas, pero lo cierto es que no se ofrecen a ayudar a los Tribunales: en el nuestro tenemos Delegados excelentes, más en tan escaso número, que pasamos ciertos apuros, en alguna ocasión, para nombrarlos”⁹¹

Nuestra legislación sobre tribunales tutelares se inspiró fundamentalmente en la legislación y práctica belga. La ley belga de 15 de mayo de 1912 ponía a disposición del Juez de Niños dos clases de delegados: voluntarios y remunerados. En esto no siguió esa praxis y nuestra ley no admite más que a los delegados voluntarios, y, naturalmente, gratuitos. En el caso del Tribunal de Zaragoza, fueron Delegados de Protección a la Infancia, personas de reconocido prestigio, vinculadas a los círculos filantrópicos y benefactores y al *catolicismo social* como Inocencio Jiménez, Juana Salas o Ana Borderas, viuda de Royo-Villanova. Pero era tan evidente la falta de Delegados que, como se ha dicho, los propios miembros del tribunal también actuaban como tales y, además, los nombrados con mayor frecuencia en los acuerdos. Por el escaso número, según palabras del Presidente del tribunal.

El Tribunal para Niños de Zaragoza tuvo, en sus primeros años, carácter regional pues su “jurisdicción” alcanzaba las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel hasta que, en 1928, se constituyeron los tribunales de Huesca y Teruel. No obstante, tuvieron que utilizar las instituciones auxiliares, además de las propias, las del tribunal de Zaragoza, fundamentalmente la Casa de Observación y el Reformatorio del Buen Pastor, pero también instituciones asilares como *La Caridad*, dependiente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia, donde eran tuteladas las menores de edad, protegidas por los tribunales en expedientes de *Función Protectora*, por abandono o por efectos

⁹¹ ⁹¹ BOROBIO DÍAZ, Patricio: *Memoria del Tribunal Tutelar para Niños de Zaragoza, 1925-1926*, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1927, p. 35.

corruptores de sus padres o tutores, o en expedientes de *Enjuiciamiento de mayores*, por abandono en la educación o por emplear a los menores en la mendicidad, ley de 23 de julio de 1903, sobre mendicidad y vagancia de los menores de dieciséis años.

Creemos que la mejor forma de conocer por dentro el Tribunal para Niños, es la exposición de algunos de los casos investigados, con el soporte, clave, de los informes elaborados por los que allí trabajaron, de los Agentes de Vigilancia, y de los propios miembros del tribunal. Información que nos dan sobre la sociedad y la mentalidad de la época.

Lo más interesante de estos informes, además de conocer qué tipo de menores y por tanto de familias pasaban por los Tribunales para Niños, aunque es una cuestión, que en principio se intuye, aunque haya alguna sorpresa, es sobre todo la opinión que sobre las clases populares o los sectores marginales tenían ciertos sectores de la sociedad, asomando una hipocresía y una doble moral alarmante. Hay que hacer un gran esfuerzo para mirar y pensar con los criterios de la época, no con la mentalidad actual, huyendo, por tanto, de toda clase de presentismo. Aun así, el subjetivismo, la arbitrariedad, era la norma, con grandes dosis de discriminación o de tratamiento desigual en función de *variables* que al tribunal le pareciesen más o menos aceptables, respecto a la profesión ejercida por los padres, a la situación civil de los mismos y, también, a la procedencia del campo, de ambiente más sano, o la ciudad. Otra variable importante a tener en cuenta son los denominados *vicios* en ese momento, desde *jugar a las chapas*, *ir al cine* o *comer golosinas*, que llevaban a conceptuar al menor como *perverso* o con grandes posibilidades de serlo. El tema del cine y el delito es recurrente en los tratados científicos (de sociología, psiquiatría, criminología) y en las Memorias de los Tribunales⁹². En España, la Real Orden de 27 de noviembre de 1912

⁹² BOROBIO DÍAZ, Patricio: *Memoria del Tribunal Tutelar* “El cine favorece la delincuencia infantil: el cine engendra directamente muchas veces el delito...El profesor Serge Goguel del Instituto Ruso de Berlín, en un notable artículo publicado en el *Bulletin International de la Protection de l'Enfance*, en febrero de 1927, se expresa en estos términos: ‘La influencia del cine sobre los niños y el público en general es una cuestión del todo internacional, de una grande importancia. *El Congreso penitenciario internacional de Londres* (1925), consagra una atención particular a esta cuestión. He aquí sus conclusiones: I. Es preciso que en cada país se organice una censura destinada especialmente a salvaguardar la juventud, que se tomen medidas rigurosas para garantizar la aplicación de las decisiones de la censura, y que un registro especial de los cinematógrafos sea establecido. II. La censura debe no solamente prohibir hechos abiertamente inmorales, sino sustraer de la vista de los adolescentes imágenes y anuncios inmorales. III. Deben ser organizados espectáculos especiales para la juventud. IV. Los gobiernos deben subvencionar y fomentar las organizaciones que realizan representaciones para familias y niños”. El propio Dr. Borobio considera la cinematografía “como uno de los males más grandes de nuestro tiempo”.

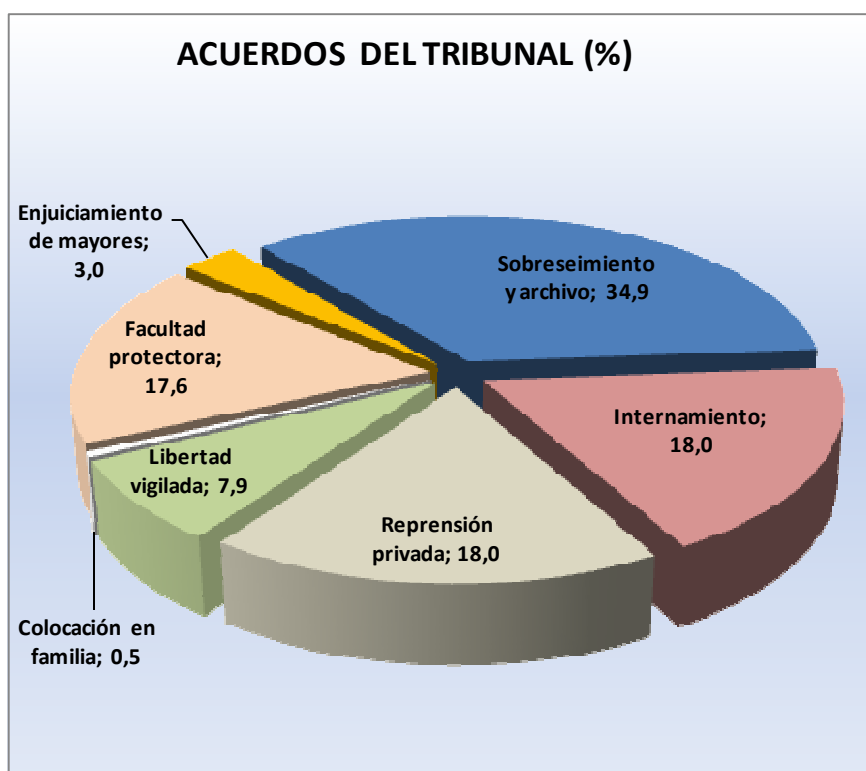
prohibía la entrada en todo local cerrado de espectáculo público nocturno, sea cinematográfico, sea de variedades, a los niños de menos de diez años que vayan solos. “Los empresarios podían organizar sesiones diurnas para niños, con películas de carácter instructivo y educativo”⁹³. Los informes que aparecen en los expedientes, a pesar de la carga de subjetividad, fueron decisivos, para marcar el destino de los menores y sus familias. Porque si bien el menor no ingresaba en la cárcel con los adultos, lo hacía en el Reformatorio, que llegó a ser tan estigmatizador como aquella.

Como se ha dicho, en la explotación estadística efectuada a partir del contenido de los expedientes, hemos llevado a cabo una evaluación de las variables que consideramos más relevantes, como los acuerdos tomados por el tribunal, la edad y el sexo de los niños encausados, así como la clasificación de los hechos por los que son imputados y clase social de la que proceden. Después de efectuar un análisis cuantitativo de la información que proporcionan los **432** expedientes analizados (se debe considerar siempre una muestra porque los expedientes incoados por el tribunal durante el periodo, fueron 1.103 expedientes), podemos ofrecer las siguientes conclusiones:

En primer lugar, respecto a los **Acuerdos** tomados por el Tribunal, (**Gráfico n° 1**), en contra de lo que en principio apuntaban los expedientes iniciales, no fue la medida de internamiento en el Reformatorio Buen Pastor (18%), la tomada con mayor frecuencia, sino que lo fue la de sobreseimiento y archivo, algo más de la tercera parte de los enjuiciados –un 34,9%-; con idéntica proporción a la de internamiento, se aplicó la de reprensión privada o amonestación; y sólo un 8% la de libertad vigilada. Con carácter muy residual, fue acordada la colocación en familia, tan sólo a uno de cada doscientos niños encausados. El resto, son arresto menor, multa o inhibición a favor de los Juzgados de Instrucción por razón de la edad de los menores denunciados.

⁹³BOROBIO DÍAZ, Patricio: *Memoria del Tribunal Tutelar*

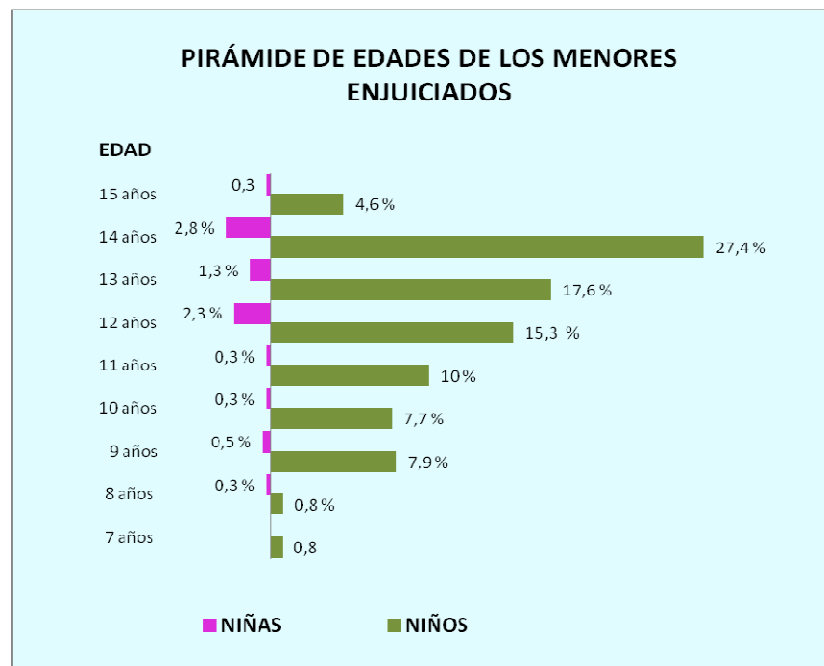
Gráfico n° 1. Acuerdos del Tribunal



Fuente: elaboración propia

La distribución por **edad** (**Gráfico n° 2**) de los menores pone de manifiesto una concentración de dos terceras partes en el tramo de edad comprendido entre los 12 a 14 años. En la edad de 14 años se concentran la tercera parte de los casos analizados, siendo la edad más frecuente tanto para niños como niñas. A partir de 1925, con la modificación de la ley por un lado, y con la leve mejora de las condiciones económicas por otro, irán desapareciendo del Tribunal para Niños, poco a poco, los menores de 8 y 9 años, para aumentar los de 15 y 16 años.

Gráfico n° 2. Edad de los menores



Fuente: elaboración propia

El **sexo** de los menores que pasaron por el Tribunal para Niños en este período es abrumadoramente masculino, como podemos observar en el **Gráfico n° 3**. Sólo ocho de cada cien menores, son niñas.

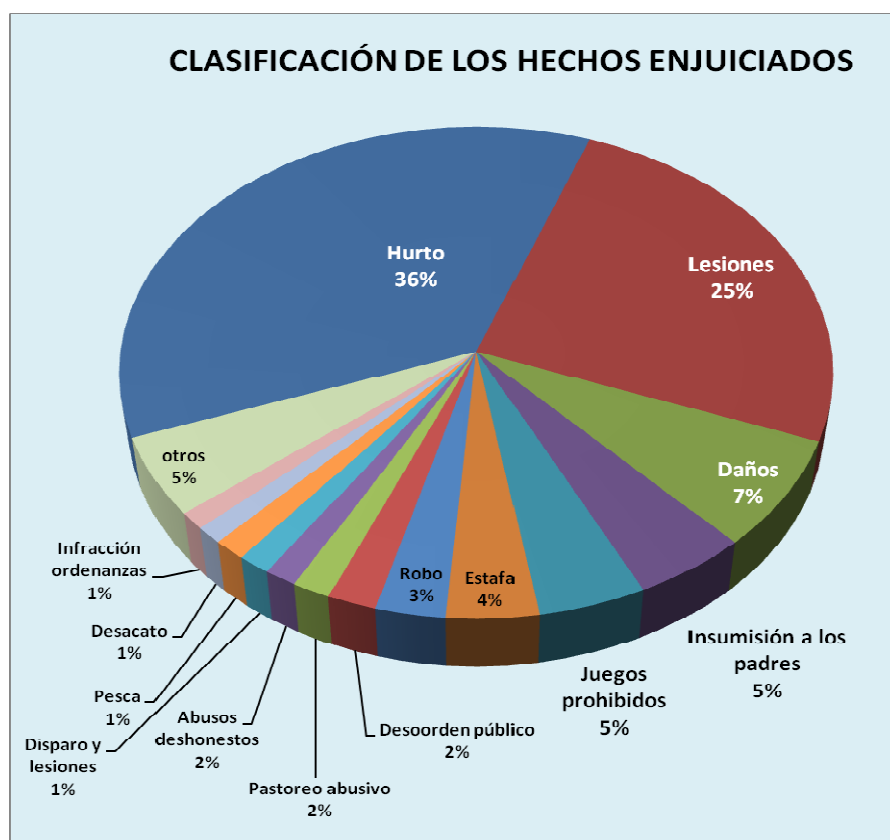
Gráfico n° 3. Sexo de los menores



Fuente: elaboración propia

De la clasificación de los hechos en los que han intervenido los menores, son el hurto y las lesiones, las infracciones más frecuentes, de hecho, concentran las dos terceras partes de los asuntos, seguidas a larga distancia de los daños (en la propiedad), juegos ilegales e insumisión filial. El hurto es la infracción enjuiciada más frecuente, por encima de la tercera parte del total, 36% de los casos, y las lesiones afectan a uno de cada cuatro supuestos, 25% de los casos. De los 432 expedientes, 156 lo fueron de hurto, 108 de lesiones, 30 de daños, 22 por juegos ilegales, 21 de insumisión filial, 17 por estafa, 13 por robo. El resto de los hechos clasificados muestra un abanico muy disperso: pastoreo abusivo, desorden público, abusos deshonestos, homicidio por imprudencia, desacato, amenazas, infracción de la ley de pesca...

Gráfico nº4. Clasificación de los hechos



Fuente: elaboración propia

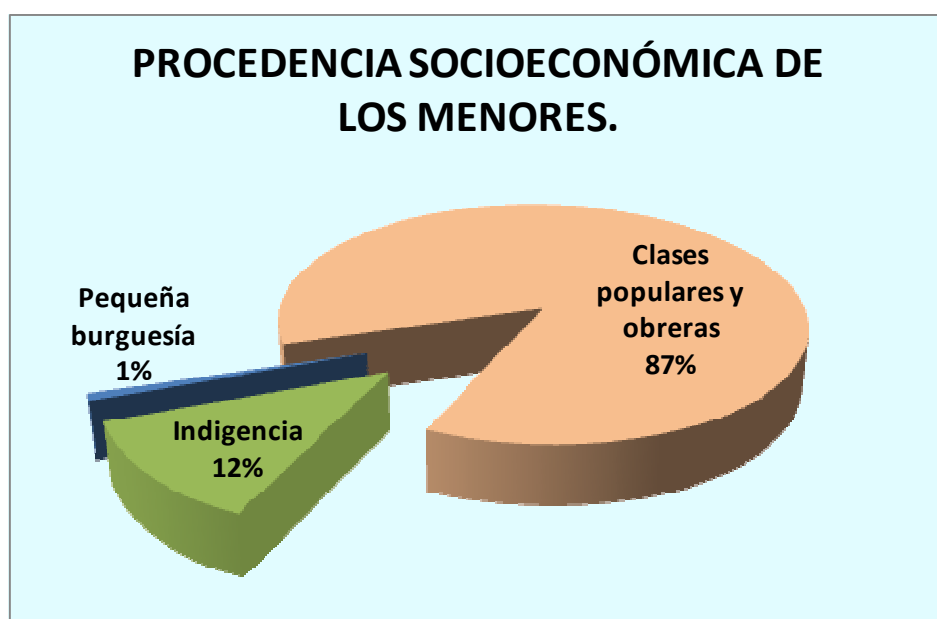
Nos encontramos con 76 expedientes en ejercicio de la **Facultad Protectora** (por abandono en la educación, por dureza excesiva en el trato y por ejemplos corruptores), de ellos, en 10 casos se ha confiado la custodia del protegido a una familia honrada, en 34 casos se ha confiado la custodia a un asilo al efecto y, el resto, han sido archivados y los menores devueltos a casa con sus padres. Respecto al **enjuiciamiento de mayores**, (por abandono de la educación del menor, faltas del artículo 605 del Código Penal y por infracción de la Ley 23 de julio de 1903 que castiga la mendicidad de menores), el tribunal ha actuado en 13 expedientes, de los cuales en 4 se acordó la absolución, en 3 arresto menor, en 1 arresto y multa, en 3 multa, y en 2 archivo.

De sus circunstancias, es relevante destacar, por un lado, **su procedencia**, de la ciudad proceden 259, lo que supone el 60%, el resto del campo, 151, lo que supone el 35% y de otras provincias, el 5%. Por otro lado, si tienen o no domicilio, 405 con domicilio, frente a 27 sin domicilio. Arraigo lo hay, habrá que ver qué se considera un domicilio y qué características tiene. Del análisis de los expedientes se desprende que la mayoría vivía en dos o una habitación para toda la familia. Dormían juntos adultos y menores, lo que era considerado por el tribunal como un elemento de corrupción por parte de los padres hacia los hijos.

Una variable, muy importante a tener en cuenta en nuestro análisis, es **la clase social** a la que pertenecen las familias de los menores que pasan por el Tribunal para Niños (**Gráfico nº 5**). De todos los expedientes analizados, 432, sólo hemos visto **cuatro** casos, lo que supone el **1%**, en los que las familias se pueden considerar pertenecientes a la **pequeña burguesía**, pequeños comerciantes. El resto de los menores que han pasado por el Tribunal, el **99%**, pertenecían a las **clases populares** y, de estos, en un estado de verdadera miseria, de **indigencia**, el **12%**. Se trata de familias de trabajadores en las que, en la mayoría, trabajan ambos cónyuges. En la ciudad, son muchos los niños que trabajan desde los 9-10 años, muchos de ellos en trabajos esporádicos, en la venta ambulante, venta de periódicos..., otros en trabajos más estables, en comercios y talleres, como aprendices, y en casos más acuciantes, los padres los ponen a trabajar a edades muy tempranas, a los 7 u 8 años de edad, tanto a niños como a niñas. A estas últimas en el servicio doméstico la mayoría. Si son más mayores, en el comercio. Pocas, muy pocas, terminaron dedicándose a la prostitución, algunas de ellas porque el clima familiar era muy propicio, al haberse dedicado a ella también la madre, la abuela o las tías. La mayoría, un 85%, acude a la escuela durante

1-2 años, y una minoría, un 15%, durante 3-4 años. En el campo, sí son mayoría, niños y niñas, los que trabajan de forma más continuada en las tareas agrícolas y ganaderas y abandonan tempranamente la escuela o, ni siquiera llegan a asistir.

Gráfico n° 5. Procedencia socioeconómica de los menores



Fuente: elaboración propia

Una vez conocidos los que nos han proporcionado tan interesante fuente de estudio, es momento de analizar el material examinado. Para ello, nada mejor que centrarnos en algunos expedientes, escogidos por ser representativos de cómo trabajaba el Tribunal para Niños de Zaragoza en sus años iniciales. De acuerdo con lo dicho anteriormente, los hechos que, con mayor frecuencia “enjuiciaba” el tribunal, eran casos sobre hurto, lesiones y daños. Sobre ellos vamos a presentar un relato comparativo de casos, correspondientes a distintos años, tanto de niños como de niñas, en los que se acuerdan distintas medidas, que nos permitan apreciar, en toda su extensión, los criterios de actuación del tribunal y el resultado de las medidas por ellos adoptadas. Además, de forma separada, porque pertenecían a una sección distinta, y no se trataba

de “enjuiciar”, sino de proteger al menor, presentamos otro relato ilustrativo sobre el quehacer del tribunal sobre la llamada Facultad Protectora.

Los expedientes sobre hurto son muy ricos y variados, aunque son muy distintas las infracciones cometidas en la ciudad y en el campo, pero para hacer una diferenciación que nos permita continuar sin dificultad, podemos hacer una clasificación entre hurtos cometidos en el hogar familiar –o en el negocio familiar—, en el lugar de trabajo o en lugar ajeno a los anteriores, desde tiendas y comercios a particulares en un descuido o cuando dejan chaqueta a la vista, en este caso dinero, a productos de la naturaleza, desde frutas y hortalizas, a animales y leña. Estos hechos nos pueden parecer, desde un punto de vista objetivo, infracciones más o menos graves, pero este dato, lo veremos más adelante, no tendrá la importancia que, en principio podemos pensar.

Esta útil clasificación nos sirve para explicar que las denuncias contra los menores las presentan sus propios padres, que, ante su incapacidad piden al Tribunal su intervención para corregir a sus hijos, sus patronos, o terceros afectados por los hechos cometidos por el menor o directamente por los Guardias de Vigilancia o de Seguridad que han cogido al menor o menores “in fraganti”, en el momento de la consecución de los hechos.

Lo importante es lo que sucede dentro del tribunal, a donde llegan los menores una vez presentada la denuncia contra ellos, bien desde la Comisaría de Vigilancia, dependiente del Gobernador Civil o de un Juzgado, Municipal o de Instrucción, que, cuando está interviniendo, al conocer que los enjuiciados son menores de edad, da traslado del asunto al Tribunal para Niños.

En ese momento, todos los resortes del tribunal se ponen en marcha, se cita para comparecer a los denunciantes y testigos, se dan órdenes para que los Agentes de Vigilancia investiguen los antecedentes del menor y su familia, a la vez que aquél puede ser ingresado en la Casa de Observación (en realidad en el Reformatorio) y puesto a disposición del Presidente del Tribunal. El menor es explorado por el médico y el pedagogo y es objeto de examen por tres miembros del tribunal (es un interrogatorio). Tanto de las exploraciones como del examen queda constancia escrita, fichas médica y

pedagógica y las observaciones del tribunal, con una profunda carga subjetiva, como veremos en los distintos casos.

La sustracción de 17 pesetas en un puesto de naranjas por un menor de 12 años le lleva al Reformatorio durante seis meses quien, al salir del mismo, se mantiene bajo la tutela del tribunal al acordar éste la libertad vigilada. En cambio, en otro caso, la sustracción de 50 pesetas en el lugar de trabajo por un menor de 13 años, da lugar a la reprensión por parte del Tribunal, la misma medida aplicada a la sustracción, por un menor de 12 años de coronas de remolacha en un campo privado. Sin embargo la sustracción de una carga de leña de chaparros y romero, por necesidad (reconocida por el tribunal), en una situación de hambre y miseria, le supone a un menor de 14 años, el ingreso en el Reformatorio por seis meses o, la sustracción de leña de monte por otro menor de 15 años, en situación similar, le lleva a reforma en internamiento por el mismo período. Igual que al menor de 13 años que sustrae dos navajas de afeitar del lugar de trabajo. Como admite esa sustracción, los “patronos” aprovechan para achacarle el hurto de otras navajas que habían echado en falta. El internamiento durará un año. El hurto (mayor) de 900 pesetas por cuatro menores, de edades comprendidas entre los 12 y 14 años supondrá el ingreso en el Reformatorio por seis meses, para dos de ellos y, tan solo reprensión para los otros dos.

¿Cómo explicamos estas medidas? Hemos relatado supuestos distintos de **hurto**⁹⁴, todos cometidos por menores varones, unas infracciones son leves y otras son calificadas por el propio tribunal como graves, es el caso del hurto mayor. Sin embargo, como vemos, no existe relación entre la infracción y la medida adoptada, es decir no hay proporcionalidad. Los informes de los Agentes de Vigilancia, que recogen los antecedentes del menor y su familia, las observaciones del tribunal en el examen del menor y las fichas médica y pedagógica son, en general, los elementos que tiene en cuenta el tribunal para dictar los acuerdos. Hemos adelantado que tanto observaciones como fichas, tienen una gran carga subjetiva y de arbitrariedad. Depende de la conceptualización que del menor tiene el tribunal y lo demostramos con algunos párrafos, muy elocuentes, de las mismas, correspondientes a los expedientes de los casos relatados: “tiene noción clara del bien y del mal, embustero, impulsiones a tomar lo ajeno, vicioso, delinquiró con conciencia y malicia, tuvo maña para ejecutar el hecho”;

⁹⁴ Expedientes nº 115, nº 124, nº 137 y nº 145 de 1922, nº 60 de 1923, nº 169 de 1924, nº 11, nº 140 y nº 205 de 1925.

“todo indica que este muchacho más que malicia y premeditación, se trata de una tontería o aturdimiento irreflexivo, no se le puede calificar de raterillo habitual sino tan sólo autor de hechos de ocasión y aislados ya que sus padres son honrados y cuidan y vigilan su educación”; “buenos antecedentes, familia honrada, obediente, trabajador, muchacho despejado de entendimiento, franco. No presenta indicios de perversión, su padre afirma que es obediente y muy trabajador, ayuda a sus abuelos en el cuidados vacas lecheras”; “manifiesta ser de familia muy pobre y muchos días no tienen para comer. El tribunal cree que es un ignorante, no demuestra arrepentimiento y tiene la malicia suficiente para conocer que hizo mal”; “sin ser un perverso, no siente vergüenza por lo que hizo, parece dispuesto a volver a delinquir, tiene instintos adquiridos al hurto y a faltar a la verdad, sentimientos degenerados, los de la propiedad y respeto”; “tendencias al poco trabajo y al hurto para satisfacer sus apetitos. Perezoso y vanidoso, de moralidad deficiente, a pesar de sus padres y de sus buenos sentimientos, hay que conseguir su reforma moral, ingrese en el Reformatorio”; “impulsiones a apoderarse de lo ajeno, se puede reformar y convertir en muchacho honrado y trabajador, ingrese en el Reformatorio”, “corto de entendimiento y débil de voluntad, debe sentir la acción del Tribunal como correctivo de lo pasado y preservativo para lo futuro, sea reprendido”, “buenos antecedentes y familia honrada, es un vivo que se aprovecha de los hurtos de los amigos, es preciso hacerle sentir su participación en los hechos, sea reprendido”.

Hablaremos después del resultado de las distintas medidas adoptadas y del nombramiento de Delegados de Protección a la Infancia en los casos de internamiento y libertad vigilada.

Las niñas⁹⁵ son tratadas con mayor dureza, se les exige un plus de honradez, por eso es más habitual el acuerdo de su ingreso en el asilo que la simple reprensión, aun cuando las infracciones sean leves o no alcancen la gravedad de las de los muchachos. Con la denuncia del padre manifestando que su hija es desobediente y descarada, que es imposible “hacerse con ella”, o que sustrae dinero y prendas en casa que luego vende, el Tribunal entiende que está abandonada en el aspecto educativo y vaga por las calles, por lo que acuerda su ingreso durante un año en el asilo de las H.H. Oblatas, que, al final, será más, año y medio.⁹⁶ O, aquella niña de 11 años a la que también su padre denuncia

⁹⁵ Expedientes n° 91 de 1922, n° 71 de 1923, n° 14 de 1925, n° 206 de 1925

⁹⁶ Este es un caso claro en el que una primera medida dura, además muy desproporcionada, no consiguió los resultados de reforma y corregimiento, sino todo lo contrario, y, al archivar el expediente, el 31 de

por pequeños hurtos y fugas del domicilio, pero sobre todo porque no le gusta trabajar y está todo el día en la calle, queda internada en el mismo asilo. Su padre la reclama para que gobierne la casa, a lo que la menor no accede, prefiere el asilo. Sale al cumplir los 19 años, en 1932. Pero hay excepciones, aunque el resultado final sorprenda. Es el caso de una niña de 12 años, denunciada por un particular de haber sustraído de su casa 800 pesetas en distintos momentos. No es una pequeña ratería, es un hurto mayor, pero se acuerda su ingreso en el asilo de las H.H. Oblatas durante seis meses. Antes de cumplirse la fecha se salida, la menor manifiesta su deseo de ingresar en la orden religiosa del Convento donde está internada. La reacción del Tribunal es sorprendente, al manifestar que “no debe ni puede contrariar la vocación religiosa (...) y acuerda que la menor sea entregada a su madre, para que se gestionen los trámites necesarios para el ingreso de la niña en la Orden religiosa de su vocación y se archiva el expediente”. He dicho que la reacción del tribunal es sorprendente porque en un caso idéntico reaccionó de forma contraria, protegiendo, a mi entender, a la menor. En ese caso manifestó que la menor era de edad temprana y debía madurar, con el tiempo y la experiencia, una decisión tan importante y, acordó la salida de la menor del asilo en el que estaba internada.

De las niñas, el Tribunal hace observaciones a veces atrevidas, otras muy vagas, pero que son las que después determinan los acuerdos, “impulsiones a la holgazanería, a vagar, a presumir, ‘quizá asomos sexuales’. Se trata de una mujer avezada de la vida, si la llevan a un convento se escapará. Tiene expresión lastimosa y deplorable de indiferencia a todo y de malicia interna, que el Tribunal no se atreve a descubrir con preguntas indiscretas por compasión y respeto por la edad y sexo. No tiene perversidad de sentimientos pero está pronta a tenerlos, va tras lo que le agrada si reparar en las relaciones morales”; el Tribunal “la considera solapada, embustera y maliciosa, lo que cabe en su edad (11 años)”; “El Tribunal piensa que es “bastante inteligente para su edad, para darse cuenta de sus actos, cuya malicia conoce. Carácter reservado y huraño, hipócrita, entiende que no es una pervertida de entendimiento ni de sentimiento, débil de voluntad, se deja arrastrar malos impulsos y no tiene sentido moral para resistirlos; es necesario someterla a régimen de educación y disciplina”.

diciembre de 1926, el Tribunal admite “no toca sino lamentar el extravío sufrido por la joven, que por su edad puede considerarse fuera de la protección del Tribunal”(expediente nº 91 de 1922)

El Tribunal no sólo era más duro con las niñas en el momento de adoptar una medida de reforma y correjimiento, sino que además, las dejaba a su suerte en el asilo, donde podían estar durante años sin que ningún miembro del Tribunal o Delegado para la Protección de la Infancia, mostrase el más mínimo interés. No hay informes sobre la evolución de la menor (esto es común a ambos sexos), ni sobre el régimen de reforma a que ha sido sometida. Lo que más llama la atención es que esta pasividad, esta inatención, no sólo afectaba a las menores sometidas a régimen de reforma y correjimiento, sino también a las niñas que estaban bajo la protección y tutela del Tribunal.

La explicación, nada plausible, la podemos encontrar en las palabras de Patricio Borobio, Presidente del Tribunal, cuando explica los casos de Función Protectora que han pasado por el mismo: “Casi siempre se dieron estos casos fuera de la familia legítima. La vida irregular y reprensible de algunas madres irredimibles o irredentas, es comúnmente, el fondo negro de estos cuadros (...) se nos presentan como invariables y lamentables rasgos, el completo abandono de la educación moral e intelectual y el descuido más triste y mísero de la vida toda del niño”. La pésima visión de las madres se extiende a los hijos a los que llama *escorias sociales*.

Los expedientes de Facultad Protectora⁹⁷ analizados se refieren casi en su totalidad a niñas. En estos casos, el Tribunal, si procede, suspende la guarda y custodia a los padres o, a uno de ellos, si es el caso, y la concede al asilo *La Caridad*, dependiente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia. No existía ni protección ni tutela por parte del Tribunal. Las niñas, que ingresaban con 11, 12 ó 14 años, salían del asilo con 19 ó 23 años. alguna de ellas volvía con su familia, otras buscaban ocupación como camareras. Otras salían para casarse y, otras, menos afortunadas, como aquellas dos hermanas, con el tiempo, enfermaron las dos de tuberculosis en el asilo y salieron para ser enterradas.

Tan cierto es que las niñas estaban años en el asilo de La Caridad que, dos de los expedientes analizados, uno de Facultad Protectora y otro de Enjuiciamiento de mayores, ambos de 1925⁹⁸, relacionados entre sí, terminan en 1931 cuando la madre de

⁹⁷ Expedientes nº 119, nº 132 y nº 145 de 1922, nº 59 y nº 60 de 1926.

⁹⁸ Expedientes nº 94 y nº 102 de 1925.

dos niñas que están en el asilo citado, consigue, por la situación político-social⁹⁹ del momento y en contra de los criterios seguidos siempre por el Tribunal, sacar a sus hijas del asilo y llevarlas consigo a su casa.

Las lesiones de los niños casi siempre suceden en la calle, la mayoría de las ocasiones cuando los menores juegan, se pelean por cualquier banalidad o se lanzan piedras entre ellos... Son lesiones leves que el Tribunal suele considerar “un accidente”, o “una disputa de muchachos sin importancia”, por lo que, en general, acuerda reprensión o incluso el archivo del expediente sin actuación alguna. Pero, siempre están las excepciones que nos confirman la subjetividad y la arbitrariedad del Tribunal. La clave está en la concepción del menor, sus antecedentes y los de su familia.

Fijamos nuestra atención en tres expedientes de lesiones leves¹⁰⁰ (lesiones que tardan en curar menos de 15 días) en los que están implicados menores con edades comprendidas entre 11 y 13 años. En el primero, el tribunal acuerda archivar el expediente sin adoptar medida alguna respecto al menor, “el hecho fue casual y los antecedentes del menor son inmejorables”. En el segundo, el acuerdo es el de reprender suavemente al menor, “es un muchacho bueno, pertenece a una familia honrada, interno en los Padres Escolapios”. En el tercero, la lesionada es una niña pequeña, acompañada de otra de mayor edad. El Tribunal tiene ocasión para otras conjeturas y acuerda que el menor ingrese en el Reformatorio durante cuatro meses y, a su salida, considera que no es prudente dejarlo libre y acuerda libertad vigilada (durante más de año y medio hasta la libertad definitiva). Pero es que se trata de un menor distinto a los anteriores, es un “niño descarado, con malicia superior a su edad, embustero, tipo callejero y viciosillo, semi golfo, de los que acometen con insolencias de palabra y aún de obra a las mujeres jóvenes y a las niñas” y, además, “estima que sus compañías son chicos de barrio, callejeros, descarados (...) que acostumbran a molestar a las chicas (...) es vicioso, fumador, desobediente, aficionado al cine y diversiones, frecuenta casas de mal vivir, por lo que conviene hacerle sentir de alguna manera la acción del Tribunal con una sanción que parezca un correctivo a su falta, aunque no lo sea, para lo cual no basta la simple reprensión ni la libertad vigilada”.

⁹⁹ Eran los primeros meses de la II República, se atacaban y quemaban conventos. La madre, preocupada porque pudiera suceder lo mismo en el asilo-convento en el que estaba sus hijas, solicita se suspenda el Acuerdo del Tribunal y se le devuelva la guarda y custodia. El Tribunal, a pesar de que la madre sigue dedicada a la prostitución, ante la situación creada por los ataques a los conventos, accede y le concede lo solicitado.

¹⁰⁰ Expedientes nº 147 de 1924, nº 73 y 74 de 1925. Otro ejemplo, nº 90 de 1925, sobreseído.

Como podemos apreciar son tres casos de lesiones leves, y tres las medidas distintas adoptadas por el tribunal. La diferencia, se debe, fundamentalmente, a la concepción del menor y sus antecedentes que arrojan los miembros del Tribunal.

Los expedientes abiertos por daños terminaban, en general, en archivo. En algunas ocasiones, en reprensión. Sin embargo, en los inicios del funcionamiento del Tribunal para Niños, existió una enorme diferencia entre la ciudad y el campo. Daños ocasionados por menores, como rotura de cristales con un balón o con lanzamiento de tirachinas..., daños en candados y cadenas en lugares de dominio público (zona ferroviaria donde jugaban los chicos) eran considerados por el tribunal especial “hechos sin importancia”, “cosas de chiquillos” y eran archivados sin más actuaciones. Si los daños eran causados en un campo, en una propiedad rural con cosecha o frutales, sucedía en 1921, pero también en 1922, que los menores fueron sometidos, por Juzgados municipales o de instrucción, a juicios de faltas, incluso condenados, bien a arresto o al pago de una multa o a ambas, si los daños eran notables. La explicación está en que, los propios juzgados instalados en pueblos de la provincia, pueblos entonces grandes y con actividad, no se enteraron, hasta bien pasado el tiempo, de la existencia de un Tribunal para Niños en Zaragoza a donde debían trasladar los asuntos en los que estuviesen implicados menores de quince años primero, desde 1925 menores de dieciséis años.

Hemos dicho que en los casos de daños los acuerdos eran, en general, archivo o reprensión. Había una excepción, cuando los menores que habían causado los daños eran de raza gitana. En estos casos, no hay archivo ni reprensión, ni tampoco Reformatorio porque se daba por supuesto que no se conseguiría ni reforma ni corregimiento. Porque el Tribunal consideraba que por el “modo de vivir de los gitanos, las malas artes del hurto, del robo y del engaño, irreformable por herencia de raza, por falta absoluta de religión y de moralidad y hasta de la más elemental instrucción, nada se conseguiría con tener a al menor en el Reformatorio, saldría de él lo mismo que entró”, así que acuerda el internamiento en la *Casa de detención* (cárcel para mayores de 16 años, pero separada de los adultos) durante tres meses, entendiéndose que es como correctivo, no como medio de reforma.

Los expedientes de Enjuiciamiento de mayores fueron escasos en el período estudiado, aún así hemos tenido la suerte de analizar trece de ellos, de los que podemos

destacar cuatro en los que estaban implicados dos madres y dos padres de menores tutelados¹⁰¹. Es importante explicar que, en estos asuntos se celebraban dos comparecencias y, que, en la segunda, el inculcado/a podía aportar las pruebas que estimara más pertinentes para su defensa. Los dos primeros casos se hallaban incursos en la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1903, sobre mendicidad y vagancia de los menores de 16 años, puesto que, en un caso el padre y, en otro, la madre, empleaban a sus hijos para mendigar en la calle. En el supuesto de enjuiciamiento de la madre, el tribunal le impuso la pena de cinco días de arresto menor y, en el del padre, una multa de 30 pesetas. Los otros dos supuestos lo eran por abandono en la educación de los menores y, también estaban implicados en un caso el padre y, en el otro, la madre de los menores. Y, aquí también, la decisión del Tribunal fue distinta, a la madre le impuso una multa de 15 pesetas y en el caso del padre, archivó el expediente porque consideró que no se habían probado los hechos contra el inculcado. En ninguno de los casos, los inculcados aportaron pruebas en su defensa. Como hemos visto en expedientes anteriores, también se adoptaron decisiones distintas en casos similares y el Tribunal impuso penas más duras a las mujeres que a los hombres. Ya hemos visto la conceptualización que, de las madres de los tutelados, ofrecía el Presidente del Tribunal. Puede ser una de las hipótesis, pero hay que seguir investigando para llegar a una conclusión, aún parcial y provisional sobre el enjuiciamiento de mayores, porque el número de expedientes, tanto analizados, como tramitados, son muy escasos como para llegar a afirmaciones más concluyentes.

Los aspectos morales y religiosos estaban presentes en todos los expedientes. La religión y la moralidad son dos de las cuestiones que deben ser investigadas en los antecedentes del menor y de su familia. Pero, en mis razonamientos quería ir más allá. La religión y la moralidad formaban parte de la conceptualización ideológica de la reforma y corregimiento de los menores¹⁰², pero también de la propia ideología de los miembros del tribunal que la reflejaban, de manera permanente, en los considerandos de sus acuerdos, sobre todo a partir de 1923, cuando son más elaborados: “en todo caso la

¹⁰¹ Expedientes n° 94, n° 103 y 139 de 1925, n° 239 de 1926

¹⁰² Patricio Borobio, Presidente del Tribunal, en la *Memoria de 1925-1926* escribe: “La religión —es una opinión universal—facilita la dura tarea de la formación de una conciencia moral.

menor es susceptible de instrucción moral y religiosa y de hábitos de trabajo y virtud”¹⁰³.

Un ejemplo de ello lo vemos en los casos de intento de suicidio¹⁰⁴ de algún menor, en los que, en principio, se debe esperar protección y tutela, de los padres o en su defecto, de las instituciones asistenciales. Un menor que ha intentado suicidarse no debería ser objeto de tribunal, pero lo era en los años 20 del siglo XX. Los propios padres del menor presentaban la denuncia. Vayamos a la reacción del tribunal, que es lo que interesa. Primero observan que el menor “no se da cabal cuenta de lo que en orden moral y religioso es el suicidio”, por lo que “necesita educación moral que le haga dueño de sus malos impulsos” y por ello acuerda que sea internado en el Reformatorio durante seis meses. Allí aprenderá que no tenía motivos para hacer lo que hizo, recibirá la educación moral necesaria que impida un nuevo “arrebato impulsivo” negativo. Entre las posibles causas de este episodio está la circunstancia de que tanto su padre como su hermano mayor maltrataban al menor...

El verdadero talón de Aquiles de las medidas adoptadas por el Tribunal, al margen de la carga de subjetividad o arbitrariedad (que es su mayor defecto), que sale a la luz en el análisis de los expedientes, es la libertad vigilada. Esta medida es acordada en un porcentaje bajo de expedientes. Por dos razones, la primera por la prevención que tiene el propio tribunal a adoptarla, y, segunda, por el funcionamiento de la misma, una vez que esta se acuerda. En muchos de los casos en los que el tribunal acuerda el internamiento del menor, la medida más adecuada habría sido la libertad vigilada, pero el tribunal se aferra a la reforma y educación en lugar cerrado¹⁰⁵, bajo la dirección y vigilancia férrea de religiosos que aplican un plan sistemático. La libertad vigilada conlleva más riesgos, menos planificación. Y en su práctica, no hay reforma ni tutela, ni educación. Los encargados de ello, los Delegados de Protección a la Infancia, voluntarios, no llevan a cabo la labor encomendada. Falta de tiempo, inexperiencia, falta de medios, las causas son muchas, el resultado, la ineficacia de su labor y de la medida de libertad vigilada.

¹⁰³ Expediente n° 206 de 1925.

¹⁰⁴ Expediente n° 110 de 1922.

¹⁰⁵ “Para conseguir la reforma, la enmienda, la corrección, la redención definitiva y estable del niño delincuente, existe el Reformatorio, santa casa, en que se demuestra la eficacia del sistema”, Patricio Borobio en la *Memoria de 1925-1926*.

De la medida de internamiento no conocemos sus verdaderos resultados. En el Reformatorio no había un seguimiento continuado de los menores ni por parte del Director del establecimiento ni por parte del Delegado de Protección a la Infancia nombrado al efecto. Son una rareza los expedientes en los que constan informes de los Delegados y, si los hay, como máximo dos, en un período de internamiento de un año. Desconocemos, por tanto, la eficacia, el éxito del tratamiento de reforma y corregimiento de los menores. Sí hemos podido comprobar que la adopción de una primera medida dura con un menor resulta contraproducente. Le hace entrar en una espiral de malas compañías, raterías y el salto a hurtos más importantes, justo lo que se pretendía evitar con el internamiento. Sin embargo, si la primera medida es más laxa, el menor continúa con una vida más tranquila. No obstante, todas estas primeras impresiones se confirmarán o no con el seguimiento del trabajo del tribunal en los años sucesivos. Sí podemos afirmar que, a partir de 1925 el tribunal adopta medidas más laxas, pero desconocemos si seguirá este rumbo. En 1927 habrá nuevo Presidente del Tribunal por fallecimiento de Patricio Borobio, como podrá analizarse en futuras investigaciones.

De lo anterior, surgen las dudas sobre la eficacia del funcionamiento de los tribunales especiales en general, pero también del cumplimiento de los objetivos marcados por los dirigentes de todo el sistema tutelar y asistencial, de si pudieron o no materializar lo que estaba elaborado en los principios teóricos.

Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo no pueden ser sino parciales y provisionales. Hemos realizado una primera aproximación al estudio de los Tribunales Tutelares, a un período muy corto de la actuación del Tribunal de Zaragoza, sus inicios. Desconocemos su vida posterior, por eso los calificativos de parcial y provisional. Las conclusiones son fruto del análisis objetivo de las fuentes de las que hemos dispuesto para la elaboración del trabajo.

Los Tribunales de Menores nacen atendiendo a la demanda social de una institución que proteja a los menores delincuentes y abandonados y los aleje de la justicia para adultos. Pero, paradójicamente, la existencia de una justicia privativa para menores dará lugar a la judicialización de actos que hasta entonces no habían sido llevados ante un tribunal: pequeñas lesiones, riñas en parques infantiles, breves fugas del domicilio para jugar... Faltas leves como pequeñas lesiones o pernoctar en la calle fueron aprovechadas para amonestar o multar a los padres. A veces el Tribunal empleaba con éstos un tono tan paternalista como si fueran menores de edad.

Estos tribunales especiales y sus instituciones auxiliares evitaron a los menores el paso por la justicia ordinaria, pero no su estigma. Haber pasado por una casa de corrección (reformatorio o asilo), era tan nefasto como haber conocido el presidio. El simple paso por el Tribunal para niños, al margen del acuerdo del mismo, ya suponía un “castigo” social; los expedientes contenían alegaciones sobre la posible perversidad del menor, sin el menor fundamento fáctico, basadas en teorías psicológicas o psiquiátricas en boga en la época, aplicadas a menores de 9 y 10 años. De manera, que se lucha para eliminar del código penal la *capacidad de discernimiento* para imputar la responsabilidad de los menores, y aparece en la justicia para niños el concepto de *perversión moral* y la *capacidad para distinguir el bien del mal*, que lleva a responsabilizar a un menor de infracciones, a veces muy leves, que le llevarán a un internamiento con vigilancia y control, donde ha de primar la reeducación moral que anula la perversión existente.

No obstante, si se consideraba que la familia tenía buenos antecedentes, se podía sobreseer el expediente sin amonestación ni multa. Y a la inversa, un menor que hubiera cometido pequeñas infracciones sin importancia, pero cuya familia se considerase inadecuada para educarlo, podría pasar mucho tiempo en un centro de internamiento,

constituyendo esto también un castigo para los padres. La situación y la herencia familiar eran más decisivas a la hora de adoptar acuerdos respecto a un menor delincuente (privación de libertad, libertad vigilada) que la propia infracción cometida.

La justicia de menores fue la realización práctica más perfecta de las teorías criminológicas positivistas y correccionalistas, que no tuvieron tanto impacto real en la justicia de adultos. Sin embargo, como atestiguan los expedientes del Tribunal para Niños de Zaragoza, sí se aplicaron indirectamente, a través de sus hijos, a estas personas consideradas viciosas y propensas a delinquir por ser pobres. Cuando se juzgaba a un menor, no se estaba juzgando el delito cometido, sino al propio menor y, por extensión, a toda su familia, que podía resultar castigada. La aplicación de esas teorías conllevó una carga de subjetivismo y de arbitrariedad en la adopción de los acuerdos por parte del tribunal.

Vemos, pues, que los Tribunales para niños no se limitaron a juzgar a los menores, sino también a sus familias; su poder e influencia —hemos de pensar, además, en quiénes componían esos tribunales—llegaron a ser enormes, por lo que se convirtieron en el vehículo perfecto de control social y de moralización de las familias, a través del menor, que servía de punta de lanza.

En las actuaciones del Tribunal para Niños tuvieron muchísimo peso las actuaciones y las opiniones del personal auxiliar o subalterno. Este personal, como parte de su trabajo, redactó investigaciones y elaboró informes sobre las circunstancias del menor que proporcionan abundante información sobre el verdadero funcionamiento del Tribunal, sus logros y sus fracasos. Estos informes de agentes y delegados entran en clara contradicción con las memorias y estadísticas publicadas por el Presidente del Tribunal y la imagen triunfalista e idílica que ofrecen de su actuación. Es necesario prestar mayor atención a la información redactada por este personal auxiliar a cargo del Tribunal, puesto que al estar elaborada como documento de trabajo y no para ser publicada, y ser escrita tras una visita o en el momento de ocurrir los hechos, es mucho más cercana a la realidad.

La escasez de Delegados y el hecho de que éstos fueran voluntarios hicieron que su labor fuera muy mermada, y con ello, la medida de libertad vigilada. Se desconoce en realidad su eficacia porque no funcionó como tal. Puede suceder que haya o no reincidencias, bien porque no había tantos menores delincuentes o, porque eran de tan

corta edad que aprendieron con la primera medida adoptada por el Tribunal. Son hipótesis, a la falta de una mayor profundización, pero son las líneas que apuntan las investigaciones de sociólogos contemporáneos como Cea D'Ancona por ejemplo. En Zaragoza, se reconoce el fracaso tanto de la medida de libertad vigilada como la de acogimiento en familia. En esta última, por lo que dicen los expedientes, pudieron existir dos motivos, no intentar aplicar esa medida por parte del tribunal y la inexistencia de familias que se ofrecieran para acoger menores delincuentes.

Puede resultar muy útil poder comprobar hasta qué punto los responsables del Tribunal para Niños pudieron materializar sus ideas teóricas, o bien, si por falta de medios u otros motivos no lo hicieron. Se puede concluir, hasta ahora, que si bien fracasaron en la consecución de algunos de sus objetivos, sí alcanzaron, en cierta medida, su finalidad de control y moralización de las familias consideradas marginales, algo que obviamente no aparecía de forma explícita en sus leyes y estatutos, pero sí estaba implícito en su ideología.

Utilizando el complejo caritativo y tutelar, las prácticas moralizadoras se generalizan, convirtiendo las instituciones educativas, asistenciales y penales en herramientas de reeducación de las clases populares. A la vez, el sentido de la familia burguesa, su moralidad, lo pretenden trasladar a las clases populares urbanas, de vínculos familiares más relajados, con el pretendido fin de mantener el orden social fijado por las clases dominantes.

FUENTES PRIMARIAS

A.- Fuentes documentales

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.):

.- Fondo documental del Tribunal Tutelar de Menores, años 1921 a 1926.

Cajas: 254, 255, 257, 258, 260, 266, 272, 278 y 279.

Signaturas: A 36851, A 36855, A 36858, A 36859, A 36861, A 36867, A 36873, A 36879 y A 36880.

B.- Fuentes hemerográficas

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España:

.- Periódico *El Sol*, años 1918 a 1926.

Archivo y Hemeroteca Municipal de Zaragoza (A.H.M.Z):

.- Periódicos *Heraldo de Aragón* y *El Noticiero*, años 1921 a 1926.

C.- Fuentes impresas

ALBÓ Y MARTÍN, Ramón, *Corrección de la infancia delincuente*, Madrid, 1905.

ALBÓ Y MARTÍN, Ramón, *Seis años de vida del Tribunal Tutelar para niños*, Barcelona, 1927.

ALBÓ Y MARTÍN, Ramón, *Los tribunales para niños*, Barcelona, 1922.

BERGAMÍN, Francisco y otros, *Tribunales Tutelares para Niños*, Góngora, Madrid, 1929.

BOROBIO DÍAZ, Patricio, *Memoria del Tribunal para niños de Zaragoza, octubre 1921-diciembre 1922*, Talleres Editoriales El Noticiero, Zaragoza, 1923.

BOROBIO DÍAZ, Patricio, *Tribunal Tutelar para niños de Zaragoza, Memoria 1925-1926*, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1927.

CASAS SANTALÓ, JOSÉ, *La infancia trabajadora en España*, Tipografía Eduardo Alcabar, Barcelona, 1917.

CUELLO CALÓN, Eugenio, *Tribunales para Niños*, Victoriano Suárez, Madrid, 1917.

- CUELLO CALÓN, Eugenio, *Criminalidad infantil y juvenil*, Madrid, 1934.
- DE PINA, Rafael: *Manual de Derecho Procesal Penal*, Reus, Madrid, 1934.
- DORADO MONTERO, Pedro, *Bases para un nuevo Derecho penal*, José Gallach Barcelona, 1902.
- DORADO MONTERO, Pedro, *Los peritos médicos y la justicia criminal*, Madrid, Ed. Hijos de Reus, Madrid, 1906 (reed. 1999, Pamplona, Jiménez Gil).
- GÓMEZ MESA, Antonio, *Un problema social: protección y corrección a la adolescencia (Tribunal Tutela de Menores)*, 1932.
- GÓMEZ MESA, Antonio, *Los Tribunales Tutelares de Menores en España: historia, objeto, sujeto, implantación, organización, crítica*, Ed. Reus, Madrid, 1934.
- GONZÁLEZ CASTRO, José, *El trabajo de la infancia en España*, Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1917.
- YBARRA Y DE LA REVILLA, Gabriel M^a de, *El primer Tribunal de Menores de España*, Talleres Voluntad, Madrid, 1925.
- JIMENÉZ VICENTE, Inocencio, *Los Tribunales Tutelares de Menores*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1932.
- JUDERÍAS, Julián, *La infancia abandonada. Leyes e instituciones protectoras*, Establecimiento Tipográfico Jaime Ratés, Madrid, 1912.
- JUDERÍAS, Julián, *La juventud delincuente: leyes e instituciones que tienden a su regeneración*, Madrid, 1912.
- JUDERÍAS, Julián, *El problema de la infancia obrera en España*, Ed. Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, Imp. Sobrinos de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1917.
- LÓPEZ ARGÜELLO, Alberto, *El trabajo del niño en los espectáculos públicos*, Madrid, 1920.
- MONTERIO RÍOS, Avelino, *La Ley de Tribunales para Niños en España*, Imprenta Clásica Española, Madrid, 1921.

PESTANA, Alicia, *La pedagogía correccional o patológica*, Imprenta del Asilo de Huérfanos, Biblioteca Pro Infancia, Madrid, 1916.

PESTANA, Alicia, *El protectorado del niño delincuente*, Imprenta J. Cosano, Madrid, 1935.

ZOZAYA, Antonio, “Por el niño delincuente”, en *La Escuela Moderna*, 1917, 306, pp.73-76.

FUENTES SECUNDARIAS

Bibliografía

ARIÈS, Philippe, *El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen*, Taurus, Madrid, 1987.

BALLESTER AÑON, Rosa y BALAGUER PERIGÜEL, Emilio, “Niños peligrosos y niños en peligro: la medicina en la imputación de responsabilidad al menor en la España Contemporánea”, en MONTIEL, Luis y PORRAS, Isabel (Coord.), *De la responsabilidad individual a la responsabilidad de la víctima. El papel del paciente en la prevención de la enfermedad* Ed. Doce Calles, Aranjuez, 1997.

BALLESTER AÑON, Rosa, “El niño en la medicina española: tradición y medicalización”, *Jano*, 662, pp. 787-796, 1985.

BALLESTER AÑON, Rosa y PERDIGUERO GIL, Enrique, “La infancia como problema y como valor en las luchas sanitarias de principios de siglo”, *Dynamis* 15, 1995, pp. 177-192.

BALLESTER AÑON, Rosa y PERDIGUERO GIL, Enrique, “Salud e instrucción primaria en el ideario regeneracionista de la Institución Libre de Enseñanza”, *Dynamis* 18, 1998, pp. 25-50.

BARBERO, Roldán, *Historia de la prisión en España*, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988.

BORDERIES-GUEREÑA, Josette, “Niños y niñas en familia”, en BORRAS LLOP, José María (ed.), *Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp.19-106.

BORRÁS Llop, José María (dir.), *Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996.

BORRAS LLOP, José María, "Actitudes patronales ante la regularización del trabajo infantil, en el tránsito del siglo XIX al XX. Salarios de subsistencia y economías familiares", *Hispania. Revista Española de Historia*, 1995, 190, pp. 629-644.

BORRAS LLOP, José María, "El trabajo infantil en la industria de Barcelona según el Censo Obrero de 1905", *Historia Social*, 1999, 33, pp.25-48.

BORRAS LLOP, José María, "Antes de nacer sabíamos trabajar. Absentismo escolar y trabajo infantil en Villamanta (1930-1933)", *Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural*, n. 20, abril 2000, pp.169-194.

BORRAS LLOP, José María, “El trabajo infantil en el mundo rural español, 1849-1936. Género, edades y ocupaciones”, en J.M. Martínez Carrión (ed.), *Niveles de vida y bienestar en la España rural, Siglos XVIII-XIX*, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2001, pp.373-413.

BORRAS LLOP, José María, “Mercado laboral, escolarización y empleo infantil en una comarca agrícola e industrial (el Vallès Occidental, 1881-1910)”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, vol.24, 2002, pp. 233-262.

BORRAS LLOP, José María, “Aprender trabajando. La actividad de niñas y niños en tierras de regadío (La Vega del Tajuña a comienzos del siglo XX)”, en C. Sarasúa y L. Gálvez, *¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo*, Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, pp. 157-183.

BORRAS LLOP, José María (ed.), *El trabajo infantil en España, 1700-1950*, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona-Icaria Editorial, Barcelona, 2014.

CASANOVA, Julián: *La historia social y los historiadores*: Biblioteca de Bolsillo, Crítica, Barcelona, 2003.

COHEN AMSELEM, Arón, “La infancia entre la vida y la muerte. La mortalidad de los niños”, en BORRAS LLOP, José María (ed.), *Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp.107-148.

CEA D'ANCONA, M^a Ángeles, *La justicia de menores en España*, CIS-Siglo XXI, Madrid, 1992.

CIEZA GARCÍA, José Antonio, *Mentalidad social y modelos educativos. La imagen de la infancia, la familia y la escuela a través de los textos literarios (1900-1930)*, Universidad de Salamanca, 1989.

DÁVILA BALSERA, Paulí y otros, “La protección infantil y los Tribunales Tutelares de Menores del País Vasco”, *Historia de la Educación* 10, 1991, pp. 227-252.

DÁVILA BALSERA, Paulí, “El largo camino de los derechos del niño: entre la exclusión y la protección”, en PADILLA, A., *La infancia en los siglos XIX y XX; Discursos e imágenes, espacios y prácticas*, Universidad autónoma de Morelos, México, 2008, pp. 71-111.

DE LEO, Gaetano, *La justicia de menores*, Teide, Barcelona, 1985.

DE MAUSE, Lloyd (ed.), *The History of Childhood*, Psychohistory Press, Nueva York, 1977. Traducción española: *Historia de la infancia*, Alianza Editorial, Madrid, 1982.

DONZELOT, Jacques, *La policía de las familias*, Pre-textos, Valencia, 1998.

ESCOLANO BENITO, Agustín y HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, *Cien años de escuela en España (1875-1975)*, Ediciones Diputación de Salamanca, Salamanca, 1990.

ESTEBAN MATEO, León, *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Nómina bibliográfica (1877-1936)*. Universidad de Valencia, Valencia, 1976.

FENECH, Miguel, *Derecho Procesal Penal*, vol. I, Labor S.A., Barcelona, 1952.

FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro, “Perspectiva histórica de la protección a la infancia en España”, *Historia de la Educación*, 3, 1984, pp. 191-213.

FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina y LORENZO NAVARRO, Luis, *El niño y el joven en España (siglos XVIII-XX). Aproximación teórica y cuantitativa*, Anthropos, Barcelona, 1989.

FINKELSTEIN, Bárbara, “La incorporación de la infancia a la historia de la educación”, *Revista de Educación*, 1986, 281, pp. 19 y ss.

GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Esther, *Delincuencia juvenil y control social. Estudio descriptivo de la actuación del Tribunal Tutelar de Barcelona*, Círculo Editor Universo, Barcelona, 1981.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Montserrat, “Los Tribunales para niños. Creación y desarrollo”, *Historia de la Educación* 18, 1999, pp. 111-125.

GONZÁLEZ ZORRILLA, Carlos, “Jóvenes y control social: la ideología del tratamiento”, en DUCE, M^a del Rosario (coord.), *Menores. La experiencia española y sus alternativas*, Universidad Autónoma, Madrid, 1987.

GUEREÑA, Jean Louis, “Infancia y escolarización”, en BORRAS LLOP, José María (dir.): *Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp.347-458.

HUERTAS, Rafael, “Niños degenerados. Medicina mental y regeneracionismo en la España de cambio de siglo”, *Dynamis*, 18, 1998, pp. 157-179.

LÓPEZ ALONSO, Carmen, (Coord.), *De la beneficencia al bienestar social*, Siglo XXI, Madrid, 1986.

LOZANO LARES, Francisco, *La regulación del trabajo de los menores y jóvenes*, Mergablum, Sevilla, 2000.

MARTÍN OSTOS, José, *Jurisdicción de menores, naturaleza y competencia*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1993.

MARTÍNEZ VIVOT, Julio José, *Trabajo de menores y de mujeres*, Ediciones Depalma, Madrid, 1964.

MARTÍNEZ PÉREZ, José, “Moldeando la vida del trabajador: la educación para la higiene y la seguridad social en España 1922-1936”, en MONTIEL, L. y PORRAS, I.

(Coord.), *De la responsabilidad individual a la responsabilidad de la víctima. El papel del paciente en la prevención de la enfermedad* Ed. Doce Calles, Aranjuez, 1997.

MÍNGUEZ ÁLVAREZ, Constancio, *La vida del niño entre la familia y la escuela (Imágenes de familia, escuela e infancia, reflejada en las novelas españolas, publicadas entre 1875-1900)*, Ediciones Edinford, Málaga, 1992.

MINISTERIO DE TRABAJO, *El trabajo de menores: disposiciones*, Servicio de Publicaciones, Madrid, 1973.

MONTERO PEDRERA, Ana María, “Las escuelas de reforma en España y la reeducación de menores: una mirada retrospectiva en sus orígenes”, en María Reyes Berruezo Albéniz y Susana Conejero López (Coord.), *El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación*, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009/, Vol. 2, 2009, pp. 245-256.

MONTOYA MELGAR, Alfredo, *Ideología y lenguaje en las leyes laborales españolas (1873-1978)*, Civitas, Madrid, 1992.

MORENO MARTÍNEZ, Pedro Luis, *Educación, salud y protección a la infancia*, Ed. Aglaya, Cartagena, 2000.

MOREU CALVO, Ángel C., “La recepción de las doctrinas correccionalistas en España. Políticas educativas y metodologías psicopedagógicas”, *Revista de Educación*, 340, mayo-agosto 2006, pp.755-785.

MURUA CARTÓN, Hilario y DÁVILA BALSERA, Paulí: “La protección de la infancia en Bizkaia a través de la revista *Pro Infantia*”, en María Reyes Berruezo Albéniz y Susana Conejero López (Coord.) *El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación*, Pamplona-Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009 /, Vol. 2, 2009, p.p. 159-174.

NUÑEZ GIL, Marina, “Beneficencia y educación en los inicios del siglo XX”, en *Escolarización y sociedad en la España contemporánea (1808-1970)*, Universidad de Valencia, Valencia, 1983, pp.219-230.

PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido, *Redimir la inocencia. Historia, marginación infantil y educación protectora*. Univèrsitat de Valencia, Valencia, 2002.

PALACIO MORENA, José Ignacio, *La institucionalización de la reforma social en España (1883-1924. La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales*, Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1998.

PALACIOS GONZÁLEZ, Jesús, *Menores marginados. Perspectiva histórica de su educación e integración*, Ed. CCS, Madrid, 1997.

PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, *Derecho del trabajo e ideología*, Tecnos, Madrid, 1995.

PASAMAR ALCUDIA, Gonzalo, *La Historia Contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos*, Síntesis, Madrid, 2000.

PERDIGUERO GIL, Enrique, “El fenómeno del pluralismo asistencial: una realidad por investigar”, *Gaceta sanitaria: Órgano oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria*, Vol. 18, Nº. Extra 1, 2004, pp. 140-145.

PLATT, Anthony, M., *Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia*, Siglo XXI, Madrid, 1982.

RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel: “El trabajo de los menores. En torno al artículo 6”. En VV.AA.: “El Estatuto de los Trabajadores veinte años después”, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, nº 100, 2000, pp. 291 y ss.

ROCA CHUST, Tomás, *Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España*, Consejo Superior de protección de Menores, Madrid, 1968.

RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban, “Una medicina para la infancia”, en BORRAS LLOP, José María (ed.): *Historia de la infancia en la España contemporánea, 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp.149-226.

RODRIGUEZ OCAÑA, Esteban, “La construcción de la salud infantil. Ciencia, medicina y educación en la transición sanitaria en España”, *Historia Contemporánea*, 18, 1998, pp. 19-52.

ROLDÁN BARBERO, Horacio, *Historia de la prisión en España*, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1988.

RUIZ RODRIGO, Cándido, *Protección a la infancia en España: reforma social y educación*, Universitat de València, Valencia, 2004.

RUIZ RODRIGO, Cándido y PALACIO LIS, Irene, *Higienismo, Educación ambiental y Previsión escolar. Antecedentes y prácticas de saberes y competencias. Perspectiva histórica.*, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2001.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Vicente, *La exploración psicológica en las casas de observación de los Tribunales Tutelares de Menores (1918-1943)*, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996.

SÁNCHEZ –VALVERDE VISUS, Carlos, *La Junta de Protección a la Infancia de Barcelona, 1908-1985. Aproximación histórica y Guía Documental de su Archivo*, Universitat de Barcelona, 2007.

SANTOLARIA SIERRA, Félix, *Marginación social y educación. Historia de la Educación Social en la España Moderna y Contemporánea*, Ariel, Barcelona, 1997.

SANTOLARIA SIERRA, Félix, “La Junta de Protección de la Infancia de Barcelona: la primera etapa (1908-1909)”, *Historia de la Educación*, 14, 2009, pp. 75-91.

SOTO CARMONA, Álvaro, *El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936)*, Anthropos, Barcelona, 1989.

SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando, *Mujeres y menores ante el Contrato de trabajo*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967.

TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro, “La infancia delincuente y abandonada”, en BORRÁS LLOP, J. M. (ed.), *Historia de la Infancia en la España Contemporánea. 1834-1936*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pp. 461-513.

TIANA FERRER, ALEJANDRO, “Educación obligatoria, asistencia escolar y trabajo infantil en España en el primer tercio del siglo XX”, *Historia de la Educación*, 6, 1987, pp.43-59.

VV.AA, *Educación y marginación social*, Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994.

VARELA, Julia y ÁLVAREZ-URÍA, Fernando, *Arqueología de la escuela*, La Piqueta, Madrid, 1991.